



**UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO**



MAESTRÍA EN DERECHO

**“INEFICACIA DE LA CRIMINALIZACION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR – Ley N° 30364”**

TESIS

**PRESENTADA PARA OBTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

AUTOR:

Abog. MARY ISABEL COLINA MORENO

ASESOR:

Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

Lambayeque - Perú

2018

**INEFICACIA DE LA CRIMINALIZACION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR – Ley N° 30364.**

Abog. MARY ISABEL COLINA MORENO

Autora

Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

Asesor

Presentada a la Escuela d Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,
para optar el Grado Académico de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN
CIENCIAS PENALES.

Dr. Miguel Arcángel Arana Cortez
PRESIDENTE

Dr. Oscar Vélchez Vélez
SECRETARIO

Dr. Ricardo Ponte Durango
VOCAL

Setiembre, 2018.

DEDICATORIA

Investigación dedicada a la familia peruana, que enfrenta este flagelo social al interior de su hogar, sin perder la esperanza de alcanzar una cultura de paz y formación en valores para sus hijos.

AGRADECIMIENTO

A mi madre, Isabel, por haberme dado la vida y guiar mi camino profesional.

A mi esposo, Walter, por su apoyo constante en esta investigación.

A los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sabios maestros autores de mi formación profesional y colegas de trabajo, dignos de admiración.

INDICE

Pág.

Dedicatoria.....	3
Agradecimiento.....	4
Resumen.....	9
Abstract.....	10
Introducción.....	11

CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. Ubicación del Problema.....	14
2. Surgimiento del Problema.....	17
3. Formulación del Problema.....	22
4. Justificación e Importancia del Estudio.....	22
5. Objetivos.....	24
6. Hipótesis.....	25
7. Variables.....	25
8. Método De Investigación.....	26
9. Técnicas Utilizadas.....	26
10. Tipo De Investigación.....	27

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

Parte I: Antecedentes Históricos y Doctrinarios

1.- Antecedentes Históricos:.....	28
1.1.- El Patriarcado, como Fundamento de la Violencia Intrafamiliar.....	35
1.2.- En el Perú:.....	41
2.- Conceptos Generales.....	43
2.1.- Definición de Violencia.....	43
2.2.- El Agresor: Características Personales.....	50
2.3.- ¿Porqué Agreden?.....	53
2.3.1. Factores Socio – Culturales.....	53
2.3.2.- Factores Biológicos.....	54
2.3.4.- Factores Psicosociales.....	55
2.3.5.- Factores Psicopatológicos.....	57
2.3.6.- Factores Intrafamiliares.....	58

2.4.-Aspectos que Favorece a la Supervivencia de la Violencia Doméstica.....	61
2.5.- Tipos de Violencia:	63
2.6.- Etapas de la Violencia Familiar	69
2.6.1.- Fases de la Violencia Doméstica:.....	70
2.6.2.- Aspectos Relacionados con la Intensidad de la Violencia Familiar.....	70
2.7.- Consecuencias de la Violencia Familiar.....	71
2.7.1. Físicas	71
2.7.2. Psicológicas.....	73
2.7.3.- Testigos de la Violencia Familiar	74

Parte II: La Violencia Doméstica en el Derecho Comparado

1.- Evaluación de la Importancia Internacional de la Violencia Doméstica.....	76
2.- Regulación Legal de la Violencia Doméstica en los Países Latinoamericanos	78
2.1. En Argentina	78
2.2. En Chile.....	80
2.3. En Colombia.....	82
2.4. En Ecuador.....	85
2.5. En Costa Rica.....	86
3.- La Violencia Doméstica y su Tratamiento En Europa.....	88
3.1.- Alemania.....	89
3.2.- Austria.....	91
3.3.- Bulgaria.....	93
3.4.- Croacia.....	95
3.5.- Holanda.....	97
3.6.- España.....	98
3.7.- Letonia.....	101
3.8.- Polonia.....	103
3.9.- Portugal.....	105
3.10.- Rumania.....	107
3.11.- Noruega.....	108
3.12.- Islandia.....	113

CAPITULO III: NUEVO PROCESO PENAL PARA DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR - LEY N° 30364

1.- Competencia.....	116
2.- El Proceso Penal.....	117
2.1.- Denuncia.....	117
2.2.- Flagrancia.....	118
2.3.- Competencia de la Policía Nacional.....	119
2.4.- Actuación del Juzgado Competente.....	121
2.5.- Actuación del Ministerio Público.....	122
3.- Medidas Cautelares y de Protección.....	123
3.1.- Medidas Cautelares.....	123
3.2.- Medidas de Protección.....	124
3.3.- Medidas de Protección Social.....	126
3.4.- Registro de Victimas con Medidas de Protección.....	126
4.- Remisión del Expediente.....	127
5.- Actuaciones de los Juzgados de Paz.....	128
6.- Sentencia.....	129
7.- Aspectos Positivos y Negativos.....	131

CAPITULO IV: Hallazgos, Resultados y Análisis

1.- Poder Judicial.....	134
<u>Primer Hallazgo:</u> Plazo desde la denuncia policial hasta audiencia de medidas de protección.....	135
<u>Segundo Hallazgo:</u> Asistencia de las partes a la audiencia de medidas de protección en el 6° juzgado de familia de Chiclayo (2° Semestre Año 2016).....	138
<u>Tercer Hallazgo:</u> Quiénes son las víctimas de violencia familiar.....	140
<u>Cuarto Hallazgo:</u> Otorgamiento de medidas de protección.....	142
<u>Quinto Hallazgo:</u> Quiénes son los agresores de mayor frecuencia.....	144
<u>Sexto Hallazgo:</u> Tipo de maltrato denunciado.....	146
<u>Sétimo Hallazgo:</u> Resultados de los 59 casos derivados por faltas al Juzgado de Paz Letrado de la Victoria, Año 2016-2017.....	148
2.- Ministerio Público.....	
<u>Primer Hallazgo:</u> Actuación ineficaz de las fiscalías penales en casos de violencia familiar.....	151
3.- Entrevista a operadores del derecho (Jueces, Fiscales, Asistentes Judiciales).....	155

CAPÍTULO V: PROPUESTAS DE NUEVAS ALTERNATIVAS Y ACTUACIONES EN LA LEY N° 30364

1.- Factores que contribuyen a la ineficacia de la legislación especial frente a la violencia familiar en nuestro país	164
1.1.- La educación en valores en la familia.....	164
1.2.- Cultura machista de nuestra sociedad	166
1.3.- Falta de humanización en los operadores administrativos y jurídicos.....	170
2.- Propuestas de actuaciones que deberían implementarse para un eficaz enfrentamiento a la violencia familiar como política social del Estado	172
2.1.- Incorporación de cursos de educación en valores para hijos y padres, en los centros educativos públicos y privados.....	172
2.2.- Programas de educación, orientación y rehabilitación psicológica para víctimas de violencia familiar	175
2.3.- Implementación de policía especializada en asuntos familiares.....	177
2.4.- Participación eficaz de los órganos jurisdiccionales, con una propuesta de reforma en el proceso judicial especial para procesos de violencia familiar.....	179
2.4.1.- Denuncias ante policía nacional y fiscalías de familia/mixtas.....	183
2.4.2.- Otorgamiento de medidas de protección por fiscalías de familia.....	183
2.4.3.- Calificación de la denuncia por violencia familiar	185
2.4.4.- Competencia en última ratio de los jueces penales en casos de violencia familiar.	187
Conclusiones	190
Recomendaciones.....	195
Referencias Bibliográficas.....	197
Anexos	202

RESUMEN

La violencia familiar es un problema que preocupa tanto a los legisladores como a los operadores de justicia que buscan permanentemente nuevas formas de solucionarlo. Las estadísticas no favorecen: en el año 2015, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 58,429 casos de mujeres que fueron víctimas de este tipo de abuso, y se espera una suma similar o mayor a finales del 2017. Ante esta realidad, en noviembre del 2015 el Gobierno promulgó la Ley N° 30364 (Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar), cuyo contenido sustantivo ha recibido buenas críticas debido a sus importantes avances en relación con el ámbito de protección que proporciona el Estado frente a todo tipo de violencia ejercida contra la mujer (física, psicológica, sexual y hasta económica), así como a otros grupos vulnerables de la familia. Sin embargo, también contiene serias inconsistencias procesales que de ser aplicadas por los órganos estatales podrían conllevar a la violación de garantías constitucionales que rigen el debido proceso y a la falta de sanción de un agresor y por ende, desprotección de la víctima.

Para ello, se propone que la Ley N° 30364 (ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), modifique las facultades conferidas a la Policía Nacional, a los juzgados y Fiscalía, con el debido control de plazos y control en ejecución de sentencia; más aún con la propuesta de un nuevo modelo procesal exclusivo para violencia familiar; asimismo, proponemos un conjunto de acciones en diferentes esquemas sociales para prevenir futuros actos de violencia, que puedan contribuir a erradicar progresivamente incidencias de maltrato intrafamiliar.

ABSTRACT

Family violence is a problem that concerns both legislators and justice operators seeking to permanently new ways to solve it. The statistics do not favor: by 2015, the national programme against family violence and Sexual of the Ministry of women and vulnerable populations (MIMP) recorded 58,429 cases of women who were victims of this type of abuse, and expected a sum similar or more at the end of this 2016.¹ faced with this reality, in November of 2015 the Government promulgated Law No. 30364 (law to prevent, punish and eradicate violence against women and members of the family group), whose substantive content has received critical acclaim due to its significant progress with regard to the scope of protection provided by the State against all types of violence against women (physical, psychological, sexual and even economic), as well as to other vulnerable family. However, it also contains serious inconsistencies due to be enforced by the State bodies could lead to the violation of guarantees and constitutional principles governing due process and lack of punishment of an offender and therefore, check out the victim.

For this purpose, it is proposed that the law N ° 30364 (law to prevent, punish and eradicate violence against women and the members of the family group), modify the powers conferred on the national police, the courts and public prosecutor's Office, with due control time and control on execution of sentence; even more so with the proposal of a new procedural model exclusive to family violence; also, to propose a set of actions in different social schemes to prevent future acts of violence, which can help progressively eliminate incidents of domestic abuse.

INTRODUCCION

Publicada el 23 de noviembre de 2015, la Ley N° 30364 consta de 47 artículos divididos en cuatro títulos, así como dos disposiciones complementarias y derogatorias. En la segunda de estas últimas, se dispuso la derogación de la Ley N° 26260, es decir, la antigua Ley de Protección contra la Violencia Familiar. Esta ley establecía un procedimiento mediante el cual las denuncias verbales o escritas eran recibidas de forma preliminar por la Policía Nacional del Perú (PNP), ente que luego de una investigación preliminar procedía a emitir un atestado o un parte, lo cual dependía de si luego de las investigaciones preliminares se concluía la existencia de un caso de violencia familiar atribuida a una determinada persona o, por el contrario, no se encontraba responsabilidad alguna en el investigado. En el primero de los casos, la Policía Nacional del Perú remitía el atestado, de ser pertinente, al juez de paz o al fiscal provincial, quien tenía la potestad (artículo 10° de la derogada ley) de dictar las medidas de protección inmediatas que garantizaran la integridad física, psíquica y moral del agraviado o agraviada. Posteriormente, si era menester solicitar una medida cautelar, era obligatorio recurrir al juez de familia, quien podría dictar medidas anticipadas según el caso y, en especial, medidas de asignación anticipadas de alimentos (artículo 11 de la derogada ley). Finalmente, la Ley N° 26260 estableció la competencia del juez de familia para conocer las pretensiones sobre violencia familiar vía proceso único, en concordancia con lo dispuesto en el Código del Niño y de los Adolescentes (artículo 20 de la referida ley derogada).

La presente investigación, tiene como propósito general, determinar qué tan eficaz viene siendo el nuevo proceso penal implementado por Ley N° 30364, incorporando como agravante las lesiones que provengan de una violencia familiar, durante el periodo 2016 a 2017 en el distrito de Chiclayo, plazo periodo suficiente en el que podemos revisar si estamos revertiendo la incidencia de violencia familiar; si estamos sancionando efectivamente a los agresores; y lo más importante, si esta ley contribuye en la educación para prevenir actos futuros de violencia familiar. El problema de violencia intrafamiliar o violencia doméstica como se le conoce comúnmente, no distingue esferas sociales, edad, sexo; sus efectos se reflejan mediante diferentes modalidades ejercidas en el seno del hogar llegando a repercutir

en toda la sociedad; por lo tanto, este problema debe de ser erradicado desde sus causas más determinantes. La elaboración de este trabajo consta de cuatro capítulos, los cuales están estructurados de la siguiente manera:

En el capítulo uno, se plantea la definición del problema, la justificación, delimitación del problema y luego procedemos con el objetivo general, específicos y finalmente la metodología que se utilizó: determinación del universo, muestra y sistema de hipótesis; dentro de esta se formula la hipótesis y su verificación. Así como los instrumentos y técnicas de investigación, y finalmente la tabulación y análisis de resultados, en el que es comprobada la hipótesis. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico y conceptual partiendo de la premisa que la violencia intrafamiliar, sus antecedentes históricos, doctrinarios y el tratamiento legal que se ha venido implementando en América Latina y en Europa, tratando de determinar el común denominador y recogiendo los principales aportes de los países que han podido enfrentar y disminuir increíblemente las cifras de toda clase de violencia desde familiar hasta social.

El tercer capítulo es el contexto jurídico procesal de la violencia intrafamiliar conforme a la Ley N° 30364 y su reglamento, para determinar si se cumplen los plazos establecidos, desde la interposición de la denuncia policial hasta la ejecución de la sentencia; revisando los procesos tramitados en el año 2016, en los Juzgados de Familia de Chiclayo. Ese capítulo está reforzado con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, redactados en el Capítulo V, en el cual se han estudiado los datos obtenidos en las diferentes instituciones que tratan a la violencia familiar, como el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, de lo cual se ha obtenido una valiosa información con la que se demuestra que los casos de violencia familiar van creciendo en forma alarmante y más aún, que las actuaciones procesales reguladas por la Ley N° 30364, adolecen de falta de celeridad procesal, no existen suficientes elementos probatorios para incoar una denuncia penal, archivamientos en demasía por falta de cuantificación de las lesiones psicológicas; y en algunos casos archivamientos por incomparecencia de las partes. Con dichos resultados demostramos la ineficacia de la criminalización actual sobre violencia familiar.

Finalmente, en el capítulo V, se ha establecido la necesidad de reformar el proceso casos de violencia familiar, incorporando dos opciones: cuando las lesiones configuren delito, deberán tramitarse en proceso inmediato; y cuando las lesiones no configuren delito, deberá tramitarse en proceso especial ante los Juzgados de Familia; asimismo, se propone implementar medidas especiales en la policía nacional para obtener una actuación inmediata. Pero la investigadora no se ha limitado a realizar propuestas de modificatorias al nuevo proceso penal; con el estudio del derecho comparado; se ha permitido proponer en líneas generales que planes estratégico debería imitar nuestro gobierno; tomando como modelos a países donde han logrado disminuir significativamente las cifras de violencia familiar y social; con la incorporación de programas educativos, sociales, laborales donde tienen como principales protagonistas a los padres, las escuelas y el estado; sin recurrir en la penalización exagerada de todos los conflictos sociales que se suscitan, viendo al derecho penal como una última ratio para su sociedad.

“INEFICACIA DE LA CRIMINALIZACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR – Ley N° 30364”

CAPITULO I ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA

Un tema recurrente y al cual se recurre con cierta frecuencia para enfrentar el problema de la violencia familiar fue su penalización, lo que desde el punto de vista de algunos autores, ayudaría a desterrar este flagelo social. Frente a ello existen opiniones discrepantes que consideran que un esfuerzo de reforma legislativa debería considerar diversos aspectos.

En tal sentido la presente investigación analiza los criterios socio-jurídicos y políticos a tomar en cuenta en la propuesta de una modificatoria al proceso penal de Violencia Familiar. A lo largo de esta investigación, se presenta la normativa actual al respecto, revisándose su pertinencia y eficacia real en nuestro contexto; posteriormente se evalúa eficacia de la nueva ley y su reglamento, su relevancia y en todo caso las acciones que debió acompañar a una propuesta de reforma.

Frecuentemente, la política social en el Perú toma una postura de LAISSEZ FAIRE, en relación con las organizaciones sociales preexistentes. Esto es visible especialmente en ámbitos tales como la familia y la comunidad local, donde el Estado se contenta la mayor parte de veces con dejar que cada una de estas instancias cuide de los suyos. Así que las reinterpretaciones, desde la cotidianeidad de los beneficiarios no necesariamente son tomadas en cuenta en el proceso de definición de las Políticas Sociales.

Frente a las manifestaciones de violencia, la respuesta que ofrece nuestro sistema legal resulta bastante limitada e ineficaz. A lo largo de nuestra historia legislativa, la reacción estatal a este problema se ha focalizado en el agravamiento de pena para el agresor. No obstante, de la década de los 90s para

adelante se vienen realizando esfuerzos importantes de parte del Estado y de la sociedad civil por enfrentar el problema de la violencia familiar.

El Estado peruano ha reconocido expresamente lo alarmante, grave y perjudicial de este problema y se ha pronunciado ya en el ámbito interno, con el establecimiento de políticas públicas a través de la Ley 26260 publicada el 24 de diciembre de 1993. De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de protección frente a la violencia familiar, Artículo tercero: Es política permanente del Estado peruano la lucha contra toda forma de violencia familiar, debiéndose desarrollarse con este propósito acciones orientadas a encaminar al fortalecimiento de las instituciones.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector del sistema de atención integral al niño y al adolescente, la mujer, el adulto mayor y sus respectivas secretarías, es la encargada de elaborar, coordinar y ejecutar las políticas y hacer el seguimiento de programas y proyectos que aseguren un adecuado desarrollo psicosocial de las víctimas de violencia familiar. Realiza una labor constante dirigida a lograr la más amplia difusión de la legislación sobre la violencia familiar, a través de:

- Centro de emergencia de atención a la mujer.
 - Implementación de módulos de capacitación a distancia.
 - Implementación del plan piloto de conciliación extrajudicial.
 - Creación de casas de refugio para víctimas de violencia.
 - Módulo piloto de atención contra la violencia familiar "Emergencia mujer". Líneas telefónicas de atención contra la violencia familiar.
- El módulo "Emergencia Mujer" ofrece 7 servicios de atención: Comisaría de la mujer, asesoría legal, conciliación, asesoría psicológica, asistencia social, médico legal y fiscal.

Sin embargo, a pesar de las diversas instituciones creadas para tal fin, sólo entre los meses de marzo 1999 y enero 2000 en el Módulo de Emergencia Mujer (PROMUDEH) fueron atendidos en Lima 9,200 casos de violencia familiar. Según estudios realizados recientemente por el PROMUDEH, el 46% de los hogares a nivel nacional (Perú) son violentados y el 28% de los mismos

son mantenidos por mujeres. Asimismo acuden diariamente a denunciar de 200 a 250 mujeres maltratadas, dejando abierto el consiguiente maltrato a los niños, adolescentes y adultos mayores como parte del círculo vicioso, haciendo mención que los maltratos existen en todas nuestras clases sociales.

Más de 100 mil casos atendieron DEMUNAs en 1999 con las conciliaciones. Las Estadísticas señalan que el 40% de los casos son de denuncias por alimentos y maltrato, los casos de violencia familiar alcanzan el 20% y el de los niños no reconocidos llega al 12%, 55 de cada 100 adolescentes sin educación han estado alguna vez embarazadas, y 47 de cada 100 ya son madres (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, 2009).

Un estudio realizado en 1991 estima que en la década del 80 (1980-1989), en Lima, 3 de cada 10 mujeres en relación de pareja habrían logrado registrar en dependencias policiales; denuncias por faltas contra la vida, el cuerpo y la salud cometidas por el varón con quien tenían o habían tenido vínculo conyugal. A nivel nacional, un promedio de 4,500 violaciones son denunciadas normalmente ante la Policía Nacional. El Ministerio Público; a través del Fiscal Provincial de Familia, desarrolla trámites a las peticiones que se formulen por la víctima de violencia. La intervención Judicial es de competencia del Juez Especializado en familia. En suma, las Políticas de lucha contra la Violencia Familiar en el Perú han orientado sus acciones a partir de la promulgación de leyes contra la Violencia Familiar y la vigencia y reconocimiento al código de los Derechos del niño y del adolescente, de la mujer y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Alarmante cifra, en el año 2014, el CENTRO DE EMERGENCIA MUJER, atendió 50,485 casos de violencia familiar, 88% de las víctimas han sido mujeres. Resultados de los cuales, nuestra región no se encuentra exento, ya que también ha denotado una cifra creciente para el último año 2014; según los informes del INEI (INFORME TEMÁTICO 129/2014-2015, 2015) .

Estas políticas sociales de lucha contra la violencia familiar se ubican dentro de políticas de servicios sociales, no obstante, no existe una tipología

universalmente aceptado. Sin embargo, frente a este alarmante problema que trasciende nuestras fronteras nacionales, en el ámbito internacional se han venido desarrollando, discutiendo y materializando una serie de propuestas encaminadas a erradicar diversas manifestaciones de violencia que se producen en contra de las mujeres (víctimas más frecuentes), niños y adolescentes. Las Convenciones Interamericanas son compromisos entre los Estados Americanos, miembros de la OEA para la ejecución común de un plan u obra de interés común. Su importancia radica en que constituyen fuente de obligación para los Estados y, para el caso peruano, son consideradas como fuente de interpretación de los Derechos fundamentales; entre ellos:

- La Convención Interamericana de para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o "Convención de Belén do Pará" (OEA).
- La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (ONU).
- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, suscrita por el Perú el 23 de Julio de 1981.
- UNICEF, organismo importante de mencionar, pues da financiamiento para el desarrollo de programas de prevención, rehabilitación, investigación y capacitación.
- Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el 20 de Noviembre de 1989, la comisión de los Derechos de los niños. El Estado peruano lo aprobó en Agosto de 1990.

2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA.

En el mes de noviembre del año 2015, el Poder Legislativo aprueba la dación de la **Ley N° 30364 - LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**; promulgada en el mismo mes, cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Frente a ello, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), organización regional que articula a personas y organizaciones feministas de América Latina y el Caribe, que busca aportar a la transformación social y a la construcción de democracias radicales, desde una perspectiva de interseccionalidad, que reconoce la diversidad cultural, étnico-racial, sexual y social, para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las mujeres; advirtió que las mujeres víctimas de violencia en Perú siguen siendo vulnerables debido a una inadecuada implementación de esta nueva ley, que fue promulgada para erradicar estas situaciones.

“Existe el riesgo de que la ley no se aplique adecuadamente, porque se ha generado una incertidumbre en los operadores de justicia sobre la implementación, como no hay capacitación de la norma, tenemos un Poder Judicial colapsado, una policía no sensibilizada, las denuncias de las víctimas podrían rebotar y salir del proceso”(CLADEM, 2015), señaló Jeannette Llaja, abogada del CLADEM, aun mes de su promulgación.

Hasta antes de la publicación del reglamento, los juzgados mixtos y de familia no tenían la capacidad de atender los casos como lo estipula la norma anterior, debido a su **carga procesal**, horarios de trabajo y el escaso personal con el que cuentan.

Otro problema clave es que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y servicios de defensa de víctimas del Ministerio de Justicia carecen de lineamientos para acompañar estos casos.

Uno de los cambios fundamentales que introduce la nueva ley es la agilización del proceso para que las víctimas accedan a la justicia. Ahora la denuncia pasa en solo 24 horas de la Comisaría al Juzgado de Familia o Mixto (antes debía cumplir el trayecto Comisaría-Fiscalía-Juzgado que duraba un año), y el juez debe ordenar una medida de protección para la víctima en un plazo máximo de 72 horas.

Sin embargo, desde un punto de vista jurídico penal, esta norma ha generado cierta controversia, principalmente en lo que se refiere a la nueva determinación de las lesiones psicológicas, las agravantes en las lesiones

graves, la declaración de menores como prueba anticipada en los delitos de trata de persona o violación de la libertad sexual, entre otros aspectos.

Tal es así que sobre el nivel de la lesión psicológica, la cual “debería ser determinado mediante un instrumento técnico oficial”, lo que se ha generado es una suerte de “norma penal en blanco”, ya que el recientemente incorporado artículo 124-B del Código Penal establece que el nivel de la lesión psicológica será determinado mediante una valoración realizada de conformidad con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial. El problema es que este instrumento técnico oficial no es una ley ni un decreto supremo ni una resolución, ni una norma del Estado con carácter impersonal, general y abstracto; es más bien una suerte de instrumento técnico donde se establecerían una serie de criterios para diferenciar las faltas, lesiones leves y lesiones graves, en este caso, psicológicas.

Sin esa precisión se puede generar problemas de constitucionalidad debido a que el sentido de esta norma penal va a estar determinado por un instrumento de carácter administrativo, porque este llamado “instrumento técnico oficial” puede ser que derive de una resolución administrativa interna, un documento interno de trabajo pericial o técnico; pero no va a tener el control al que se somete normalmente un proceso legislativo. Es muy genérico, muy vago, muy difuso. No nos otorga las garantías que exige el principio de legalidad que en materia penal es un principio básico y elemental.

Considero que el legislador no ha hecho un buen trabajo para determinar la agresión psicológica. Lo más aconsejable, en estos casos, es utilizar un sistema de *numerus apertus*, en el cual pueda contemplarse, por ejemplo, diez situaciones de casos de daños psicológicos, de tal manera que, por el número de situaciones concurrentes, pueda hablarse de lesiones leves, graves o incluso de faltas. Hubiera sido mejor que la propia ley otorgue criterios más específicos y mayores detalles (CORIA, 2015). Más aún porque esto va a determinar la vía procesal pertinente porque mientras las faltas se ven ante el juez de paz, los delitos se ven ante la fiscalía. Si no hay criterios claros para poder diferenciar; entonces, esto genera problemas procesales.

Tal es así, que la nueva Ley N° 30364, dispone literalmente en su artículo 15, que la Policía Nacional del Perú, ante el conocimiento o denuncia

de casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, debe poner los hechos en conocimientos de los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones dentro de las 24 horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado. Sin embargo, traslado al plano real, este dispositivo se cumple en forma parcial o incompleta; ya que, las tramitaciones internas para la formación de un atestado policial, requiere un plazo superior a 24 horas; siendo que en la realidad estas denuncias son remitidas a los Juzgados de Familia o Mixtos, en un plazo mayor a las 24 horas.

Asimismo, dentro del proceso judicial, esta Nueva Ley, dispone que en un plazo máximo de 72 horas, siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección; breve plazo que sólo queda plasmado en la ley, ya que hasta la fecha, los Juzgados de Familia y Juzgados Mixtos, programan una audiencia en un plazo habitual de 30 días; tiempo necesario que se debe esperar para que la víctima o denunciante presente su Certificado de Validez Mental, el cual es expedido por el Instituto Médico Legal; sin el cual, el Juzgado no procede a dictar ninguna medida de protección.

¿Qué pasaba hasta antes de la promulgación del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar?; dada la medida de protección, los Juzgados de Familia o Mixtos, remitían el expediente a las Fiscalías penales; y éstas, en la mayoría de denuncias por maltrato psicológico, procedían a archivar las denuncias por no configurarse como un tipo penal que constituya delito; quedando al desamparo el derecho de la víctima. Pero qué pasó con la entrada en vigencia del Reglamento?

El procedimiento no ha variado mucho; en el distrito Judicial de Lambayeque, los Juzgados de Familia de Chiclayo, una vez recibida la denuncia policial, programan la audiencia para dictar medidas de protección el 30 días, debido a la recarga procesal y esperando recabar el certificado médico legal, procediendo a emitir las medidas de protección las mismas que se emitían con la anterior ley; y, los procesos que son remitidos a los Juzgados de

Paz Letrados de Faltas, para programar la AUDIENCIA UNICA, donde los Juzgadores, por mandato legal, convocan a una audiencia, donde fijan el monto de la reparación civil y las medidas correctivas necesarias; siendo las mismas que se comprendían en las sentencias con la anterior ley. Por la naturaleza misma de los hechos, las lesiones físicas que requieran mayor a 20 días de descanso; constituyen lesiones leves que son materia de un delito y tienen su propia tramitación en el proceso penal.

Para el investigador, el principio de inmediatez queda únicamente establecido en la ley y su reglamento; más no en la práctica, ya que la variación del proceso no contribuye en PREVENIR, ERRADICAR O SANCIONAR LA VIOLENCIA FAMILIAR; por el contrario, lo único que ha realizado es quitar la carga procesal a los Juzgados de Familia o Mixtos y derivarlos a los Juzgados Penales de Paz Letrados, que tramitan los procesos de Faltas; con la misma lentitud en los plazos y la misma falta de control en la ejecución de sentencias por parte de la autoridad judicial; quedando en un saludo a la bandera la denuncia por violencia familiar.

En este contexto, el investigador muestra gran preocupación por la deficiencia y falta de política nacional de nuestro Estado y sobre todo de nuestro Poder Legislativo, al emitir un texto normativo que se contradice con su propio nombre; ya que esta ley NO PREVIENE NI ERRADICA la Violencia doméstica en nuestra sociedad; únicamente varía el proceso para SANCIONAR al agresor; sin embargo, no se controla si éste cumple o no la sanción; quedando nuevamente en desprotección la víctima de violencia doméstica; quien ni siquiera asiste a los programas de protección a víctimas, debido a la falta de sensibilidad, capacitación e inmediatez de los operadores administrativos asignados para estos programas.

Esta investigación, tiene como principal finalidad, determinar el grado de ineficacia de la Ley N° 30364 y su Reglamento, con el análisis de su texto normativo en comparación a la ley N° 26260, y principalmente con el estudio de las denuncias y expedientes tramitados al amparo de este nuevo texto normativo, desde enero del 2016, hasta la fecha; con el ánimo principal de

presentar propuestas de solución, en el ámbito procesal; para dotar a las instituciones (Policía Nacional, órganos jurisdiccionales, Centro de Emergencia Mujer) de facultades de actuación inmediata frente a un hecho de violencia doméstica, conforme al derecho comparado existente y que viene dando resultados en otras sociedades.

3. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿LA CRIMINALIZACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, MEDIANTE LA DACION DE LA LEY N° 30364, RESULTA EFICAZ POCESALMENTE PARA PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR AL AGRESOR EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR?

4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Es necesario señalar que frente al alto número de denuncias por violencia familiar contra mujeres y niños, siendo ésta situación una grave afectación de los derechos fundamentales vulnerando la salud de las víctimas, y por un clamor general de la población, se requiere de manera urgente analizar cuan eficaz e inmediata en la nueva Ley N° 30364, frente a la nueva figura de penalización de violencia doméstica; para determinar si es necesario su modificatoria o derogatoria.

Estando de acuerdo que al tratarse de un derecho fundamental afectado, desde la sociedad y el Estado se debe dar una respuesta adecuada que contribuya a desterrar este flagelo, y debemos investigar si es a través de la penalización de la violencia familiar que se logrará con este propósito.

En un estudio realizado por el Instituto de Defensa Legal, se demuestra cómo es que por ejemplo, a nivel de Juzgados de Paz Letrados, la visión de indiferencia y minimalización de la mujer como sujeto igual al hombre por parte de los operadores jurídicos en general (policías, jueces, abogados, etc),

hace que estos casos sean tratados dentro de los supuestos de faltas, lo cual tiene dos consecuencias claramente preocupantes: (1) la conciliación o transacción se da como si se tratase de cualquier supuesto de faltas, lo cual va contra el sentido de la norma de violencia familiar y de protección de la víctima frente a su entorno de violencia, (2) los casos de violencia familiar son invisibilizados por el sistema, perpetuando así las condiciones de los mismos.

De contrastar la hipótesis en forma positiva, propondría que ni los jueces de paz ni los jueces de paz letrados podrían ocuparse de este tipo de denuncias porque no tendrían ya la competencia para ello (debe recordarse que sólo pueden atender faltas y no delitos), dejando este asunto sólo a los jueces especializados en lo penal y jueces de familia. Sin embargo, si hacemos una revisión del número de estos magistrados existentes en el país, observaremos que sólo llegan a 551 (fuente: Academia de la Magistratura) y que además se encuentran ubicados mayoritariamente en ciudades medianas y grandes, con una serie de problemas de sobrecarga procesal, mientras que en el resto del territorio la administración de justicia corresponde a los jueces de paz y en menor medida a los jueces de paz letrados, sin considerar que en ciertas zonas rurales ni siquiera existe presencia estatal.

La posible consecuencia, no prevista por los legisladores, sería la de generar una situación de indefensión, donde las víctimas de violencia familiar que se encuentran en ámbitos rurales o en ciertas zonas urbano populares no tendrían la posibilidad de recurrir a una instancia jurisdiccional que les proporcione una respuesta efectiva a su demanda de justicia, ya sea porque geográficamente es inaccesible, porque económicamente es oneroso desplazarse, porque no entienden el idioma o porque culturalmente no los comprenden. De este modo, en lugar de haber contribuido a la solución del problema, se habría creado una nueva barrera de acceso a la justicia para la población que tradicionalmente ha estado excluida, y una situación de impunidad para los perpetradores de esta nueva figura delictiva.

Mientras haya violencia familiar que resolver, interrogantes que plantearse, dificultades que superar; el desafío estará ahí esperando que el

gobierno y demás actores de la sociedad, entre ellos, nosotros como operadores del derecho, decidimos integrarnos a buscar salidas imaginativas, pero viables de enfrentar el problema de la violencia familiar.

Pero entonces, la incertidumbre está en que los casos de violencia familiar no hayan disminuido significativamente durante los últimos años, o se hayan incluido y funcionado perspectivas de género que nos permitan decir que los niveles de desigualdad (y por tanto de indefensión) han disminuido, o que la conciencia sobre las relaciones familiares en general tiene un mayor grado de equidad que antes de que se promulgaran o modificaran las normas comentadas.

En realidad, el campo de acción que nos abren las normas es amplio, el problema radica en la ejecución de acciones o de acciones efectivas, es por ello que existiendo una normatividad favorable no se haya avanzado en términos cualitativos.

5. OBJETIVOS

5.1.OBJETIVO GENERAL:

- Determinar si, la criminalización de la violencia familiar, a través de la Ley N° 30364, contribuye eficazmente a la erradicación, prevención y sanción en los casos de violencia doméstica.

5.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Analizar los antecedentes históricos, doctrinarios y conceptuales sobre violencia familiar y/o doméstica en el ámbito nacional e internacional.
- Establecer en el derecho comparado, el tratamiento legal que se le otorga a la violencia doméstica, desde una perspectiva de inmediatez e intervención estatal.

- Determinar si se cumplen los plazos establecidos en la Ley N° 31364, desde la interposición de la denuncia policial hasta la ejecución de la sentencia; revisando los procesos tramitados en el año 2016, en los Juzgados de Familia de Chiclayo.
- Entrevistar a los operadores jurisdiccionales del distrito judicial de Lambayeque, para conocer los factores negativos y positivos en la aplicación de la Ley N° 30364.
- Establecer si existe necesidad de reformar y/o implementar medidas especiales de actuación para la policía nacional, fiscalías y centros de emergencia mujer, en los casos de violencia familiar.

6. HIPOTESIS

Si, la Nueva Ley N° 30364 (LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR), incorporaría facultades actuación inmediata a la Policía Nacional y Fiscalía, con el debido control de plazos y control en el desarrollo del proceso; entonces, se podría obtener una actuación y sanción eficaz para el agresor de violencia familiar contribuyendo a erradicar incidencias de maltrato intrafamiliar.

7. VARIABLES:

7.1.VARIABLE INDEPENDIENTE: Incorporación de facultades actuación inmediata a la Policía Nacional y Fiscalía, con el debido control de plazos y control en el desarrollo del proceso.

7.2.VARIABLE DEPENDIENTE: La reciente implementación de la Ley N° 30364 (LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.

8. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

La ciencia en su conjunto dispone de una amplia variedad de métodos para el conocimiento de la realidad. Esto se debe a que la naturaleza y la sociedad son diversas y complejas, por lo que, cada uno de sus procesos y fenómenos exigen un tratamiento metodológico especial para la investigación. Tratándose de los métodos aplicables a la investigación jurídica, relacionados específicamente con el estudio de la violencia familiar y la legislación que la regula, los métodos a emplearse serán: Los Métodos Generales de Investigación Científica, entre estos se incluye los llamados métodos Lógicos-Formales, como el **Análisis**, la **Síntesis**, el **Inductivo** y el **Deductivo**, al procesar y estudiar los datos obtenidos sobre los numerosos casos en todas las instituciones que intervienen en su tratamiento: MIMDES, Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, entre otros . También será utilizado el Método dialéctico, al partir de la realidad de los hechos sobre la alarmante situación de la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad.

Se utilizará, igualmente, el Método de análisis **histórico**, el que parte de la idea que todos los procesos y fenómenos sociales tienen su existencia en un determinado tiempo y espacio, pero a su vez, tienen un pasado, un presente y una proyección en el futuro, vale decir que se caracterizan por su dimensión histórica. Finalmente el método **comparativo**, ya que partimos de los modelos europeos que regulan la protección legal contra la violencia doméstica.

9. TÉCNICAS UTILIZADAS.

9.1.1. **REGISTRO DE DATOS:** Con el acceso a los expedientes que se vienen tramitando en el Sexto Juzgado de Familia y en los Juzgados de Paz Letrados, se obtendrá datos exactos sobre los plazos que se vienen otorgando al proceso de violencia familiar, consignando los datos en tablas de registros con indicadores como: plazo para derivar las denuncias policiales a los juzgados de familias / mixtos,

plazo para fijar fecha para audiencia de medidas de protección, que medidas de protección se otorgan, plazo para derivar el expediente a Fiscalía, plazo para derivar el expediente a juzgado penal o Juzgado de Paz Letrado.

9.1.2. Se realizarán encuestas dirigidas a los operadores de justicia (jueces y fiscales), para conocer su opinión respecto a la implementación de la Ley N° 30364, respecto a su eficacia e inmediatez en comparación a la Ley N° 26260.

9.1.3. Se solicitará el número de ingresos de procesos de violencia familiar a los Juzgados de Familia de Chiclayo, para conocer la incidencia de denuncias; asimismo, se contrastará con el número de sentencias emitidas a la fecha, para determinar la inmediatez en el pronunciamiento jurisdiccional.

10. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Debido a la naturaleza del problema planteado, estamos frente a una investigación socio jurídica; ya que nuestro objeto de estudio son los fenómenos sociales denominados VIOLENCIA DOMESTICA, VIOLENCIA FAMILIAR o VIOLENCIA DE GENERO, que se generan en nuestra sociedad. Además, se analizará la interacción que existe entre esta realidad empírico social y el derecho positivo o universo normativo en nuestro país.

La descripción y análisis que se desarrollará en esta investigación, tendrá como finalidad determinar la eficacia de la reciente Ley N° 30364, entrada en vigencia en el mes de diciembre del año 2015; la cual busca sancionar penalmente al agresor; ya que a la fecha, los administradores de justicia (jueces y fiscales), vienen encontrando incongruencias en la aplicación de la norma; dejando en desprotección a la víctima de violencia familiar.

CAPITULO II:

MARCO CONCEPTUAL

PARTE I

ANTECEDENTES HISTORICOS Y DOCTRINARIOS

1. ANTECEDENTES HISTORICOS:

En la antigüedad hubo tres maneras de enfocar la violencia familiar: *Legítima*, se basaba en un poder adquirido es decir, hacen referencia a la supremacía en fortaleza física y mental que el jefe de familia tenía sobre los miembros de su familia y conservado en el Tiempo; ya que aun se puede observar en nuestra sociedad moderna que todavía existe estos estereotipos. *Legitimada*, se basaba en el poder de la ley, la costumbre y la jurisprudencia que otorgaban diversos poderes a los representantes familiares para corregir, educar, administrar los bienes, representarlos, auxiliarlos, dirigirlos etc. a los que se encontraban bajo su dominio o poder. Un caso es el pater- familias en Roma donde ejercía a una triple autoridad; la de padre, rey y sacerdote. *Ilegítima*, Se basaba en el rechazo a todas las formas de violencia familiar a través de los edictos de los magistrados o senadoconsultos, los códigos como los de Justiniano, Hermogeniano, Gregoriano, Teodosiano, las Constituciones Imperiales (edictos, decreta y mandatas), la costumbre. Hoy se sigue manteniendo esta línea a través de los tratados, convenciones, pactos, protocolos, declaraciones, etc. sobre los derechos humanos, hoy globalizado. Cabe señalar que en Roma no existió una ley particular que restringiera la violencia de poder dentro de la familia.

El cristianismo reforzó el principio de sujeción forzosa de la mujer. Según san Pablo debía estar subordinada, y temer al marido. En uno de los documentos más antiguos de la iglesia católica, el DECRETUM (1140), prevalecía el derecho del marido de controlar a la esposa a pesar del principio

de igualdad de todas las almas de Dios. El relato bíblico de que Eva tentada por el demonio, indujo a Adán a pecar, proclamó la inocencia del varón y la culpabilidad de la mujer, quien por ello fue condenada a estar sujeta eternamente al poder del marido. El Nuevo Testamento no varió mucho tal situación. Pretendía la pureza del espíritu en contraposición a los deseos de la carne, representados por el sexo y matrimonio. Por este motivo, el matrimonio era considerado como un estado indeseable en el que caían solamente aquellos que no podían controlar sus apetitos sexuales. Debíó transcurrir un tiempo antes de que la Iglesia santificara, el matrimonio y el amor marital y lo convirtiera en sacramento. Al predicar el confinamiento de la mujer en el hogar, la religión se encargó de reforzar el orden del patriarcado. Durante la Edad Media, la mujer adquirió el carácter de símbolo de poder y honor del hombre. Era canjeada para estrechar vínculos o servía como instrumento de paz. Una vez casada ella y sus bienes pasaban a ser propiedad del marido y de la familia de éste.

Desde las épocas más remotas de la cultura humana se ha manifestado siempre la subordinación de las mujeres respecto a los hombres. Este fenómeno no se ha limitado sólo a concebir la inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo racional, hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos, que acreditados por el patriarcado y ratificados luego por las sociedades ulteriores, conforman la ya histórica y universal violencia de género.

La discriminación de la mujer en la sociedad representó la primera forma de explotación existente, incluso antes que la esclavitud. Los hechos que ejemplifican las desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son numerosos y antiquísimos. Algunos datan del año 400 A.C., cuando las leyes de Bizancio establecían que el marido era un Dios al que la mujer debía adorar. Ella ocupaba un lugar tan insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o beneficio alguno (Páez Cuba, 2011).

En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba era quemada viva junto al cadáver del esposo en una ceremonia

llamaba Sati, acto este que quedaba incluido dentro de las obligaciones como esposa. Además la mujer infecunda era repudiada, al igual que la que gestaba sólo hijas; y en las comunidades de Irán y Etiopía, el nacimiento de una mujer era una deshonra, siendo, incluso, este vocablo sinónimo de bajeza, debilidad y desgracia.

En las antiguas sociedades esclavistas el hombre ocupaba una posición de superioridad en la familia. En Grecia cuando la pareja era acusada de cometer un delito, la pena sólo se imponía a la mujer. En Roma el pater-familia tenía la autoridad sobre todas las personas con quienes convivía. Sobre la mujer específicamente tenía la manus como poder, por considerarla inferior, y podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. La mujer que se casara sine manus no tenía parentesco civil ni con el marido ni con los hijos, y la mujer nunca llegaba a tener la patria potestad sobre los hijos en la familia agnaticia romana.

La situación legal de la mujer, según las normas islámicas, es sumamente discriminatoria. La mujer, a partir del casamiento, adquiere la condición de propiedad privada del marido. El Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así como el encierro perpetuo de las infieles en la casa. El castigo corporal no está limitado, es legítima facultad masculina sobre su cónyuge, de modo que se exonera de responsabilidad penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado de una golpiza con fines “educativos”. (Páez Cuba, 2011)

En general, la mujer en la antigüedad estaba supeditada al marido y este podía llegar en el ejercicio de su dominio –incluso-, a castigarla corporalmente. Así de arbitrarias y desenfrenadas eran las normas arcaicas, en las que la violencia contra la mujer era tan común y usual como el matrimonio, y resultaba pues, un efecto de este último la supeditación total de las féminas respecto a los hombres, rasgos propios de la cultura patriarcal, que tiene raíces muy profundas.

La Edad Media no trajo diferencias sustanciales: los nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. Esta práctica llegó a ser controlada en Inglaterra, denominándose “Regla del Dedo Pulgar“, referida al derecho del esposo a golpear a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo pulgar para someterla a su obediencia, tratando así de que los daños ocasionados no llevaran al fallecimiento de la víctima. También en esta época, en familias de “sangre azul”, la mujer podía ser utilizada como instrumento de paz a través de matrimonios entre Estados, decisión que se tomaba sin tener en cuenta la opinión de la posible desposada.

La castidad previa al matrimonio y la fidelidad al esposo eran aspectos importantes de los derechos de propiedad masculina. El adulterio de la mujer merecía severo castigo por constituir una grave ofensa a los derechos de su dueño. Veamos algunos hechos históricos relevantes a nivel mundial, sobre la violencia doméstica:

- En Europa, específicamente en Burdeos, **Francia**, en 1359 se estableció por costumbre que cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera, siempre que se confesara arrepentido mediante juramento, no era castigado.
- El cambio de actitud se inició en **Inglaterra**, donde en 1929 se eliminó del Libro de los Estatutos el acta que daba derecho al marido a castigar a su mujer. En 1853, se aprobó el Acta para la mejor Prevención y Castigo de los Asaltos Agravados sobre Mujeres y Niños, que extendió a estos seres algunas de las medidas de protección existentes para evitar la crueldad hacia los animales. Fue hasta 1891 que se abolió de forma absoluta el derecho legal de que había disfrutado el marido inglés para emplear la fuerza física contra la esposa.
- En 1851 se pronunciaron en los **Estados Unidos las Cortes de Massachusetts** y en 1894 fue la de **Mississippi** donde además se concedió a la mujer golpeada y maltratada el derecho a divorciarse. Y en 1910 en once Estados de la Unión Americana no se admitía el divorcio por la causal de crueldad extrema.

- El libro llamado tortura de la esposa en **Inglaterra** escrito por Frances Power Cobbe en 1878 tuvo gran influencia jurídica en el que recopiló más de 6,000 casos de mujeres mutiladas, cegadas, pisoteadas, quemadas y asesinadas en el periodo de 1875 a 1878.
- En 1900 en el Código Penal **Alemán** se estableció la igualdad ante la ley de hombres y mujeres.
- En **Escocia** en un fallo judicial de 1977 se estableció y reconoció que el marido puede golpear a la mujer en el trasero pero no en el rostro.
- De los siglos XIII al XIX no existieron diferencias relevantes en el trato a la mujer: un ejemplo que lo evidencia sucedió en la ciudad de **Nueva York**, en 1825, donde en un caso judicial consta la agresión recibida con un cuchillo y fractura de brazo de una mujer a manos de su esposo. El tribunal no concedió el divorcio por considerar honesta y razonable la actuación masculina, en tanto tenía el propósito de ayudar y enseñar a su esposa para que no cometiera más errores.
- No es hasta finales del siglo XIX, que se dicta en los **Estados Unidos**, en el Estado de Maryland, en 1882, la primera ley para castigar el maltrato conyugal. En la misma se imponían como pena cuarenta latigazos o un año de privación de libertad al victimario por los abusos cometidos, pero después de sancionado el primer caso, inexplicablemente cesó la comisión de este delito, o por lo menos su denuncia, siendo derogada esta ley en 1953.
- En **Inglaterra** en 1889, se logró abolir como norma el derecho del marido a castigar a su cónyuge, situación ésta que desafortunadamente en la actualidad no opera, ya que una de cada siete esposas es violada por su pareja y más del 50% de las agresiones contra las mujeres son cometidas por hombres con las que estas mantienen o han mantenido una relación amorosa.

Aún en el siglo XX se aprobaron leyes como el Decreto-Ley aprobado por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, firmado en 1990, donde se permite asesinar a las mujeres de la familia si incurrn en adulterio o deshonor, para lo cual es posible apedrearlas hasta la muerte. Datos como estos

son los que demuestran que en el curso de la vida de la humanidad ningunos derechos han sido pisoteados tanto como los de las mujeres. (Páez Cuba, 2011)

En cada época, el modelo de familia ha ido cambiando, adecuándose a las dinámicas históricas, los cambios de organización social influyendo en ellos. Fue hasta el siglo XX donde se da un cambio familiar y social y toma de conciencia personal en las mujeres y que el poder no sea una forma de opresión dentro y fuera de la familia y de relacionarnos entre nosotros no como objetos de posesión sino como sujetos. Sin embargo, los estudios e investigaciones han demostrado que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y de violación a los derechos humanos. Los Organismos No Gubernamentales han demandado programas y servicios para resolver la problemática, incluyendo la responsabilidad y el compromiso del Estado.

Esta situación lamentablemente no ha llegado a su fin. En la actualidad las cifras reales del problema no se conocen en su totalidad, pues muchas mujeres no denuncian tales hechos; pero las informaciones existentes son indicadores de preocupación, como el caso del continente americano, en el que Costa Rica tiene una de cada dos mujeres siendo víctima de agresión por parte de su pareja; en Puerto Rico, el 50 % de las mujeres víctimas de homicidios o asesinatos mueren en manos de sus ex -esposos o esposos actuales; en México el 61% de las amas de casa son golpeadas por su pareja, mientras que en Argentina esto ocurre a una de cada cuatro mujeres, en Chile a un 80 % de las féminas y en Ecuador a un 68% aproximadamente.

En otros países de igual modo las cifras son alarmantes. En Colombia una de cada tres féminas es objeto de malos tratos emocionales o verbales por parte del hombre y en Canadá, el 62% de las mujeres asesinadas en 1997, fue víctima de violencia por parte de su pareja. Así por ejemplo en los Estados Unidos, la golpiza es la mayor causa de heridas en las mujeres, más frecuentes que los accidentes, asaltos y violaciones conjuntamente. En un año seis millones de norteamericanas son golpeadas por sus esposos o amantes y 4000 de ellas son asesinadas.

Los otros continentes del planeta no son ajenos a esta situación, sino que la manifiestan con similares rasgos en sus porcentajes. Francia tiene el 95% de las víctimas de violencia entre las mujeres y de ellas el 51% fueron agredidas por sus maridos. En Pakistán el 99% de las amas de casa y el 77% de las mujeres asalariadas son golpeadas por su pareja. Las estadísticas policiales en Australia muestran un 47% de feminicidios y en España en 1997 la cifra de delitos presentados fue de 4343 agresiones contra la mujer, datos que en este último país denotan preocupación si analizamos los más recientes.

En las últimas dos décadas, la violencia ha tenido un incremento sustancial en diversas latitudes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 una de cada cinco mujeres en el mundo fue objeto de violencia en alguna etapa de su vida.

La violencia dentro del núcleo familiar (violencia hacia la mujer, maltrato de los padres hacia sus hijos, maltrato de los hijos adultos a sus padres ancianos) no constituye un problema ni moderno ni reciente, por el contrario ha sido una característica de la vida familiar desde tiempos remotos. Es sólo recientemente que comienza a concientizarse como fenómeno muy grave y que daña la salud de la población y el tejido social.

El reconocimiento del fenómeno se debe a múltiples factores, en primer término, la familia ha dejado de ser un reducto privado infranqueable, sujeto a las decisiones internas y a la autoridad de quien la gobierna. Las políticas estatales mundiales tienden a la protección integral de la familia y de los miembros que la componen, la autoridad del "Padre de familia", ha declinado, se han modificado la posición de la mujer en la sociedad y el niño es considerado sujeto de derechos.

En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia doméstica (considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia doméstica también está relacionada con los niños maltratados (muchas veces, aunque no siempre, por abuso

sexual) y con acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. (Suarez Aparicio , 2013)

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia doméstica en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social.

A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha puesto el poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. El suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su marido), el infanticidio femenino en la cultura china e india dominadas por hombres, los matrimonios concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a la tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de sexismo y violencia doméstica masculina.

1.1.EL PATRIARCADO, COMO FUNDAMENTO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

A través del tiempo diversos autores han expuesto sus pensamientos y teorías para justificar la subordinación de la mujer hacia el hombre. Si bien históricamente se han manifestado las desigualdades entre ambos sexos, este tipo de pensamientos y prácticas siguen vigentes en las diversas culturas occidentales, a pesar de que las mujeres han ido tomando conciencia e impulsado grandes transformaciones sociales en términos de participación política, control de la natalidad con el descubrimiento de la píldora anticonceptiva y su creciente participación en el mercado del trabajo a partir de los años 70 con los movimientos feministas. Pero no podemos dejar a un lado que la cultura patriarcal sigue discriminando a la mujer sólo por el hecho de serlo.

En este sentido podemos visualizar que en los cargos de mayor poder, la mayoría de ellos son ocupados por hombres, quienes manejan y tienen el control de todo el proceso productivo y en la política existe un número muy disminuido de mujeres que son representantes de sus partidos políticos y/o tienen cargos de importancia dentro del gobierno vigente. En otro ámbito la violencia contra la mujer ha permanecido oculta y silenciada a nivel social, lo que ha ido naturalizando y perpetuando su práctica de manera transversal.

Lo anterior indica la desigualdad presente en el ámbito social y nos señala que esta concepción de inferioridad de la mujer se encuentra enraizada en nuestra propia cultura, la cual tiene un origen y corresponde al patriarcado.

Retrocediendo un poco en la historia, con respecto al pensamiento patriarcal, en la Antigüedad Platón señalaba en referencia a la superioridad del hombre, que éste posee un alma racional de carácter inmortal en contraste a la mujer, quien no posee un alma racional y su esencia es el útero, que la deja en absoluta concupiscencia. La mujer para este autor es un hombre castigado, incompleto, en vista de sus limitaciones y opresión a raíz de un destino divino e inevitable.

Más adelante, Aristóteles (330-323 a.c.) sostiene la teoría del sexo único, según la cual la mujer era un hombre disminuido, un varón imperfecto. Y más expresamente en su obra Política indica su concepción de inferioridad de la mujer con respecto al hombre. *“...como hemos visto, la ciencia de la administración doméstica tiene tres partes: una la relación del dueño al esclavo... otra, la relación paterno-filial, y la tercera, la relación conyugal... pues es una parte de la ciencia doméstica el gobernar a la esposa y a los hijos – a unos y a otra como a hombres libres, aunque no con el mismo sistema de gobierno, sino ejerciendo sobre la esposa un gobierno de tipo “político” y sobre los hijos un gobierno de tipo monárquico-; el varón, en efecto, es, por naturaleza, más apto para el mando que la mujer...”* (Aristóteles, 1995:35)

Para Rousseau, la mujer había perdido el estado natural y se había convertido en un ser falso, artificial, cuya regeneración la obliga a vivir

según su origen. Como se puede apreciar, desde antaño la mujer ocupó un segundo plano en la sociedad y fue desplazada a un nivel jerárquico inferior al de los hombres. Por su parte, las funciones de mayor poder y gobernación han sido ocupadas históricamente por los hombres, quienes también encuentran al mando de la función política y dirección del Estado (COBBO, 1995). En cuanto a este sistema patriarcal hasta hoy en día, sólo ha reproducido la desigualdad entre hombres y mujeres originando grandes diferencias e injusticias en función del género, el cual corresponde a una construcción social, cuyo aprendizaje se ha transmitido de manera transgeneracional a través del proceso de socialización, al cual se le atribuyen diversas cualidades en relación a lo masculino o lo femenino que norman el comportamiento de una mujer y un hombre.

Ahora bien, para comprender exactamente lo que significa el sistema patriarcal, entre variados autores que establecieron definiciones para el Patriarcado, podemos señalar que para algunos, el patriarcado es definido como una manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niños y niñas tanto en la familia como en la sociedad (LERNER, 1990). Por su parte, Cagigas precisa que el patriarcado puede ser definido como una relación de poder directa entre los hombres y las mujeres, en donde los primeros mantienen intereses centrados en el control, uso, sumisión y opresión de las mujeres (Cagigas Arriazu, 2000).

Así mismo, Cobbo (2006) lo define como antigua y longeva construcción social, cuyo rasgo más significativo es su Universalidad y argumenta en todas las sociedades y comunidades, el control de los recursos económicos, políticos, culturales, de autoridad o de autonomía personal, entre otros, están en manos masculinas. Por lo tanto sostiene que el patriarcado es un sistema de pactos entre los hombres a partir de los cuales se aseguran la hegemonía sobre las mujeres.

En este sentido el patriarcado constituye un sistema de dominación ejercido por los hombres, por lo que para poder reproducirlo se debe tener fuerza y poder para perpetuarlo. En otras palabras para que perdure en el tiempo, se requiere de que este sistema se encuentre legitimado

socialmente y esto es que no sea criticado, sino que aceptado y naturalizado por la sociedad y que ésta además piense que es lo mejor posible.

El término patriarcado, según señala Fontela en su sentido literal significa gobierno de los padres, el cual a través de la historia se ha utilizado en referencia un sistema organizacional, en donde el hombre corresponde a la autoridad y cumple funciones como jefe de familia y dueño del patrimonio. En relación a esto la familia corresponde a la institución básica por excelencia de este orden social.

Su definición, apunta a: “un sistema de relaciones sociales sexo-políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia”. (FONTELA, 2008)

Entonces el patriarcado, en vista de ser una construcción social que se encuentra instalado y enraizado socialmente en nuestro sistema de valores y creencias, se ve manifestado en la subordinación de cualquier tipo de las mujeres, niños y niñas hacia los hombres y constituye una estructura de poder que se va manteniendo intencionadamente por quienes se encuentran al mando y tienen el control, es decir los hombres.

Las sociedades patriarcales visualizan a la mujer como un ente inferior, que carece de relevancia en relación al hombre y es por este motivo que se las sitúa en un lugar en la sociedad no elegido por ellas. La desigualdad y su origen, puede situarse en los pueblos primitivos, en donde se genera la división sexual del trabajo, debido a las condiciones de la naturaleza, los hombres por su fortaleza física, iban en busca de alimento, mientras que la mujer permanecía cuidando de los hijos. Ante esto, (COBBO, 1995, pág. 117), señala que dicha diferenciación entre la manera de vivir de los hombres y las mujeres se expresa a través de la división sexual del trabajo: “las mujeres se hicieron más sedentarias y se acostumbraron a guardar la choza y los hijos. Mientras que el hombre iba en búsqueda de la subsistencia común”. Entonces al encargarse las mujeres

delhogar y los hombres de la subsistencia familiar, se institucionaliza la paternidad, estableciendo un carácter patriarcal, sentando así las bases de la subordinación de las mujeres, lo que las conlleva a una situación de dependencia constante del hombre.

Ahora bien, el sistema patriarcal ha perpetuado esta jerarquía, naturalizando la ideología que lo sustenta, es decir, se han asignado ciertas funciones y roles de acuerdo al género, según sea femenino o masculino, en donde las mujeres han adquirido determinadas cualidades y se ha creado un “ideal de mujer” en la sociedad, la cual cumplirá ciertas funciones sociales, domésticas y adoptará conductas determinadas tales como ser paciente, comprensiva, sumisa, cautelosa, emotiva, entre muchas más, que la ayudan a cumplir con su rol en la sociedad, previamente establecido cada día. Lo anterior alude al género, el cual constituye según Cagigas a una parte de la estructura social, el cual se dota de contenido socialmente, por lo que no es natural, mientras que el sexo sí viene determinado biológicamente.

Entonces, se atribuyen al género, ciertas cualidades, las cuales se van socializando a partir del proceso de aprendizaje, desde el nacimiento de los seres humanos, para que adopten sus roles correspondientes según sean niños o niñas y de esta manera su comportamiento se encuentre regulado en base a las expectativas sociales de lo femenino y lo masculino y además se complementa con la idea de la superioridad del hombre y la obediencia de la mujer hacia el mismo.

En relación a esto, Cagigas (Ibid), señala que en relación al género se asignan unos papeles sociales, basados en la superioridad del hombre, el cual impone ciertas decisiones a los que no cuentan con poder y tiene expectativas de obediencia en la mujer para que la situación se mantenga de esa manera y cuando dichas expectativas no se cumplen, se da lugar a la violencia para conseguirlo.

Ahora bien, autores como Bronfenbrenner (1987) y Corsi (1994), plantean que las desigualdades de género, se reproducen en todas las instituciones sociales, ya sea, educativas, religiosas, judiciales, económicas, grupo de pares y por supuesto en la familia, que corresponde a la unidad primaria en donde los seres humanos aprenden a socializar. Esto quiere

decir, que a desigualdad de género, va acompañada de una dinámica de poder, la cual se socializa en todo tipo de institución social y fundamentalmente en la familia, sobre todo en aquellas en donde existe violencia intrafamiliar, las cuales tienen una estructura rígida, funcionamiento discriminatorio y jerárquico, en donde el jefe de familia (habitualmente una figura masculina) ejerce un abuso de poder sobre las mujeres, los niños niñas.

Este tipo de familias que internaliza la violencia como forma de relacionarse, aprende resolver de esta manera los conflictos de esta manera hace posible su transmisión hacia las próximas generaciones. La violencia en el sistema patriarcal correspondería a un mecanismo de control social, como lo menciona Cagigas (Op. Cit.). Por este motivo y al encontrarse invisibilizado en nuestra sociedad como forma de resolver las diferencias, es que corresponde a un grave problema social y en este sentido se deben considerar los grandes costos sociales que se desprenden de él, tales como enfermedades como estrés, problemas de desconcentración y depresión, entre muchas más, que son origen del ausentismo laboral y licencias médicas, trastornos de conducta y dificultad en el aprendizaje de niños y jóvenes, que pueden desencadenar en conductas delictuales, consumo de drogas y lo más grave seguirán perpetuando la violencia patriarcal. Tal como hemos mencionado, la violencia de género constituye un problema social, que dificulta la integración de las mujeres a esta sociedad, impidiendo un desarrollo pleno, justo y equitativo para los todos los seres humanos, independiente del sexo que tengan.

En relación a los efectos de la problemática, tal como nos señala Ahumada (1997), no sólo afectan a las mujeres, sino que al conjunto de la familia y la sociedad, repercutiendo en la violencia social, la salud, el ausentismo laboral, entre otras graves consecuencias tanto a nivel individual de las mujeres como a nivel social. En este contexto, se puede identificar el origen de la violencia hacia la mujer, a raíz de la creación del patriarcado y podemos comenzar a explicar el concepto general de violencia intrafamiliar, para pasar a violencia conyugal, su definición y sus

consecuencias a nivel individual de la mujer y a nivel social, temas que se detallarán en los siguientes capítulos.

1.2.EN EL PERU:

Desde antes de su fundación republicana, la sociedad peruana basaba su construcción social sobre la violencia. Recientes estudios sobre la historia prehispánica señalan que el Imperio del Tahuantisuyo se alejaba del imaginario pacífico al cual se refirió el Inca Garcilazo de la Vega en sus comentarios reales. Y, asimismo, recientes estudios de la arqueología nacional dan cuenta de que la violencia, el patriarcalismo y el machismo eran parte constitutiva de las otras etnias nacionales.

La Colonia, y la herencia que dejó, no sólo profundizó esos rasgos sino que los aumentó en su dimensión, ya que su división entre república de blancos guiados por el derecho hispánico y la república de indios adscritos al derecho consuetudinario afianzó aún más el patriarcalismo y la violencia al sumarle los rasgos de una sociedad racista y estamental en su diferenciación social. Aún cuando el derecho consuetudinario para los indios hizo decir a pensadores como Francisco García Calderón que éste fue mucho más benévolo con los indios que el derecho republicano, lo real es que se cimentó sobre una secuela de violencia social que ingresaba desde las estructuras más altas de la administración política hasta la intimidad de la vida cotidiana (BUSTAMANTE , 2014).

Ciertamente la familia andina no poseía los mismos rasgos que la familia colonial hispánica, que introdujeron los españoles. La diferencia no sólo radica en su extensión ni en sus referentes de educación, ceremoniales, rituales y religión, sino también en el tratamiento diferenciado de los hijos y las mujeres, pero lo que recientes estudios nos señalan es que continuaron los rasgos patriarcalistas, machistas y masculino violentista, que ellas ya traían consigo.

La República, aún cuando introdujo el imaginario político de la ciudadanía y los derechos de soberanía nacional, tal como sabemos hoy en día, no introdujo un cambio radical en cuanto a la vieja herencia colonial violenta. Ciertamente hubo un cambio de la patrimonialidad hispánica a la criolla, pero el ideario de la legislación francesa e inglesa hizo mayormente interioridad en los criollos y no en el andino, resto excluido de la sociedad peruana.

A lo largo de la vida republicana y hasta mediados de los años cincuenta, el imaginario criollo nacional afianzó aún más los rasgos de la violencia intrafamiliar como distintivo del orden cotidiano y de la autoridad íntima de la vida familiar. Con el proceso de urbanización, industrialización y masificación que se instaló en la sociedad peruana del cincuenta en adelante, si bien se crearon nuevos contingentes sociales, y comenzó una integración popular que fue acercando los abismos sociales que había señalado Basadre para el Perú de los años veinte, y se fue construyendo paulatinamente una democratización bizarra, popular y desde abajo de la sociedad, tampoco asumió la democracia interna de la vida cotidiana de la familia, sino que más bien la implementó con la doble moral de la vieja herencia colonial. La democracia y al autoritarismo se escindieron en dos vertientes: Una la democracia, como procedimiento político formal que llega hasta nuestros días, y la otra, la autoritaria, como forma de vida en la intimidad de la familia y los cerrados círculos de la vida íntima (BUSTAMANTE , 2014).

En los últimos años se ha llegado a comprender mejor el problema de la violencia doméstica, como asimismo sus causas y consecuencias, y se ha ido desarrollando un consenso a nivel internacional en cuanto a la necesidad de hacer frente a la cuestión. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace unos treinta años, la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya ha cumplido diez años, y la Plataforma de Acción adoptada en ocasión de la

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, son algunas de las expresiones de dicho consenso. Sin embargo, el ritmo de los progresos logrados ha sido lento, puesto que se trata de comportamientos degradantes que tienen raíces profundas, y también, en cierta medida, porque las estrategias eficaces para luchar contra la violencia doméstica aún se deben terminar de definir

2. CONCEPTOS GENERALES.

2.1.DEFINICION DE VIOLENCIA.

(Del Lat. *violentia*) Es un comportamiento deliberado que resulta, o puede resultar, en daños físicos o psicológicos a otros seres humanos, o más comúnmente a otros animales o cosas (vandalismo) y se lo asocia, aunque no necesariamente, con la agresión, ya que también puede ser psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o la sociedad, otras son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no aceptadas.

Por norma general, se considera violento a la persona irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien pese, y caiga quien caiga. Suele ser de carácter predominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza.

La Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso voluntario de la fuerza física contra otra persona, grupo o comunidad, que puede tener como probables consecuencias lesiones físicas, trastornos psicológicos, un incorrecto desarrollo en la vida de una persona, y que puede traer como consecuencia última la muerte (OMS, 2016).

Esta misma institución distingue entre violencia de género y violencia familiar, que serían agresiones físicas, sexuales, verbales y psicológicas

perpetuadas al interno del ámbito familiar. Mientras por violencia de género se considera la que los hombres utilizan contra las mujeres, para mantener una relación de discriminación, desigualdad y de poder. Por violencia en la pareja se entienden las agresiones producidas en el ámbito privado, habitualmente por parte de un hombre (marido, ex marido, novio, ex novio, compañero) sobre su mujer; en algunos casos (una minoría) se consideran, también, las agresiones producidas por parte de una mujer sobre su pareja (OMS, 2016).

El problema de la violencia no es reciente, y si antes venía considerado un problema privado pensando que “la ropa sucia se lavaba en casa”, ahora este problema se considera una cuestión social; hasta los años setenta todo esto era visto como una “cosa normal” y el código civil español del 1975 consentía al marido corregir a su mujer, ya que su esposo detentaba la potestad para ello (Gómez Limón , 2008) .

A nivel internacional, en Italia, hasta al 1981, un hombre que mataba a su mujer adúltera o su amante, tenía una pena reducida, actuando para salvaguardar el honor de la familia. Sólo a partir de los años 80 del siglo pasado se empezó a considerar la violencia de género como un problema público que tenía que ser enfrentado socialmente, y por esto nacieron asociaciones y centros para mujeres maltratadas. Desde hace algún tiempo las mujeres se han dado cuenta de que la violencia de género no es solo un problema privado sino también público, y han empezado a pedir ayuda y a denunciar a sus parejas maltratadoras; aunque las denuncias siguen siendo inferiores respecto al número real de mujeres maltratadas; desgraciadamente este fenómeno, todavía, queda bastante subestimado.

Diversos autores, han plasmado muchas formas de definiciones sobre violencia familiar:

- a. La Violencia familiar es considerada una práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder que otro (as), con más derecho para intimar y controlar, siendo una de su modalidades la violencia física y psicológica; la violencia física es el uso de la fuerza física y la coerción entre los miembros de una familia

con el objeto que la víctima haga o deje de hacer algo, mientras que la violencia psicológica, es toda aquella acción u omisión encaminada a intimidar, atemorizar, desvalorizar, en consecuencia todo acto que tiene como fin destruir la autoestima de la víctima y denigrarla como ser humano, limitando o negando los estímulos que le producen bienestar, así como todas aquellas acciones que limiten el libre desarrollo de su personalidad”(Movimiento Manuela Ramos & Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán , 2004)...

- b. La violencia familiar, es la acción u omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico (Vásquez , 2011).
- c. La violencia intrafamiliar o violencia domestica puede definirse como una situación de abuso de poder o maltrato físico o psicológico, de un miembro de la familia sobre todo. Puede manifestarse a través de golpes e incidentes graves, como también insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades, prohibición a trabajar fuera de la casa, abandono afectivo, humillaciones o no respetar las opiniones (Oblitas Bejar, 2006).

Una de las formas más comunes de violencia familiar es la que se da en el seno familiar contra las mujeres y niñas, sin embargo son innumerables las formas en que esta se puede presentar, abarcando muchas veces la violencia sexual contra niños y niñas, es por ello que los diferentes estados del mundo han tratado de delimitar los alcances de la violencia familiar para efectos de su tratamiento legislativo. Así tenemos:

Según las indicaciones del Estatuto de Florida 741.28 - EE.UU., violencia doméstica se refiere a cualquier ataque, ataque agravado, agresión agravada, agresión sexual, acechar y seguir, asecamiento agravado, secuestro y encarcelamiento falso, o cualquier ofensa criminal que resulte en daño físico o muerte de una persona de la familia o de una persona que

resida con la familia, por otra persona que también reside o residía en la misma casa particular. Esto incluye hechos como:

- Abuso físico -- Empujar, dar bofetadas, patear, dar puñetazos, tratar de estrangular, y pegar.
- Abuso verbal y emocional -- Amenazas, intimidación verbal, acechar el paso, actuar sin controlarse la rabia.
- Abuso sexual -- Cualquier contacto del cuerpo, tocarlo o forzando, sin que se desee, o estar envuelto en acto sexual sin que, él o ella, lo deseen.

La Ley contra la Violencia Doméstica de Costa Rica N° 7586 del 10 de abril de 1986, publicada en la Gaceta N° 83 del 2 de mayo de 1996, violencia doméstica es una acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación que lo originó.

En nuestro país, la Ley 26260 - Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, aprobada por decreto Supremo N° 006-97-JUS, de fecha 25 de junio de 1997, definía a la violencia familiar como cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre: Cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; o quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales.

Actualmente, la nueva Ley N° 30364 –“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, dada el 22 de noviembre del año 2015, define a la violencia en su artículo 5, como cualquier acción o conducta que les causa

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado.

Son innumerables las formas la violencia familiar. En ese sentido, es común observar la violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de adultos hacia uno a varios individuos. Por otra parte, se considera que todo ser humano menor de dieciocho años de edad es un niño, salvo que, en virtud de la ley de su país le sea aplicable y haya alcanzado antes la mayoría de edad.

En la práctica el maltrato tiende a "naturalizarse" es decir se torna cotidiano sobre todo a través de conductas violentas que no son sancionadas como tales.

Muchas personas que maltratan son considerados (y se consideran a sí mismos) como de mayor poder hacia quienes son considerados (se piensan a sí mismos) como de menor poder. Cabe destacar que las personas que sufren estas situaciones suelen ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad dentro del grupo familiar. En este sentido la violencia hacia los niños y las mujeres, estadísticamente reviste la mayor casuística, en cambio los hombres maltratados son solo el 2% de los casos de maltrato (por lo general hombres mayores y debilitados tanto físicamente como económicamente respecto a sus parejas mujeres). También cabe enumerar la violencia cruzada, cuando el maltrato pierde el carácter de aparente unidireccionalidad. Desde el punto de vista jurídico resulta dificultosa la comprobación. Cuando se trata de violencia física en su mayoría son lesiones leves, las cuales cuando dejan marcas desaparecen en no más de 15 días.

Por lo general quienes padecen estas situaciones tienen reticencia a denunciar lo que ocurre. Los motivos de este recelo ocupan desde hace muchos años a investigadores y profesionales. Por un lado porque se

mantiene una espera de un cambio espontáneo de quién agrede, por otro lado se aceptan las disculpas (típicas) de quién agrede, y se creen las promesas que no se lo volverá a hacer (otro rasgo característico), también influye el temor al prejuicio social, las convicciones ético – religiosas, la dependencia económica, el miedo a represalias, la falta de esperanzas en la eficiencia de los trámites jurídicos, etc. Pero quizás el punto más álgido del razonamiento sobre el maltrato se evidencia en el sostenimiento del vínculo violento.

En este sentido entran en consideración tanto el aplastamiento psíquico, la baja autoestima, la educación violenta, como también una consideración al suponer una relación signada de vicios y sistemas psíquicos o relacionales, o un posible montaje estructural subjetivo que impide romper el tipo de relación, etc.

Se debe considerar que la situación violenta no solo la padecen quienes sufren golpes o humillaciones, sino también quién propina esos mismos golpes y humillaciones. Intervienen al respecto los modelos de organización familiar, las creencias culturales, los estereotipos respecto a supuestos roles relacionales, y las maneras particulares de significar el maltrato.

Es el estado el que debe velar por la protección de las personas involucradas, mediante acciones concretas tales como el dictado de leyes y demás normativas jurídicas, y la generación de espacios educativos, de contención e intervención comunitaria. Cabe destacarse que la represión por parte del estado al agresor no soluciona el problema, por lo que resulta esperable el fomento de una pronta asistencia psicológica hacia él, la, o los agresores que en muchos casos ejerce violencia sólo en la intimidad familiar y privada, ya que en otros ámbitos poseen un comportamiento cordial y afectuoso.

En ese sentido, la familia como institución se ha considerado, históricamente, un ámbito privado donde el comportamiento de sus miembros se situaba fuera del control social. Las creencias y

mitos culturales asociados al sistema patriarcal han legitimado desde tiempos remotos el poder y la dominación del marido hacia la mujer y los hijos, despojando a éstos de todo derecho legal, económico o social (Lorente, 1998).

Tanto la mujer como sus hijos carecían de individualidad y aún se observa este fenómeno en los tiempos actuales donde la ciencia y la tecnología han revolucionado nuestras vidas; absorbidos por la autoridad del hombre cabeza de familia, a cargo de quien legalmente estaban y que tenía plenos derechos para usar las medidas que creyera convenientes para mantener el control sobre ellos.

Según Straus y Gelles (1986), uno de los factores más relevantes a la hora de explicar la elevada incidencia de la violencia familiar es el hecho de que la familia posee una serie de características que la hacen potencialmente conflictiva, con el correspondiente riesgo de que los conflictos puedan resolverse de manera violenta. Entre estas características destacan:

- La alta intensidad de la relación, determinada por la gran cantidad de tiempo compartido entre sus miembros, el alto grado de confianza entre ellos, el derecho a influir sobre los demás y el elevado conocimiento mutuo que se deriva de la convivencia diaria.
- La propia composición familiar, integrada por personas de diferente sexo y edad, lo que implica la asunción de diferentes roles a desempeñar, y que se traduce en unas marcadas diferencias de motivaciones, intereses y actividades entre sus miembros.
- El alto nivel de estrés al cual está expuesta la familia como grupo, debiendo hacer frente a distintos cambios a lo largo del ciclo vital y a exigencias de tipo económico, social, laboral o asistencial.
- El carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior de una familia y que, tradicionalmente, la ha hecho situarse fuera del control social.

2.2. EL AGRESOR: CARACTERÍSTICAS PERSONALES

La agresividad ha sido muchas veces plasmada en sujetos con características más bien deformes, desagradables o anormales, como si con esto asintiesen la fantasía generalizada de que los violentos, los hombres dañinos o peligrosos, son personas mentalmente desequilibradas y físicamente reconocibles por sus siniestras facciones (Pastor, 1994). Por supuesto que la correlación entre aspecto físico y temperamento hoy ya no es un tema creíble como lo fue en las épocas en que estuvieron de moda las tipologías. Sin embargo, no hay que olvidar que todo observador tiende, según la teoría perceptiva de atribución, a figurarse o formarse una idea del temperamento y personalidad de los demás basándose en su aspecto físico, de modo que una persona que no resulte "agradable a la vista" tiene más probabilidad de que le acusen de un crimen violento, que otra con facciones normales o agradables (Dion, K. K., 1972).

Más creíble es, aunque tampoco demostrada del todo, la creencia de atribuir agresividad extrema a desequilibrados psíquicos, a enfermos mentales o con desajustes emotivos. Cierto es que la agitación y la psicomotricidad exaltada que manifiesta un enfermo dominado por tensiones afectivas, impulsan muchas veces a cometer actos violentos de agresión. Más en concreto, las personalidades psicopáticas se caracterizan por una enorme desproporción entre sus reacciones agresivas y los estímulos que las provocan; ya que estas son inadaptadas y de conducta antisocial (Pastor, 1994b). No obstante, aunque entre los hombres violentos se encuentre un porcentaje más elevado de psicópatas y neuróticos que entre la población normal (Conger y Miller, 1966), la agresividad no es causa solo de este perfil de personas. Esto, se demuestra cuando el hombre "normal" que arremete sabe que hace un daño a su víctima y por esto, trata de disculparse mediante el remordimiento o la autocrítica. De hecho, la

estrategia del arrepentimiento, la utilizan para captarse de benevolencia ante el juicio social que esto conlleva y así reducir los posibles riesgos de ser castigado. Otras veces, emplean la auto justificación a través de la racionalización, criticando así la " maldad" de su víctima haciendo de esta manera comprensible su actitud agresiva contra ella.

El hombre violento no es exclusivo de una determinada clase social, puede existir en cualquier ciudad y lugar. Aunque no es posible generalizar sobre las características personales de aquellos que provocan este tipo de actuaciones, distintos estudios sobre los agresores en la violencia de género demuestran que existen ciertas peculiaridades, vivencias y situaciones específicas comunes a la mayoría de ellos. Un gran porcentaje de maltratadores han sido víctimas o testigos de malos tratos, adoptando este comportamiento como una forma normal de relacionarse. Lo han experimentado como sistema de poder, aprendiendo que ejerciéndolo en el hogar, obtienen la máxima autoridad y consiguen lo que quieren. El hombre violento es el resultado de un sistema social que ofrece los ingredientes para alimentar esta forma de actuar. Aspira a ejercer un poder y control absolutos sobre su pareja en lo que hace y en sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Consideran a su pareja como una posesión que tienen derecho a controlar en todos los aspectos de su vida (Espada y Torres, 1996c).

Los hombres maltratadores suelen tener una imagen muy negativa de sí mismos, provocando esto una baja autoestima, sintiéndose por esto fracasados como persona, y consecuentemente actuando de forma amenazante y omnipotente y reforzándose así con cada acto de violencia.

Suelen ser patológicamente celosos, queriendo ser los primeros y últimos, y por tanto los únicos, en la atención de una persona. Así, una parte muy importante en la iniciación de los actos de violencia suele ser la percepción errónea que tienen de que su pareja les puede abandonar, sin tener en cuenta la posibilidad de que ellas puedan tener

distintos tipos de relaciones con otras personas (de amistad, de familia, etc.). Desconfía así de todo lo que hace, sintiendo celos de cualquiera que le hace sentir que le quita el afecto de su esposa y él lo quiere todo de ella, deseando tenerla en casa siempre.

También en sus espacios de desarrollo personal y social, los hombres presentan una serie de características:

- En el espacio intelectual (que media entre el físico y el cultural); se les enseña a no poner atención a sus procesos emocionales debido a que se cree que estos obstaculizan su forma de pensar. Es el espacio más importante para la masculinidad del hombre violento, tiene la percepción distorsionada de que su pensamiento nunca es erróneo, y así aparece la violencia emocional con otras personas y consigo mismo.
- En su espacio físico se prueba a sí mismo que es superior a través de la fuerza física, de su forma de caminar, en la práctica de determinados deportes, etc.
- En cuanto al espacio emocional, la forma que tiene de procesar internamente su relación con el mundo externo e interno, está menos desarrollado porque mantiene la creencia de que las emociones le hacen sentirse más vulnerable de cara a los demás, y por ello, reprime este espacio.
- Espacio social es el que permite desarrollar los contactos, interacciones e intercambios con el resto de las personas que nos rodean. El hombre violento, crea relaciones de competencia, controlando los intercambios sociales de su pareja.
- La forma de procesar la información mediante el aprendizaje que recibimos del grupo social más inmediato, es la que conforma el espacio cultural; todas las creencias que definen y refuerzan la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres – ya sean mitos o tradiciones – son las que apoya el

hombre violento, ya que de esta forma es como obtiene beneficios.

2.3.¿POR QUÉ AGREDEN?

No existe causa única que provoque los malos tratos, aunque por lo general sí hay una serie de factores de riesgo que pueden hacer surgir la aparición y posterior mantenimiento de la violencia de género. Aunque existen otras variables que se analizan posteriormente, una de las causas principales es la situación de desigualdad real en la que puede encontrarse la mujer (menor fuerza física, dependencia económica, menos relaciones sociales debido al aislamiento por estar en casa, ...). La mujer que depende económicamente de su pareja, tiene más probabilidades de mantener la relación violenta a lo largo del tiempo. Así mismo, en las situaciones en las que la mujer tiene un rol de subordinada dentro de la familia, hará que se mantengan a largo plazo los malos tratos; Son aquellos casos en los que es una mujer desvalorizada y no apoyada socialmente – adoptando papeles de tolerancia, subordinación, sentimientos de sacrificio, no reconocimiento de derechos humanos básicos – todo esto hará acrecentar sus necesidades y dependencia hacia el hombre que esté con ella reforzando esto su necesidad de adaptación hacia el maltrato:

2.3.1. FACTORES SOCIO - CULTURALES

Existen estadísticas criminológicas con porcentajes favorables para la opinión de que los miembros de las clases más ínfimas de la sociedad sean más violentos que los de las clases medias y altas (Wolfgang y Ferracuti, 1967). Estos estudios han descubierto que el medio sociocultural en el que viven las clases más bajas fomentan actitudes y valores favorables a la fortaleza corporal, a la tenacidad y a la resistencia física, lo que conlleva a

agredir a su pareja, reforzando de esta forma su concepto de masculinidad (Miller, Geertz y Cutter, 1961). Sin embargo, hay que mostrar cautela a la hora de atribuir, según el esquema de causalidad, la pertenencia a clases bajas, medias o altas la agresividad de las personas, ya que las estadísticas no muestran que la causa de la persona violenta sea el pertenecer a una clase social, y es muy probable que se deba además a otras variables más específicas (Pastor, 1994c). Las ciencias que analizan lo social, recalcan con sus estudios que la conducta agresiva es el resultado de experiencias tempranas o de aprendizaje social, debido a motivaciones externas como la frustración, la aversión o la amenaza de un peligro bien físico o psicológico, defendiendo exclusivamente la influencia de factores sociales como causa. Sin embargo, desde una perspectiva más realista y científica, se concluye que las reacciones de una persona violenta se deben a un mosaico de distintas variables. Según el modelo de Berkowitz, existe una interacción dinámica entre la biología (que puede afectar a la conducta) y las condiciones ambientales (que favorecen o inhiben la expresión de dichas tendencias), pudiendo influirse ambas variables mutuamente (Martín Ramírez, 2000).

2.3.2. FACTORES BIOLÓGICOS

Los enfoques biológicos tienden a explicar la agresión como algo inherente a nuestra naturaleza, en vez de adquirido a través de las experiencias vividas y el aprendizaje. Así, Desmond Morris (1969) describe nuestras ciudades como jaulas donde prevalece la violencia anónima, o Alexandre Mitscherlich (1969), que considera al hombre como una marioneta que debe someterse a todos sus instintos inconscientes. No obstante, la mayoría de los autores que apoyan la predominancia biológica de la agresión, suelen defender la plasticidad de los instintos, exponiendo que solo algunas

personas se muestran como pautas de acción fija, explicando de esta forma por qué en determinadas situaciones algunos hombres, y no todos, actúan de forma violenta.

Según parece, las hormonas sexuales tienen un efecto directo sobre comportamientos específicos de cada sexo (Martín Ramírez, 2000): los andrógenos producen un aumento en el enfado y en la tendencia hacia la agresividad. Por el contrario, la administración de estrógenos tiene efectos opuestos (Van Goozen, Cohen – Kettenis, Gooren, Frijda y Van de Poll, 1995). No obstante, no existen datos evidentes, sino sólo meras concurrencias correlacionales sobre el eventual efecto causal de la testosterona en muchas de las diferencias observadas del comportamiento violento de algunos hombres. La testosterona fomentaría la agresividad a través de distintos mecanismos diferentes: a) una vía sensitiva a los andrógenos, b) una vía sensitiva a los estrógenos y c) una combinación de ambas, donde la vía funcional estará determinada por el genotipo (Sussman, Worrak, Murowchick, Frobose y Schwab, 1996). Por último, añadir que la experiencia social también influye en el nivel hormonal, por ejemplo, el estrés puede disminuir en nivel de andrógenos en los hombres, mientras que un estado de ánimo positivo y el éxito pueden aumentarlo.

Dicho todo esto, desde la perspectiva biológica se concluye que, aunque tras la existencia de datos experimentales disponibles que convencen sobre las relaciones funcionales entre bioquímica y conducta, todavía hoy resulta difícil separar causas y efectos: aún quedan importantes lagunas sobre cómo se modularían bilateralmente hormonas y agresión en el hombre violento (Martín Ramírez, 2000).

2.3.3. FACTORES PSICOSOCIALES

Teniendo en cuenta las explicaciones dadas hasta ahora sobre el comportamiento agresivo de los hombres en la violencia de género, está claro que no son defendibles las posturas extremas que hablan de este comportamiento perturbado como determinado exclusivamente por mecanismos genéticos o ambientales. Se considera necesario reflexionar de manera personal acerca de las creencias y principios que existen y mantienen la clase de relación en la que se sustenta la pareja. Solo así, se puede llegar a comprender las ideas erróneas que los agresores tienen al basarse exclusivamente en el principio de desigualdad que se les ha sido transmitido a través de la cultura, de que el hombre es quien manda y el que decide usando la violencia física, psicológica y/o sexual para reforzarse en este tipo de creencias; siendo así hombres tradicionalistas y que creen en roles sexuales estereotipados. De esta forma, mantienen una actitud totalmente negativa y discriminatoria que se basa en su creencia de desigualdad de las mujeres, que para Glick y Fiske (1996) gira en torno a: a) Paternalismo dominador, suponiendo que la mujer es inferior y más débil que el hombre y por tanto realza la figura dominante masculina; b) Competitividad en la diferenciación de género, considerando que las mujeres no tienen las características ni habilidades imprescindibles como para desenvolverse en el medio público; y c) Hostilidad heterosexual, atribuyendo a las mujeres un poder sexual que les hace manipuladoras para con los hombres. Desde este enfoque psicosocial, existen distintos estudios (Coleman, 1980) que sugieren que las actitudes y creencias misóginas podrían ser un elemento común y diferenciador de los maltratadores (Ferrer y Bosch, 2000). Según Eriksson (1997) la violencia doméstica refleja las desigualdades relacionales de poder entre los distintos sexos; la mujer es víctima de la violencia debido a su sexo, y el hombre la utiliza para ejercer su poder.

2.3.4. FACTORES PSICOPATOLÓGICOS

Existen otros factores que también pueden, y de hecho la realidad así nos lo demuestra, desencadenar los comportamientos violentos, como el alcoholismo, los graves problemas económicos, el desempleo prolongado, la drogadicción, antecedentes de rechazos afectivos o trastornos psicopatológicos. Todos estos actúan como generadores de estrés, que si no se aprende a afrontar de una forma positiva y sana, pueden tener esta fatal consecuencia, aunque ninguno pueda tomarse como causa que por sí misma lo explique. Es importante señalar que algunos estudios, tanto de la Comunidad Europea como en América Latina, indican que una de las causas más importantes de los malos tratos en el hogar está en la personalidad del maltratador (Espada y Torres, 1996). Corroboran que, frecuentemente, los hombres violentos que maltratan a su familia muestran ciertos rasgos patológicos como pueden ser impulsividad, paranoia (delirios celotípicos), inseguridad, personalidad depresiva, así como tendencia a culpar a los demás de sus fallos como intento de reforzar su baja autoestima. Desde esta perspectiva se considera que el hombre actúa de esta manera desadaptada, por tener un problema psicológico o psiquiátrico, y al sufrir una disfunción se sienten vulnerables e inseguros, por lo que tienden a sobrecompensar su autoestima a través de la violencia.

Bajo este enfoque psicopatológico, el maltratador podría tener rasgos con los que encajaría en el tipo de "personalidad sádica" (Lelord y André, 1998). Este trastorno de personalidad se caracteriza por un conjunto de comportamientos cuyo fin es hacer sufrir o "simplemente" dominar a la otra persona. Buscan el sufrimiento y sumisión del otro exclusivamente por placer personal, y no como medio para alcanzar cualquier otra meta. Son capaces de llegar a arreglárselas para no infringir la ley, y no obstante seguir haciendo sufrir a la otra persona por un medio jurídicamente legal –

humillar a alguien en público, aterrorizar a través de amenazas, regodearse con el sufrimiento del otro, forzar a la otra persona a que realice actos humillantes o degradantes- . Este trastorno de personalidad se suele asociar, aproximadamente una de cada dos ocasiones, a otro trastorno de personalidad, siendo los más frecuentes el paranoide, narcisista y antisocial.

2.3.5. FACTORES INTRAFAMILIARES

2.3.5.1. EL ALCOHOLISMO. El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de forma prolongada con dependencia del mismo. Es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar así como en las responsabilidades laborales; es por ello que podemos observar el peligro que corre la familia en cuanto a su integridad, toda vez que al hacerse presente el alcoholismo en el vínculo familiar, hace que se genere las agresiones psicológicas y físicas.

2.3.5.2. INCOMPRESION FAMILIAR.- Cabe señalar que tocaremos el tema de Incomprensión Familiar no por otra cosa sino porque consideramos que puede ser un factor importante como generado de violencia dentro del núcleo familiar, siendo que dicha Incomprensión una vez que se hace presente dentro del matrimonio ello conlleva a una situación de tracto sucesivo originando con ello que la vida en común entre los cónyuges se vaya haciendo cada vez más difícil dicha convivencia, originando con ello una situación constante de desavenencias entre cónyuges

haciendo imposible la convivencia entre los mismos y por ende dicha situación afecta a los integrantes de la familia. Por lo que podemos observar el peligro que corre la familia en cuanto a su integridad, toda vez que al hacerse presente la incomprensión familiar como una causa de no continuar con el vínculo matrimonial.

2.3.5.3. CELOS.- Se conoce como celos a la respuesta emocional, mental y conductual que desplegará un individuo determinado y que surgirá ante la percepción de este, que en este caso encarnaría a la persona celosa, de una cierta y concreta amenaza externa que puede poner o pone en peligro una relación personal importante con aquella persona celada. La relación puede ser romántica, como por ejemplo, marido-mujer, novio-novia, o bien tratarse de una relación super estrecha pero sin que exista un vínculo romántico, como puede ser la de padres e hijos, entre hermanos o compañeros de trabajo, en este último caso entrando en juego no una disputa por el amor, cariño o atención de alguien, sino más bien por un puesto en la organización, por los logros y triunfos que alcanza otro, por el carisma o los ingresos de los que dispone, entre otras cuestiones.

La psicología, ya más técnica y profesionalmente, explica que los celos son un mecanismo de defensa, una respuesta natural de un individuo ante la consciente y concreta amenaza de perder una relación interpersonal importante y querida para la persona celosa.

Según diversos científicos, esta conducta puede desencadenarse por dos cuestiones fundamentales. Por un lado, porque la pérdida de la relación significaría para

la persona celosa la pérdida de un buen número de beneficios y recompensas que la relación en cuestión le reporta, porque lisa y llanamente, puede suceder que la persona celosa ya no comparta más momentos gratos, placenteros y de buena calidad de vida con la persona celada. Y por otro lado, la segunda cuestión que puede dar curso a los celos es por la pérdida de seguridad en si mismo y en lo que respecta a la autoestima que experimentará la persona celosa, porque esta tiende a pensar que si la persona que se quiere y cela optó, eligió a otro, entonces, eso sucedió porque el es mejor que yo, lo cual provoca una suculenta pérdida a nivel de autoestima.

Siempre los celos se deberán a la presencia de un tercero, en el caso de una pareja puede ser la cercana relación que uno de ellos deba mantener o mantenga con un compañero de trabajo o de estudio lo que despierta la conducta celosa. En el caso de la familia, entre padre e hijos, puede ser que el objeto de celos se desencadene recién ante el nacimiento de un hermano, creyendo el chico, que por esta causa perderá la atención y el cariño de sus padres.

Si bien es una problemática, que tratada a tiempo con un profesional o con una charla en la cual se aclaren los tantos, no debería representar demasiados problemas, también es cierto que la misma puede derivar en serios problemas de conducta, incluso llegando a un plano de violencia y agresión, en caso de no ser controlada debidamente.

2.4.ASPECTOS QUE FAVORECE A LA SUPERVIVENCIA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Según Ferreira, la supervivencia intergeneracional de la violencia, y concretamente de la violencia de género, está determinada en gran medida por la influencia de factores de tipo cultural y educacional (Ferreira, 1992). Entre ellos, cobra especial relevancia los sistemas de valores que atribuyen una superioridad innata en los hombres respecto a las mujeres y la aceptación de la violencia como un medio válido para la resolución de conflictos.

2.4.1. CULTURALES:

- Socialización por separado según el sexo.
- Definición cultural de los roles sexuales apropiados.
- Expectativas asignadas a los diferentes roles dentro de las relaciones.
- Creencia en la superioridad innata de los varones.
- Sistemas de valores que atribuyen a los varones el derecho de propiedad sobre mujeres y niñas.
- Concepción de la familia como esfera privada bajo el control del varón.
- Tradiciones matrimoniales (precio de la novia, dote).
- Aceptación de la violencia como medio para resolver conflictos.

2.4.2. ECONÓMICOS:

- Dependencia económica de la mujer respecto al varón.
- Restricciones en el acceso al dinero contante y al crédito.

- Leyes discriminatorias en materia de herencia, derecho de propiedad, uso del terreno público, y pago de pensiones alimenticias a divorciadas y viudas.
- Restricciones en el acceso al empleo en los sectores formales e informales.
- Restricciones en el acceso de las mujeres a la educación y a la capacitación.

2.4.3. LEGALES:

- Inferioridad jurídica de la mujer, ya sea según la ley escrita o según el derecho consuetudinario y su aplicación práctica.
- Leyes en materia de divorcio, cuidado de los hijos, pensiones alimenticias y herencia.
- Definiciones jurídicas de la violación y los abusos domésticos.
- Bajo nivel de alfabetización jurídica entre las mujeres.
- Falta de tacto en el tratamiento de mujeres y niñas por parte de la policía y del personal judicial.

2.4.4. POLÍTICOS:

- Representación insuficiente de la mujer en las esferas del poder, la política, los medios de comunicación y en las profesiones médica y jurídica.
- Trato poco serio de la violencia doméstica.
- Concepción de la vida familiar como un asunto privado y fuera del alcance del control del Estado.
- Riesgo de desafiar el status quo o las doctrinas religiosas.
- Restricciones en la organización de las mujeres como fuerza política.

- Restricciones en la participación de las mujeres en el sistema político Organizado.

2.5. TIPOS DE VIOLENCIA:

Nuestra sociedad, ha venido evolucionando en base a una serie de actos de violencia suscitados en las diferentes sociedades, desde las primeras civilizaciones ha existido violencia entre naciones, hasta llegar a una violencia intrafamiliar, con la finalidad de buscar reformas, poder y ampliación territorial en la humanidad. Analizando la historia de la humanidad, podemos encontrar diversas formas de violencia; tales como:

2.5.1. Violencia directa: Llamamos violencia directa a la violencia o física, aquella que tiene por objetivo herir o matar. En este tipo de violencia incluimos las agresiones físicas y otras formas. De cualquier forma es visible, se concreta con comportamientos que responde a actos de violencia. tiene como principal característica el hecho de que la mayoría de sus efectos son visibles, principalmente los materiales, aunque no todos: el odio generado, los traumas psicológicos creados o la aparición de conceptos como el de ‘enemigo’ son efectos igual de graves que no suelen ser considerados como tales (GALTUNG, 2013). Al ser el tipo de violencia más conocida y evidente, es común pensar que es la peor de todas las violencias, lo cual no es cierto precisamente por esa visibilidad, que la hace más fácil de identificar y por tanto de combatir. Es importante señalar que este tipo de violencia es la manifestación de algo, no su origen, y es en los orígenes donde deben buscarse las causas y puede actuarse con mayor eficacia. La violencia directa no afecta a

tantas personas como las otras dos, cultural y estructural, que formarían la parte oculta del iceberg.

2.5.2. Violencia natural: Llevada a cabo por la naturaleza, sería el único tipo de violencia generada de forma ajena al hombre, a su voluntad.

2.5.3. Violencia estructural: Consiste en agredir a una agrupación colectiva desde la misma estructurapolítica o económica. Así, se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte a la población. El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social. La utilidad del término violencia estructural radica en el reconocimiento de la existencia de conflicto en el uso de los recursos materiales y sociales y como tal, es útil para entender y relacionarlo con manifestaciones de violencia directa (cuando alguno de los grupos quiere cambiar o reforzar su posición en la situación conflictiva por la vía de la fuerza) o de violencia cultural (legitimización de las otras dos formas de violencia, como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o eurocentrismo).

2.5.4. Violencia cultural: Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una legitimidad a la utilización de los instrumentos de la violencia que hemos nombrado anteriormente. Dos casos de violencia cultural pueden ser el de una religión que justifique guerras santas o atentados terroristas, así como la legitimidad otorgada al Estado para ejercer la violencia. es una violencia simbólica, que se expresa en infinidad de medios —religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, medios de comunicación, educación, etc—y cumple la función de legitimar la violencia directa y estructural, así como de inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren (GALTUNG, 2013). Ofrece incluso justificaciones para que los seres humanos, a diferencia del resto de especies, se destruyan mutuamente y hasta sean recompensados por hacerlo: no es extraño aceptar la violencia en nombre de la patria o de la religión. Existe una cultura de la violencia en la que las escuelas y demás medios de transmisión y reproducción de cultura muestran la historia como una sucesión de guerras; la costumbre es que los conflictos se repriman por la incuestionable autoridad paterna, o por la autoridad del macho sobre la hembra; los medios de comunicación de masas venden el uso de ejércitos como la vía principal de solución de los conflictos internacionales, etc. De modo que la vida transcurre en un ambiente de violencia constante, que se manifiesta a diario en todos los ámbitos y a todos los niveles.

2.5.5. Violencia juvenil: Se refiere a los actos físicamente destructivos (vandalismo) que realizan los jóvenes entre los 10 y los 25 años de edad y que afectan a otros jóvenes dentro del mismo rango de edad. En todos los países, los principales actores de este tipo de violencia son los hombres y algunas veces el comportamiento violento se presenta desde la infancia o la temprana adolescencia. Sin embargo, la interacción con los

padres y la formación de grupos, parches, galladas o pandillas aumentan el riesgo de que los adolescentes se involucren en actividades delictivas, violentas y no violentas. La violencia juvenil es una de las formas de violencia más visibles en la sociedad. En todo el mundo, los periódicos y los medios de radiodifusión informan diariamente sobre la violencia juvenil de pandillas, en las escuelas y en las calles. En casi todos los países, los adolescentes y los adultos jóvenes son tanto las principales víctimas como los principales perpetradores de esa violencia. Los homicidios y las agresiones no mortales que involucran a jóvenes aumentan enormemente la carga mundial de muertes prematuras, lesiones y discapacidad

La violencia juvenil daña profundamente no solo a las víctimas, sino también a sus familias, amigos y comunidades. Sus efectos se ven no solo en los casos de muerte, enfermedad y discapacidad, sino también en la calidad de vida. La violencia que afecta a los jóvenes incrementa enormemente los costos de los servicios de salud y asistencia social, reduce la productividad, disminuye el valor de la propiedad, desorganiza una serie de servicios esenciales y en general socava la estructura de la sociedad.

2.5.6. Violencia Cotidiana. Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente por el no cumplimiento de las reglas, no respeto de una cola, maltrato en el sector público, la larga espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes. Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario se convierte en una selva urbana.

2.5.7. Violencia Política. Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no participación en las decisiones, así como la existencia de las llamadas coimas como: Manejo de algunas instituciones y las prácticas de Nepotismo institucional. También la violencia producida por la respuesta de los grupos alzados en armas.

2.5.8. Violencia Socio-económica. Que es reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y la salud.

2.5.9. Violencia Delincuencial. Robo, estafa, bienes, es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes. Toda forma de conducta individual u organizada que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo. Establecido no ayuda a resolver los problemas. Todos sueñan con el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil. Pero ser un profesional idóneo o un técnico calificado requiere de esfuerzo y preparación. Requiere desarrollar recursos internos y metas. Los jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de orientación y canalización de sus frustraciones y en esto dependen de sus familias, la escuela y las instituciones; la responsabilidad es de todos. Es decir, las expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden cambiar.

2.5.10. Violencia Doméstica. La violencia psicológica y física con el cónyuge, y el abuso de los niños. También se le denomina violencia intrafamiliar, y este término es utilizado para referirse a *«la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar*

o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos». Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, el acoso, o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar, y que perpetra por lo menos un miembro de la familia contra algún otro familiar.

Como vemos, la violencia directa es clara y visible, por lo que resulta relativamente sencillo detectarla y combatirla. Las violencias culturales y la estructural, en cambio, son menos visibles, por lo que suponen más problemas a la hora de combatirlas.

Pero es la **violencia doméstica**, la que nos ocupa, por incidir en el núcleo de la sociedad, la familia; expresándose en un acto de maltrato que genera secuelas físicas y psicológicas negativas. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del maltrato, las consecuencias psicológicas pueden ser distintas. Las diferentes formas de malos tratos, dependen tanto de la actuación del agresor como de las consecuencias para la víctima:

- a. Psíquicos.** Actos o conductas que producen desvalorización o sufrimiento: amenazas, humillaciones, exigencia de obediencia, convencimiento de culpabilidad ante cualquier problema, insultos, aislamiento, descalificación o ridiculización de sus opiniones, humillación en público, Etc.
- b. Físicos.** Actos no accidentales que provoquen o puedan producir daño físico o enfermedad en la persona: golpes, heridas, fracturas, quemaduras. Pueden aparecer bien de forma cotidiana o cíclica.
- c. Sexuales.** Imposición a la mujer de una relación sexual en contra de su voluntad y donde se utiliza la fuerza o la intimidación. Cuando se produce penetración forzada, es considerado violación. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.

La Ley N° 30364, incorpora una nueva clasificación de la violencia doméstica, comprendida en el artículo 8:

*d) **VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL.** Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de:*

- 1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;*
- 2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;*
- 3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;*
- 4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.*

2.6.- ETAPAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.

Cuando una pareja está empezando su relación es muy difícil que aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia.

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. Veamos, como se manifiesta, desde diferentes formas de desarrollo.

2.6.1. FASES DE LA VIOLENCIA DOMESTICA:

1ª En la primera fase: "FASE DE ACUMULACIÓN DE Tensión", se produce una sucesión de pequeños episodios que llevan a roces permanentes en los miembros la pareja, con un incremento constante de ansiedad y hostilidad. El hombre y la mujer se encierran en un circuito en el que están mutuamente pendientes de sus reacciones, la tensión alcanza su punto máximo y sobreviene.

2ª En la segunda fase: "EPISODIO AGUDO", en la que toda la tensión que se había venido acumulando da lugar a una explosión de violencia, que puede variar en gravedad, oscilando desde un empujón hasta el homicidio. Se caracteriza por el descontrol y la inevitabilidad de los golpes. Las mujeres se muestran sorprendidas frente al hecho que se desencadena de manera imprevista ante cualquier situación de la vida cotidiana.

3ª En la tercera fase: "LUNA DE MIEL", se produce el arrepentimiento, pedido de disculpas y promesa de que nunca más va a ocurrir por parte del agresor. Pero al tiempo vuelve a reaparecer los períodos de acumulación de tensión y se reinicia el ciclo.

2.6.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INTENSIDAD DE LA VIOLENCIA FAMILIAR:

1ª En la primera etapa: La violencia es sutil, toma forma de agresión psicológica. Por ejemplo, implica lesiones en la

autoestima, ridiculizando, agrediendo emocionalmente, ignorando, riéndose de las opiniones, etc. Si bien las consecuencias de este tipo de violencia no son visibles, provocan en la víctima un debilitamiento de las defensas psicológicas, y la víctima puede empezar a ser más introvertido y a deprimirse.

2ª En un segundo: Momento aparece la violencia verbal, que refuerza la violencia psicológica. El agresor comienza a denigrar a la víctima poniéndole sobrenombres descalificantes, insultándola, criticándole el cuerpo, amenazándole con agresión física u homicidio, ridiculizándola en presencia de otras personas, gritándole y culpándola de todo. De esta manera, el agresor va creando un clima de miedo constante.

3ª En la tercera: Luego comienza la violencia física, sigue con cachetadas, hasta llegar a las trompadas y patadas. Luego más tarde comienza a recurrir a objetos para provocarle daño y en medio de ésta agresión le exige tener contactos sexuales.

2.7.-CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR:

La violencia familiar puede tener diferentes tipos de consecuencias, aunque se habla principalmente sobre daños físicos y psicológicos en la salud:

2.7.1. FÍSICAS: Dentro de los daños físicos se encuentran las lesiones, que abarcan desde cortes menores con utilización de armas blancas (por ejemplo cuchillos, tenedores), equimosis (golpes, moretones) y fracturas, llegando hasta la discapacidad

crónica.

Un alto porcentaje de estas lesiones requiere tratamiento médico, aunque usualmente las personas que padecen estos daños no suelen tomarlo debido a que intentan ocultar lo que les ocurre.

Además de las consecuencias mencionadas, la violencia familiar provoca un debilitamiento en las defensas físicas debido al estrés que provoca el maltrato, el auto descuido y una mayor proclividad a tomar riesgos (Instituto de Psicoterapia Integral Riqchariy, 2016). Es muy común que, a raíz del maltrato, la persona padezca enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso o que recurran al alcohol y las drogas para disfrazar su dolor, entre otros trastornos.

Otra consecuencia es el embarazo no deseado, ya sea por violación o por no usar métodos anticonceptivos; algunas mujeres tienen miedo de plantear el uso de métodos anticonceptivos con sus parejas por temor de ser golpeadas o abandonadas (Instituto de Psicoterapia Integral Riqchariy, 2016). Este riesgo de embarazo no deseado acarrea muchos problemas adicionales. Por ejemplo, si la maternidad ocurre durante la adolescencia temprana o media, antes de que las niñas estén maduras biológica y psicológicamente, se asocia con resultados de salud adversos tanto para la madre y para el niño. Los lactantes pueden ser prematuros, de bajo peso al nacer o pequeños para su edad. Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres concurren al aborto. En los países en que el aborto es ilegal, costoso o difícil de obtener, las mujeres pueden recurrir a abortos ilegales, a veces con consecuencias mortales.

En los niños, las consecuencias de la violencia familiar se traducen en lesiones, que les son provocadas mientras tratan de defender a sus madres.

2.7.2. Psicológicas: La violencia familiar provoca consecuencias psicológicas importantes en las personas aunque varía su grado según variables como factores de personalidad, habilidades de afrontamiento, recursos propios, apoyo social y características específicas del maltrato, duración y grado de violencia (Instituto de Psicoterapia Integral Riqchariy, 2016).

Las alteraciones clínicas más significativas son:

- La ansiedad, que es producida por la mezcla de violencia repetida e intermitente con períodos de arrepentimiento y de ternura, provoca respuestas de alerta y de sobresaltos permanentes, sensaciones de temor, dificultades de concentración, irritabilidad y un estado de hiper vigilancia. Asimismo, la víctima también presenta trastornos del sueño, pesadillas y pensamientos obsesivos acerca del maltrato y el maltratador.
- La depresión, la pérdida de autoestima y la culpa, son otras consecuencias provocadas por la violencia, ya que la víctima cree que la conducta de su agresor depende de su propio comportamiento y por lo tanto se siente responsable e intenta una y otra vez cambiar las conductas del maltratador. Sin embargo, cuando observa que sus expectativas fracasan, desarrolla sentimientos de culpabilidad y de fracaso: mentir, tolerar el maltrato, entre otras cosas.
- El malestar psicológico crónico en el que se encuentra la víctima produce una alteración en su forma de pensar que le hace sentirse incapaz de buscar ayuda, de proteger a sus hijos y a sí misma o de adoptar medidas adecuadas.
- El aislamiento social, que provoca que la víctima dependa de su pareja (cuando el agresor es la pareja) social y

materialmente. El maltratador aumenta cada vez más el control sobre su víctima, que se siente más vulnerable ante la sociedad y se cronifica el miedo a enfrentarse a un futuro incierto y peligroso.

- Los trastornos psicosomáticos, que se manifiestan en la persona que sufre de violencia con dolores de cabeza, caída del cabello, pérdida del apetito, ansiedad crónica, fatiga, problemas intestinales, alteraciones menstruales, etc.
- Son habituales las visitas al médico de cabecera para consultar estas dolencias mientras ocultan la verdadera causa que las provocan.
- Los trastornos sexuales, en los cuales la persona agredida pierde el interés sexual.
- En última instancia el suicidio, que se produce principalmente por el agotamiento emocional y físico. Las muertes son un testimonio dramático de la escasez de opciones de que dispone la mujer para escapar de las relaciones violentas.

2.7.3. Testigos de la violencia familiar:

Cuando los niños presencian situaciones crónica de violencia entre sus padres. Los estudios comparativos muestran que estos niños presentan trastornos muy similares a quienes son víctimas de violencia reciproca o cruzada. Para ser clasificada de este modo es necesario que exista simetría en los ataques y paridad de fuerzas físicas y psicológicas en ambos miembros de la pareja. El maltrato reciproco puede ser verbal y/o físico.

De acuerdo al diagnóstico sobre atención de violencia familiar y sexual, la percepción de la violencia familiar no incluye a la violencia sexual como una manifestación, al preguntar en que consiste la violencia

se identifica únicamente la violencia física y psicológica en la mayor parte por los instrumentos. En los grupos focales, si se pudo ver que se reconoce la violencia en sus diferentes manifestaciones:

1. La violencia familiar se expresa a través del maltrato entendido este como cualquier comportamiento por acción u omisión, de carácter intencional que provoca un daño físico o psíquico en otro miembro de la familia. Especialmente importante es el maltrato sexual, razón por la cual podemos identificar tres grandes modalidades de ejercicio de la violencia familiar:

Maltrato físico.- Se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamientos), que no sea accidental y provoque un daño físico o una enfermedad. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una situación crónica de abuso.

Maltrato psíquico.- Generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo de las iniciativas de la víctima por parte de algún miembro de la familia.

Maltrato sexual.- Se lo podría definir como el tipo de contacto sexual forzado por parte de un adulto o tutor hacia los niño de la familia, o de un cónyuge hacia el otro, con el fin de obtener excitación y/o gratificación sexual.

PARTE II

LA VIOLENCIA DOMESTICA EN EL DERECHO COMPARADO

1.- EVALUACION DE LA IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DOMESTICA

La violencia del esposo, conviviente, novio o padre es la primera causa en el mundo de muerte e invalidez permanente entre las mujeres. Los datos proceden del Consejo de Europa y publicados por el Observatorio italiano, especializados en ayudar a las víctimas de la violencia de género en el país. De 16 a 44 años, según un informe difundido hoy por el Observatorio italiano criminal y multidisciplinar de la violencia de género.

Este tipo de violencia familiar causa más muertes entre las mujeres de ese grupo de edad, que el cáncer, los accidentes de tráfico o la guerra.

*"La violencia familiar por parte del compañero es en Europa y en el mundo la primera causa de muerte de las mujeres", denunció **Gabriella Paparazzo**, de la asociación "**Differenzadonna**" (20 MINUTOS, EDICIÓN ESPAÑA , 2005). Un caso no menor se detecta en Rusia, en un año han muerto 13.000 mujeres, de ellas el 75% son asesinadas por el marido. El fenómeno de la violencia contra las mujeres no se circunscribe a los países en desarrollo, sino que está también presente en Occidente, donde prevalece una cultura de raíces patriarcales.*

En Estados Unidos, cada cuatro minutos una mujer es víctima de algún tipo de violencia, mientras que en Suecia, muere una mujer cada diez días, explicó Paparazzo, para quien se trata de "un fenómeno que tiene profundas raíces culturales". Sin embargo, las mujeres tiene dificultades para denunciar los malos tratos, pues "no tienen conciencia de ser víctimas", según la criminóloga Susana Loriga. En este sentido,

explicó que las mujeres no denuncian más para "protegerse y defenderse a ellas mismas de una realidad que, de otra manera, las destruiría".

El problema de la violencia familiar "ingresa al temario de los organismos internacionales en el transcurso de la última década. La ONU, en su Asamblea General de noviembre de 1985, abordó el tema de la violencia en el hogar" (Corsi, 2009). Con ello, retomaba una Resolución del Consejo Económico y Social de la misma organización, encuadrando el punto debatido en sus actividades sobre la prevención de la criminalidad, por un lado, y en las del Decenio en favor de la mujer, cuya culminación fue la reunión de Nairobi en 1985, por otro.

El mismo año, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta una Recomendación similar y paralela a la anterior, pero centrada en el ámbito europeo. En diciembre de 1986 se reúne en Viena un grupo de expertos para tratar la violencia en el hogar y sus efectos en las mujeres, del cual surge un documento que contiene recomendaciones a escala internacional, regional y nacional.

En 1986, la 23era. Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericano de Mujeres, de la OEA comenzó el análisis de la violencia que afecta a la mujer, aprobando un importante plan de acción contenido en la Resolución 103186. En noviembre de 1987 se reúne en Estrasburgo, organizado por el Consejo de Europa, un Coloquio sobre la Violencia en el seno de la Familia, precedido por un conjunto de informes nacionales de los Estados miembros.

En 1990, la 250 Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericano de Mujeres de la OEA aprueba las Conclusiones y Recomendaciones de la Consulta Interamericana sobre Mujer y Violencia.

En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 1990), se retoman las Recomendaciones de 1985 y se encomienda al Departamento de Justicia de Canadá la confección de un manual para quienes trabajan en el campo de la violencia doméstica.

En la Conferencia Interparlamentaria de Pyongyang, en 1991, se adoptó por unanimidad una recomendación acerca de las Políticas para eliminar la violencia hacia los niños y las mujeres. (Corsi, 2009) A partir de las recomendaciones globales, se han generado numerosos encuentros regionales, tendientes a discutir políticas en torno al

problema. Así por ejemplo, en marzo de 1992 se realizó en Managua el Primer Seminario Subregional sobre Violencia contra la Mujer, organizado por el Programa Mujer, Salud y Desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud, en el que quedó definido el tema de la violencia contra la mujer como un problema de Salud Pública.

Si bien la precedente enumeración no agota las referencias a los múltiples encuentros internacionales, regionales y locales que en la última década han generado documentos sobre el problema de la violencia doméstica, pretende subrayar su dimensión política y universal y, al mismo tiempo, instar a los Estados a que tomen en cuenta las sucesivas y reiteradas recomendaciones que los distintos organismos internacionales, regionales y locales han formulado.

Para comprender acabadamente los fundamentos de tales recomendaciones, se hace necesario avanzar en la investigación y el conocimiento de los diversos contextos en los que se hace posible la violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico.

2.- Regulación legal de la violencia doméstica en los países latinoamericanos

2.1. En Argentina

Argentina no ha recurrido a la vía punitiva para prevenir y sancionar los actos de violencia en el entorno social más cercano. Sin embargo, la Ley No 24,417 (Ley de Protección contra la Violencia Familiar) del 28 de diciembre de 1994, se erige como el instrumento legislativo a través del cual se pueden lograr determinados niveles de protección, bajo sus diez artículos, otorgando facultades al Juez de otorgar medidas de protección, mas no sancionar o condenar al agresor.

Esta ley permite a quien sufra de maltrato físico o psicológico por parte de alguno de los integrantes de su núcleo familiar —cuya génesis puede ser el matrimonio o el concubinato— denunciar los hechos (verbalmente o por escrito) al juez con competencia en asuntos de familia. La víctima de violencia familiar puede también, en tal virtud, obtener medidas cautelares conexas a su favor.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) fue creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, con el objetivo de facilitar el acceso a justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Entre las tareas que lleva a cabo la OVD destaca la elaboración de estadísticas sobre la problemática de la violencia familiar (ver material adjunto). Del informe anual realizado recientemente por la OVD surge que en el último año –concretamente, desde septiembre de 2008 hasta el 30 de octubre-, la oficina recibió 6746 denuncias y detectó 8354 personas que sufrieron maltratos familiares (Ravalli, 2009).

La mayor cantidad de víctimas se registró entre las mujeres (82%). El 51% de los casos correspondió a la franja que va de los 22 a los 39 años; el 17%, a la comprendida entre los 40 y 49 años; y el 15%, a niñas menores de edad (de 0 a 18 años) (Ravalli, 2009).

En el caso de los varones, el porcentaje de afectados alcanzó al 18%, de los cuales el 61% correspondió a denuncias que involucran a niños (0 y 18 años).

Los datos permiten determinar asimismo que entre las personas denunciadas, el 84% de los casos son parejas (esposos, concubinos, novios) y casi un tercio (31%) de estas denuncias el agresor es la ex pareja de las víctimas (Ravalli, 2009). La relación entre la cantidad de víctimas y sus barrios de procedencia es la siguiente: Flores figura primero con 483 personas afectadas; le siguen Lugano (354) y Barracas (244), mientras que Palermo y Caballito tienen un nivel similar (cerca de 224).

Respecto del tipo de violencia que se ha observado a través de los casos ingresados en la OVD, la mayor cantidad corresponde a violencia psicológica (89%). Le siguen la violencia física (68%), la económica (30%) y la sexual (14%). El informe aclara que la suma de los porcentajes excede el cien por

ciento ya que en un mismo caso pueden observarse diferentes clases de violencia.

Del relevamiento surge que la gran mayoría de los expedientes fue derivado al fuero civil (4907), mientras que se dio intervención al fuero penal en 3382 casos. El informe aclara que un mismo legajo puede ser derivado a ambos fueros, en función del tipo de ilícito cometido. Asimismo se han derivado 2248 expedientes a asesoramiento jurídico, y 1633 al sistema de salud. En una determinada cantidad de casos (417), la víctima, luego de haber sido informada y asesorada, decidió no actuar.

2.2. En Chile

Como se ha señalado anteriormente, el vecino país de Chile no cuenta con una regulación penal autónoma de los malos tratos familiares. No obstante, cuenta con una ley que prevé los procedimientos y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, la Ley No 19.3255, vigente desde 1994 como resultado de una serie de compromisos internacionales suscritos por la nación chilena

Ahora, la Ley chilena No 19.3255 no es una ley de naturaleza penal, sino más bien de naturaleza civil, lo que ha provocado importantes cuestionamientos y propuestas de delegar la resolución de los supuestos de violencia intradoméstica a una jurisdicción especial conocedora del Derecho de Familia.

En cuanto a su procedimiento, CABALLERO BRUN señala algunas de sus notas distintivas. En primer lugar, se trata de un procedimiento muy rápido, en comparación con los términos propios de un proceso penal; en segundo lugar, la conciliación adquiere una posición de privilegio y a partir de ella el operador de justicia goza de una amplia libertad de decisión. Esta libertad de actuación del juez le permite disponer la aplicación de un interesante catálogo de medidas cautelares destinadas a garantizar la integridad física, psíquica y económica del agraviado; así como imponer medidas de asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar, de realizar pagos pecuniarios

(fijados en el sistema de días-multa) y hasta de privar de libertad al agresor (hasta un máximo de 60 días).

Sin embargo, en el 2005 –a nivel del país– se registraron 587 casos vinculados a violencia dentro de las familias por cada 100 mil habitantes. El mismo indicador en 2015 arrojó 682,4. En Aysén la cifra fue de 1.053 casos, muy superior al promedio nacional (ARAYA & CARMONA, 2016).

Hasta mayo del 2016, se produjeron 14 femicidios. ¿Qué hace que el problema de fondo no se detenga, que no exista una cultura diferente respecto a la violencia de género, que los medios aún cometamos el error de decir que una mujer es asesinada por celos o por amor? Para quienes trabajan en el tema hace años, la red que ha tejido políticas públicas para proteger a las mujeres sigue siendo un hilo –siempre– a punto de cortarse.

Si se analiza el presupuesto que el Servicio Nacional de la Mujer en Chile, destina a la Violencia contra la mujer, nos encontramos con esto: el año 2014 se entregaban para este ítem 9.086.749 (en miles de millones de pesos). El año 2015 fue de 12.328.558 (también en miles de millones) (ARAYA & CARMONA, 2016).

Si se trata de analizar las cifras, Thelma Gálvez, economista especialista en temas de género, revisa las partidas presupuestarias entre los años 2012 y 2016: *“Dentro de los gastos presupuestados por el servicio para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, las transferencias que se hicieron en 2012 al sector privado fueron de \$6.889.591. En 2013 y 2014 el presupuesto se mantuvo estable cerca de los \$7 millones y medio y en 2015 hubo un gran salto que superó los \$11 millones. En 2016 los traspasos realizados por el mismo concepto ascendieron a \$12.411.587”*(ARAYA & CARMONA, 2016), detalla.

Dentro del mismo rubro, –prevención y atención de la violencia de género– se indica que en 2012 las trasferencias al sector público fueron de \$834.267 y en 2016 de \$938.000.

Thelma Gálvez destaca el notable aumento en las transferencias al sector privado y que los montos anuales aumentaron en términos reales –es decir, más que el IPC– mientras que los traspasos al sector público fueron muy pequeños y no aumentaron en términos reales. “Es positivo que haya aumentado el dinero para el sector privado, porque la mayoría de las entidades que se hacen cargo del problema son ONG”, explica Gálvez.

Sin embargo, las críticas, que tienen distintos orígenes, estriban en que al momento de hablar de presupuesto, el cambio de escenario no puede ser sostenido solamente desde un servicio.

La economista asegura que los casos que atiende el Sernam son solo una parte pequeña de lo que ocurre en violencia. “Una mujer golpeada va al sistema de salud, recibe apoyo de Carabineros, y todo eso no pasa por el Sernam. Cuando una denuncia pasa por el sistema judicial y llega a Carabineros que atiende a la mujer violentada, lo hace con plata de su propio presupuesto, con dineros que no están destinados específicamente a atender casos de violencia intrafamiliar”, señala Gálvez, quien también señala que muchas de las mujeres que son apremiadas, por miedo o vergüenza, no denuncian a sus agresores.

La economista agrega que debería existir en el presupuesto de las instituciones que apoyan la prevención y atención de la violencia intrafamiliar un ítem específico para ello, por ejemplo, en los casos de Carabineros, la Policía y el Poder Judicial. “A veces Carabineros debe hacerse cargo de que se cumpla una orden de restricción por agresiones, pero no tiene los recursos suficientes para hacerlo”, explica (ARAYA & CARMONA, 2016).

2.3. En Colombia

La nueva legislación penal de Colombia, vigente desde el 25 de julio de 2001 a partir de la Ley No 599/2000, ha introducido al catálogo punitivo colombiano dos tipos penales relacionados al fenómeno de la violencia intrafamiliar: el delito de violencia intrafamiliar (artículo 229) y el delito de maltrato familiar mediante restricción de la libertad física. El delito de

violencia intrafamiliar se encuentra descrito en el artículo 229 del Código Penal de Colombia y se integra dentro de los delitos contra la familia (Título IV, del Libro II, Código Penal). Entre sus principales signos distintivos podemos notar la excesiva amplitud —y hasta vaguedad diríamos— de la forma en que ha sido descrita la conducta típica, en virtud a la utilización —como verbo rector— de la expresión y del elemento normativo "núcleo familiar" (PRETELL DIAZ, 2016).

Es difícil entender cuál ha sido la ratio de un dispositivo como el contenido en el artículo 229 del Código Penal colombiano, si es que el "maltrato" se refiere a los ámbitos físicos, psíquicos y sexuales, y su operatividad se produce "siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor". Parece ser que este delito de violencia intrafamiliar, más que contener un injusto propio, trata de actuar como especie de "red" para evitar la impunidad o la punición simbólica de ciertas conductas de violencia intradoméstica.

El artículo 230 del Código Penal de Colombia contiene una modalidad de atentado contra la libertad individual relacionada al ámbito familiar. Este precepto sanciona a quien "mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o en menor de edad sobre el cual no ejerce patria potestad" (PRETELL DIAZ, 2016).

Una de las principales dificultades que puede observarse en la tipificación de la conducta antes aludida es la utilización del elemento normativo "grupo familiar", que —tan igual como la expresión "núcleo familiar" del artículo 229 del Código Penal— resulta exageradamente difusa.

La ineficacia en la penalización de la violencia familiar en Colombia, se ve reflejado en las estadísticas, ya que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, otorga datos oficiales que muestra más de 25.000 mujeres han sido agredidas por su pareja este año, mientras que 4.000 hombres se han visto afectados por este tipo de violencia. Así mismo, son víctimas de esta problemática social 5.827 niños, niñas y adolescentes; 8.710

personas entre hijos, hermanos, tíos y cuñados, y 933 adultos mayores (DIARIO SEMANA, 2016).

Los departamentos más vulnerables son: Bogotá (con 11.687 casos), Antioquia (4.576), Cundinamarca (3.471), Valle del Cauca (3.029), Santander (2.413), Atlántico 2.178, Boyacá (1.613), Meta (1.577), Norte de Santander (1.262), Bolívar (1.232) y Tolima (1.204). Por ciudades, Bogotá se ubica de lejos en el primer lugar, con 11.687 denuncias; le siguen Medellín (2.914), Cali (1.496), Barranquilla (1.370), Villavicencio (1.274), Soacha (1.257), Cartagena (876), Ibagué (822), Neiva (715), Santa Marta (707) y Bucaramanga (695).

Los departamentos con menor número de registros son: Vichada, que reportó 16 hechos por violencia intrafamiliar, Guaviare (78), Amazonas (108), San Andrés (148), Chocó (162), Putumayo (182) y Caquetá (251) (DIARIO SEMANA, 2016).

Según una reciente investigación de la Universidad de La Sabana, los tipos de violencia más comunes son aquellos que son “aceptados socialmente” o en el peor de los casos el maltrato que parece invisible; como, por ejemplo, menospreciar, zarandear o sacudir; chistes o bromas de mal gusto; golpes hacia los objetos para mostrar autoridad e infundir miedo; celos obsesivos que no permiten a la pareja verse con familiares o amigos, o la amenaza constante en la que la otra persona chantajea o intimida diciendo que se va a ir de la casa o que va a terminar la relación.

Algunos casos de comportamientos violentos, particularmente hacia las mujeres, son aceptados socialmente o simplemente se ven como algo normal. Un ejemplo claro de esta situación se percibe en las respuestas que dieron 237 mujeres campesinas de un universo de 2.876 familias, con edades entre 16 y 81 años, quienes justifican en el 50 % de los casos la violencia, especialmente cuando la otra persona “lo merece” (DIARIO SEMANA, 2016).

Según el 70 % de los encuestados, una persona maltratada es culpable de permanecer junto a quien la maltrata; el 81 % considera que la familia debe

permanecer unida a cualquier costo, así esto implique soportar cualquier tipo de agresiones; el 55 % afirma que las personas que agreden a sus familiares es porque son violentas por naturaleza, es decir, aceptan la violencia como algo normal; el 18 % piensa que es correcto acudir a los golpes para solucionar conflictos, y, lo más preocupante, el 90 % está de acuerdo con que “la ropa sucia se lava en casa” y por eso guardan silencio ante cualquier tipo de atropellos.

2.4.- En Ecuador.-

Desde 1995 cuenta la República del Ecuador con una "Ley contra la violencia a la Mujer y a la Familia" que aparece -según refiere TORRES CHÁVEZ— como un "sistema híbrido civil-penal, pues hay 'demanda', audiencia de conciliación y pagos de daños y perjuicios, pero también con competencia penal en los casos de violencia física, psicológica o sexual, con asistencia policial y allanamiento de domicilio.

Aunque los términos del artículo 1 de la mencionada ley ecuatoriana, cuando dice que el objeto de la ley es "proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia", parecen mostrar —parafraseando a TORRES CHÁVEZ— una especie de "hembrismo" debido a que se "está marginando al amparo de la ley al estimo que el "hembrismo" al que hace alusión el penalista ecuatoriano es solo aparente, en la medida en que el direccionamiento del objeto de la ley a los "miembros de la familia" hace que la referencia a "la mujer" sea innecesaria.

El 6 de mayo de 1994 se crea la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, convirtiéndose en el brazo ejecutor de la ley 103, la misma que con la creación del Reglamento de la Policía Judicial, mediante decreto ejecutivo del 5 de junio del 2003 cambia el nombre a Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Judicial. Tiene como principales funciones Investigar las presuntas infracciones intrafamiliares bajo la dirección de los

fiscales, realización de actividades preventivas en relación con las infracciones descrita en dicha ley y Diseñar un sistema de registro de infractores y estadísticas de sentencias condenatorias en su área y remitir en forma periódica dicha información al Archivo Central.

La violencia doméstica en Ecuador preocupa a las autoridades, pues, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), seis de cada 10 mujeres han sufrido maltrato físico, psicológico o sexual. De acuerdo con datos del CJ, entre julio y diciembre de 2013 se registraron 31.000 denuncias de violencia doméstica en las unidades judiciales de familia, niñez y adolescencia (ECUADOR INMEDIATO, 2014).

2.5. En Costa Rica

La República de Costa Rica carece también de una regulación penal de los malos tratos en el ámbito doméstico, aunque existe una Ley de Violencia Doméstica con connotaciones para el Derecho Penal.

Costa Rica ratificó el 28 de junio de 1995, mediante ley N°7499, la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, "CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ", que en su artículo 1 señala: "debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (INAMU, 2017). Y en el artículo 2 se especifica los espacios donde se puede perpetrar señalando lo siguiente "entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

- Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

- Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en las instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar
- Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra."

Se dice que la Ley de Violencia Doméstica incide en sede penal en virtud a que contiene una cláusula de remisión, en cuya virtud de disponer que sea el tipo penal de desobediencia a la autoridad el aplicable en aquellos supuestos en que se desacaten las órdenes de protección recaídas en los procesos especiales por violencia intrafamiliar.

Esta Ley de Violencia Doméstica posee además determinadas previsiones de carácter adjetivo, como la posibilidad de imposición de medidas de protección, la salida del agresor del hogar familiar y la restricción de concurrencia a determinados lugares frecuentados por la víctima.

La magnitud de la violencia intrafamiliar en el país, es difícil de cuantificar con certeza. Esto debido a que la detección y denuncia de estas situaciones no suelen ser frecuentes, y cuando son detectadas en forma directa o indirecta por las instituciones públicas, no siempre se registra en forma sistemática. Esto hace que exista un alto sub-registro que obstaculiza el conocer las verdaderas dimensiones de estas problemáticas (INAMU, 2017).

Más allá de la violencia intrafamiliar en la sociedad costarricense no existe un reconocimiento generalizado de otras formas de violencia contra las mujeres y sus implicaciones, tales como el acoso sexual, la trata de personas, la explotación sexual, la violencia patrimonial y la violencia psicológica. Las mujeres son las víctimas más frecuentes de la violencia por razones de género, un flagelo que se expresa no solo de manera física, sino también en forma verbal, patrimonial y sexual entre otros.

3. LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SU TRATAMIENTO EN EUROPA.

Más de 25 millones de mujeres europeas fueron víctimas de violencia machista en el año 2014, los países más castigados por este tipo de violencia son los del norte de Europa, que paradójicamente invierten más en programas de educación para la igualdad de género.

A nivel europeo, 13 millones de ciudadanas experimentaron violencia física, 3,7 millones sufrieron violencia sexual y 9 millones, acoso sexual. Estas son las conclusiones principales sacadas de la primera macroencuesta europea sobre violencia machista que realizó la Agencia Europea de Derechos Humanos en marzo de 2014.

“La violencia de género es un fenómeno muy complejo, y si a ello le añadimos el contexto cultural, político, y social tan diferente entre unos países y otros de la UE, hacen que cualquier comparación deba hacerse con mucha precaución.” Advierte Zulema Altamirano, especialista del Instituto Europeo por la Igualdad de Género.

Marisa Soleto, Directora de la Fundación Mujeres, avisa: "Hay que tener en cuenta dos cuestiones para hacer la comparación entre España y la UE y es que ni las legislaciones ni las formas de contabilización son homologables". "La orden de protección europea asegura que la protección impuesta en un Estado miembro se aplique en cualquier otro país de la UE al desplazarse la víctima"

Y efectivamente es así. No existe al día de hoy una política unificada entre los países miembro para acabar con este fenómeno. Sin embargo, Soleto recuerda algo positivo y es que sí hay una orden de protección europea vigente, la cual sirve de instrumento para "asegurar que la protección impuesta en un Estado miembro se aplique en cualquier otro país de la UE al que se desplace la víctima. Esta directiva cubre a cualquier persona beneficiaria de una medida de protección en su país de origen, como por ejemplo una orden de alejamiento".

Rosa María Fernández, coordinadora del **Lobby Europeo de Mujeres** en declaraciones a *Público* reflexiona: "Estos países, en principio, han hecho programas de educación para la no violencia, y tienen recursos para la igualdad entre las personas. Debería dar resultados. Parece sorprendente este informe".

Los países miembros que encabezan la lista de casos de violencia machista son Dinamarca (52%), Finlandia (47%), Suecia (46%), Francia y Reino Unido, ambos con un 44%. Estos porcentajes representan a mujeres de la Unión Europea que han sufrido violencia física y/o sexual desde los 15 años de edad. España tiene menos de la mitad de casos en términos porcentuales que Dinamarca, un 22%.

Aunque resulten alarmantes estas cifras, Altamirano explica esta diferencia entre los países nórdicos y los del sur. Asegura que **al haber políticas de igualdad más efectivas en el norte "las mujeres son más propensas a hablar sobre situaciones de violencia vividas cuando son preguntadas en una entrevista"**. Por lo tanto, no es que se produzcan más casos que en otros países, sino que los que se dan son más visibles.

La experta añade que hay varios factores que apoyan esta idea. Por un lado, "no se ve lo que no se cree" esto significa que en países con más igualdad entre hombres y mujeres, la sociedad en general es más consciente sobre la violencia de género, y, por tanto, es más fácil para las mujeres identificar las situaciones de violencia. Además, en éstos se ve como un grave problema público que no se tolera, lo cual da más seguridad a las víctimas. Asimismo, si las ciudadanas tienen confianza en la justicia y la policía, denunciarán con más libertad, y por ende, esto se verá reflejado en cualquier encuesta.

3.1.- ALEMANIA

Los principales antecedentes del marco legal alemán en materia de violencia contra las mujeres, son la normativa sobre igualdad entre mujeres y hombres y los planes de acción frente a la violencia contra las mujeres desarrollados en las dos últimas décadas.

El Parlamento alemán aprobó una Ley Federal de Igualdad en el año 2001 que sustituyó a la Ley de Promoción de Mujeres de 1994. La Ley contiene una serie de disposiciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres dentro de la administración federal (Ministerio de Sanidad, 2013). Esto incluye la obligación de considerar y promover la perspectiva de género en todas las áreas de la Administración.

3.1.1.- Tipo de ley actual (Enfoque, conceptos y alcance)

El 1 de enero de 2002 fue aprobada en Alemania la Ley contra la Violencia. Esta ley desarrolla únicamente la obligación del Estado en términos de protección a las víctimas de violencia y acoso. Sin embargo, frente al enfoque integral del citado Plan de Acción, se trata de una ley de alcance parcial o sectorial, que únicamente establece medidas de protección.

Desde que la Ley de Protección contra la Violencia entro en vigor ha cambiado el concepto de lo que se entiende por violencia doméstica y ha pasado de ser algo privado a ser percibido como una ofensa pública. El Gobierno ha ido modificando sus políticas públicas y las ha ido ajustado a la Ley de Protección contra la Violencia.

Los delitos relacionados con la violencia están establecidos en el Código Penal Alemán, en el capítulo 17, Art. 223 y ss de una manera genérica y no se recoge de manera expresa el delito de violencia doméstica o de violencia de género.

Respecto al enfoque, marco conceptual y alcance de la norma, cabe decir que el Estado Alemán establece una política pública integral, desde un enfoque de género, frente a la violencia contra las mujeres. Y, sin embargo, ha promulgado una legislación de carácter sectorial, que actúa fundamentalmente en el plano de la protección de las víctimas, y sin enfoque de género. Tampoco existe una mención expresa en la ley al marco de obligaciones de derechos humanos, como sí contienen los Planes de Acción.

La ley resulta neutra respecto al género y tampoco establece un principio de no discriminación, ni una obligación de atender a las necesidades de las víctimas especialmente vulnerables. Estos dos principios rectores – clave en el marco internacional de derechos

humanos - se recogen únicamente de los citados Planes de Acción pero no tienen un reconocimiento normativo.

3.2.- AUSTRIA

El marco jurídico y de política pública contra la violencia doméstica en Austria inicia su andadura a mediados de la década de los 90', con importante énfasis en la protección a las víctimas. En este tipo de medidas Austria fue un país pionero, siendo el primer país de la UE en instaurar medidas de protección judicial que permitían ordenar a los denunciados por violencia doméstica salir del domicilio de la denunciante.

Con el objetivo de mejorar la protección, se ha establecido en 2011 un Programa piloto, denominado llamado MARAC en Viena y tiene como objetivo el trabajo conjunto de diversas agencias para dar un mayor apoyo a víctimas con un riesgo elevado. (Pendiente de desarrollar e identificar como buena práctica)

Además, Austria ha promulgado recientemente planes de acción contra otras manifestaciones de la violencia de género. Como ejemplo, el Plan de Acción Nacional de Prevención para la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina para los años 2009-2011.

3.2.1.- Tipo de ley actual

Austria aprobó la primera ley de protección contra la violencia doméstica en noviembre de 1996 y entró en vigor en mayo de 1997. A esta norma le siguieron otros cambios normativos con la finalidad de mejorar la actuación del Estado frente a este tipo de violencia. En 2000, entra en vigor la ley de Seguridad Policial y en 2004 se reforma del Código Penal en el año 2004. La ley otorga protección a la víctima respecto de su agresor. La ley autoriza a la policía a imponer órdenes de restricción para los agresores (Ministerio de Sanidad, 2013).

Una década después de la aprobación de la primera ley contra la violencia doméstica, el parlamento austriaco prueba la segunda Ley de Protección Contra la Violencia, que entra en vigor en junio del 2009. Esta segunda ley introduce, entre otros cambios, una reforma en la Ley de Seguridad Policial que pretende reforzar la seguridad de las víctimas.

Respecto al enfoque, en principio, la ley austriaca obedece a un enfoque neutro respecto al género, que concede importancia a la protección frente a la violencia en la familia y las relaciones íntimas pero no contextualiza esta protección como parte de la lucha contra la discriminación de las mujeres. La ley provee protección frente a la violencia en la pareja o ex-pareja (mujeres y hombres, casados o que viven en pareja, incluyendo a parejas del mismo sexo, y ex parejas). También protege a todas las personas que integra la familia, incluidos niños/as. Por último, la ley recoge expresamente que la protección se extiende a personas migrantes, solicitantes de asilo, incluidas las personas migrantes en situación administrativa irregular.

Si bien la ley enfatiza las medidas de protección de las víctimas y de restricción de los denunciados, se puede considerar que aporta un enfoque integral de actuación, ya que incorpora también la responsabilidad de apoyo social y asesoramiento legal a las víctimas, fundamentalmente a través de los centros de intervención.

3.2.2.- Responsabilidades del Estado

En Austria no existen Planes de Acción Nacional que desarrollen la ley de doméstica. Sin embargo, el Estado desarrolla las medidas establecidas en las leyes de violencia doméstica, fundamentalmente de protección, a través de la reforma de otras leyes como es el caso de la Ley de Seguridad Policial y de las modificaciones en el Código Penal.

Austria cuenta con una extensa red de centros de acogida para mujeres víctimas, que fueron establecidos por la primera Ley de Protección contra la violencia doméstica. Algunos de ellos ofrecen acceso a mujeres migrantes en situación irregular, romaníes y mujeres con discapacidades. Este es ejemplo que refleja que la norma incorpora en su implementación medidas de refuerzo de la protección a sectores en situación de discriminación múltiple. (Pendiente de desarrollar el apartado de medidas de protección en Austria con la finalidad de valorar su inclusión en el documento de buenas prácticas). En Austria las medidas de protección, entre ellas la orden de restricción que puede imponer la policía ha sido una medida vanguardista que se ha tomado como modelo en otros países. Incorpora las siguientes obligaciones importantes en clave de protección:

- La imposición de una distancia inmediata entre el agresor y la víctima.
- La obligación legal de la policía, desde la concesión de la orden de protección, de informar a los centros de acogida para que ofrezcan a las mujeres apoyo y protección.

3.3.- BULGARIA

En la década de los 90' se desarrolló en Bulgaria el proyecto de investigación *Violencia doméstica como abuso contra los derechos humanos*, liderado por la Fundación Búlgara de Investigación en Género y Abogados por los Derechos Humanos (Ministerio de Sanidad, 2013). Este proyecto culminó en un informe que dio lugar a cambios en la legislación general búlgara con el fin de mejorar la protección de los derechos de las mujeres frente a la violencia. Ya en la pasada década, el Estado búlgaro estableció múltiples planes acción para la igualdad de género.

A partir de 2005 el Estado aprobó sucesivos Planes Nacionales de Igualdad de Género que establecieron diversas medidas de promoción de la igualdad en la educación y la salud y la protección contra la violencia

doméstica y el tráfico de seres humanos. En el año 2009 Bulgaria adoptó una nueva Estrategia Nacional para la Promoción de Igualdad de Género 2009-2015, con la finalidad de transponer las Directivas de la UE relacionadas con la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y las obligaciones derivadas de los tratados internacionales en materia de no discriminación contra las mujeres (Ministerio de Sanidad, 2013). La citada Estrategia se ha ido implementando, a través de planes anuales de igualdad:

Como contexto cabe decir que en 2002 la trata de seres humanos fue tipificada como delito en el Código Penal y, en 2003, se promulgó en Bulgaria una *ley contrala trata de seres humanos*. Esta norma comprendía medidas de prevención, creación de centros de atención y servicios de protección y apoyo especialmente para mujeres y niños/as. También articuló medidas de especial protección para las víctimas de trata que colaboran en la investigación judicial contra las redes de trata.

La elaboración de planes de acción, así como la legislación contra la trata de personas y la violencia contra las mujeres desarrollada entre 2002 y 2006 están íntimamente relacionadas con el acceso de Bulgaria a la UE en 2007.

3.3.1.- Tipo de ley actual

El Parlamento Búlgaro aprobó en 2005 la *Ley de protección contra la violenciadoméstica*, de 29 de marzo de 2005. Se trata de una ley de carácter sectorial, ya que establece únicamente medidas de protección de la víctima y el procedimiento para llevar a cabo esas medidas de protección. Concretamente, establece una orden de protección para las víctimas de violencia.

En términos de enfoque, la ley búlgara carece de enfoque de género, ya que el sujeto pasivo puede ser cualquiera de las personas integrantes de la familia, con independencia del sexo: ascendiente, descendiente, hermano o hermana, etc. También se incluye como sujeto

pasivo la pareja o ex pareja, siempre que se conviva o se haya convivido o se tenga un/a hijo/a en común.

Recoge la violencia física, mental o sexual o cualquier intento de dicha violencia, así como la restricción forzosa de la libertad individual y de la privacidad llevada a cabo contra personas que tienen o han tenido familia o lazos de parentesco o conviven o viven en la misma casa.

3.3.2.- Responsabilidades del Estado e implementación de la ley

A pesar de que la Ley sólo establece medidas para la protección de las víctimas, la propia norma señala una obligación de desarrollar Programas para prevenir la violencia doméstica y asistir a las víctimas.

Por mandato de la Ley se crea un grupo de trabajo formado por varios Ministerios (Interior, Justicia, Trabajo y Social, de Salud, Economía y Educación y Ciencia). Estos Ministerios junto con otros organismos elaboraron el Programa de Prevención y Protección de Violencia Doméstica. El 19 de octubre de 2006 se aprueba el Plan de Prevención y Protección de Violencia Doméstica (2007-2008) establece medidas de sensibilización, atención y programas de rehabilitación para víctimas de violencia doméstica e hijos/as. También prevé medidas preventivas, como programas de educación y guías de información de los derechos de las víctimas.

3.4.- CROACIA

Croacia cuenta con un marco normativo avanzado en materia de igualdad de oportunidades: el 15 de Julio de 2008 se aprobó en este país la Ley de Igualdad de Género y en 2011 se estableció una Política Nacional de Igualdad de Género para el periodo 2011-2015.

3.4.1.- Tipo de ley actual

Croacia cuenta con una Ley contra la violencia doméstica, adoptada en el año 2009 y modificada dos veces en 2010. Esta ley establece la protección de los miembros de la familia frente a la violencia recíproca. Según la ley, la protección se extiende a *“personas adultas o menores dentro del matrimonio, relaciones de larga duración tanto presentes como pasadas, relaciones de sangre y relaciones por afinidad y adopción o tutela”*. Con lo cual, se inscribe más en un enfoque de protección de la familia que de protección de los derechos de las mujeres frente a la discriminación. En el artículo 4 de la Ley de violencia doméstica se define la violencia doméstica tanto física como psicológica, daños físicos y psicológicos, temor, violencia contra la dignidad personal, abuso verbal humillante, acoso sexual, entre otros (Ministerio de Sanidad, 2013).

La ley obedece a un enfoque parcial ya que incorpora medidas de protección (órdenes de protección dictadas por los tribunales) y sanción hacia el agresor (tratamiento psicológico, prohibición de contactar con la víctima, y prohibición de porte de armas). La ley contempla la reforma del Código Penal para incluir sanciones específicas. La implementación de la Ley implica la posibilidad de ofrecer asesoramiento legal a mujeres supervivientes durante los procedimientos en los juzgados y ayuda legal gratuita también para la familia de supervivientes de violencia.

Por otra parte, una derivada importante del ambiguo marco conceptual de la ley, neutro respecto al género, parece llevar a lo que se han denominado *“las detenciones duales”*, lo que significa que la víctima es arrestada junto con el infractor. La Red WAVE en un informe reciente muestra preocupación porque afirma que *“los arrestos duales son el resultado de los términos amplios en la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica, que proporciona un nivel de ambigüedad que permite que las víctimas sean detenidas por los*

insultos verbales, incluso en casos en los que los autores utilizan la violencia física contra la víctima. Esto se traduce en las víctimas se sienten castigadas por la búsqueda de ayuda y les conduce a no buscar ayuda en el futuro”(Ministerio de Sanidad, 2013).

3.5.- HOLANDA

En 1984 se elabora en Holanda un memorando o plan de acción sobre violencia contra las mujeres (*“Combating Violence Against Women”*), seguido por otro en 1990, que incluía, además, de manera expresa la lucha contra la violencia hacia la infancia(*“Combating Sexual Violence Against Women and Children”*).(Ministerio de Sanidad, 2013) Esta política pública estableció las bases para luchar contra la violencia contra las mujeres en Holanda, abordando la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, el abuso sexual de niños/as y la violencia sexual en el trabajo. Sin embargo, aún no incorporó una visión general del problema ni estableció cauces de seguimiento de.

En el año 2005 se aprueba el Programa de Emancipación, como primer instrumento estructurado de política pública para la igualdad de género para el periodo 2006-2010. Este Programa incorporaba un apartado sobre violencia contra mujeres y niñas, entre otros temas. En el año 2007, el Plan denominado *“Más oportunidades para las mujeres”* para los años 2008-2011, incluyó entre sus cuatro objetivos el de “prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas y la contribución a todas formas de discriminación contra las mujeres”.

Actualmente, está vigente el plan aprobado por el Gobierno de Holanda para los años 2011-2015 (*“La Emancipación de Mujeres y Personas LGBT”*).

Según se recoge en un Estudio de casos sobre respuestas del Estado en materia de violencia contra las mujeres, los planes de acción holandeses contra la violencia, no son específicos contra las mujeres, sino que incorporan una definición de “violencia doméstica”, como *“acto cometido por una persona del círculo doméstico de la víctima, incluyendo pareja o expareja, miembros y amigos de la familia. Se refiere por tanto a la relación existente entre el*

agresor y la víctima que puede ser abuso infantil, abandono de mayores, violencia sexual, y violencia psicológica”(Ministerio de Sanidad, 2013).

3.5.1. Tipo de ley actual

En Holanda no existe una ley específica de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica, que establezca protección específica. El delito de violencia doméstica no está tipificado de manera expresa en el Código Penal, ya que los artículos 301 y siguientes establecen los delitos contra las personas sin especificidades en función de la relación entre agresor y víctima. Únicamente, el artículo 304 del Código Penal holandés señala un incremento de la pena si el sujeto pasivo del delito es la madre, padre, esposo/a, pareja o hijo/a del agresor.

El Comité de la CEDAW, en el año 2010, mostró preocupación por el enfoque “neutro respecto al género” del Gobierno holandés en el tratamiento de la violencia contra la mujeres, pudiera estar debilitando la noción de violencia como discriminación contra las mujeres y recomendó a Holanda crear un “marco nacional para combatir la violencia contra las mujeres”.

3.6.- ESPAÑA

El Gobierno español aprobó en 1998 el I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998-2000) y en 2001 el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica (2001-2004). Ambos instrumentos de trabajo presentan medidas interdisciplinarias para paliar la violencia doméstica.

El primer antecedente normativo de la legislación española contra la violencia de género fue la reforma del Código penal español que incorporó, en el año 1989, la tipificación de conductas relacionadas con la violencia física y psicológica contra las mujeres en el ámbito familiar y/o de pareja o expareja, la violencia sexual, la mutilación genital femenina o el tráfico de personas con

fines de explotación sexual. Respecto a las medidas de protección de las víctimas, cabe destacar como norma fundamental la Ley 27/2003, de 31 de julio, *reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica*, que constituyó una herramienta jurídica de protección integral (penal, civil) e inmediata de las víctimas de violencia doméstica (Ministerio de Sanidad, 2013).

3.6.1.- Tipo de Ley (Enfoque, conceptos y alcance)

El 29 de diciembre de 2004 se promulgó en España la *Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género* (en adelante, *Ley Orgánica 1/2004*). Esta norma supuso un avance en la dirección apuntada por los organismos internacionales y comités de Naciones Unidas porque establece un marco de actuación institucional, coordinado e integral.

La Ley Orgánica 1/2004 cumple la recomendación del Comité de la CEDAW de contextualizar la violencia contra las mujeres como expresión última de la discriminación por motivos de género. El propio concepto utilizado por la norma (violencia de género) remite a la violencia cometida contra las mujeres en un contexto de discriminación.

Además de incorporar un enfoque de género, la norma menciona expresamente el marco de derechos humanos como contexto normativo de referencia. Sin embargo, la norma restringe el objeto de protección a la violencia contra las mujeres cometida en el ámbito de la pareja o expareja, no atendiendo a la definición internacional establecida en los estándares de Naciones Unidas.

Es de destacar que a través de dicha ley por primera vez se reconoce en España que “*todas las mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social tienen garantizados los derechos de esta ley*” (Ministerio de Sanidad, 2013). Igualmente, por

primera vez se reconocía la existencia de determinados colectivos de mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios.

3.6.2.- Responsabilidades del Estado

La Ley Orgánica 1/2004 supuso un hito fundamental en la asunción de un amplio catálogo de obligaciones institucionales frente a la violencia de género en ámbitos como la prevención y detección de la violencia, la atención y protección a las víctimas y la sanción de los agresores. La interdisciplinariedad, la especialización y el abordaje integral se pretendían lograr a través de las siguientes previsiones:

Abordaje interdisciplinar e implicación de sectores profesionales que hasta la aprobación de la ley habían sido involucrados. Creación de órganos de impulso y coordinación de políticas públicas y de estudio e investigación del fenómeno (la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer).

Establecimiento de un sistema de justicia especializada: La Ley Integral estableció la creación de los denominados Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) como órganos especializados y con competencia para conocer e instruir los procesos penales sobre delitos relacionados con la violencia de género. También estableció disposiciones para que determinados juzgados de lo penal y secciones de las audiencias provinciales se especializaran. Amnistía Internacional acogió con satisfacción que la Ley Integral incluyera disposiciones relacionadas con los procedimientos ante la justicia, siguiendo lo recomendado por los organismos internacionales de derechos humanos en esta materia. Del mismo modo se consolidó la especialización de la abogacía, ya iniciada con anterioridad a la Ley Integral.

3.7.- LETONIA

Letonia cuenta con planes de igualdad entre mujeres y hombres desde 2005. El Programa de Igualdad de Género 2005-2006 fue la primera política pública que este país articuló medidas de sensibilización, conciliación de la vida personal, laboral y familiar y medidas para la incorporación del enfoque de género en el trabajo de la Administración pública.

El segundo plan de acción aprobado por el Gobierno de Letonia fue el Programa 2007-2010 para la implementación de la igualdad de género. Además de las líneas del Programa anterior, destaca la inclusión de la actuación contra la violencia doméstica como una de las líneas prioritarias de acción en el plan.

Resulta contradictorio que, según la información recabada, el último Plan de Acción para la Igualdad de Género, aprobado por el Gobierno, que engloba los años 2012-2014 contempla cuatro áreas de acción (minimización de roles y estereotipos de género, promoción de la salud y un ambiente agradable para hombres y mujeres, independencia económica e igualdad de oportunidades y evaluación de la política de igualdad de género). No incorpora la lucha contra la violencia doméstica como línea clave de actuación, como sí realizaba el plan de acción del periodo anterior. (*pág79 Gender Equality Index – Country Profiles, European Institute for Gender Equality, 2013*)

La ley sobre la residencia para víctimas de trata de seres humanos de 25 de enero de 2007 regula únicamente la concesión de residencia para víctimas de trata por su colaboración en la investigación del delito. Regula el procedimiento de concesión de residencia y hace mención a los programas de rehabilitación de víctimas de ata. No hay una ley que regule la trata de seres humanos, la definición viene recogida en el Código Penal.

3.7.1.- Tipo de ley actual

En Letonia no hay una legislación específica sobre violencia contra las mujeres y la normativa que contempla conductas relacionadas con la violencia doméstica no tienen perspectiva de género.

La única ley relacionada con un aspecto de la violencia contra las mujeres es la *Leysobre la residencia para víctimas de trata de seres humanos*, de 25 de enero de 2007 que regula la concesión de residencia para víctimas de trata por su colaboración en la investigación del delito. Regula el procedimiento de concesión de residencia y hace mención a los programas de rehabilitación de víctimas de trata.

El enfoque de la escasa legislación que contempla conductas relacionadas con la violencia contra las mujeres en las relaciones familiares o de pareja resulta desprovisto de base que permita relacionar estas conductas con la discriminación por motivos de género. Como ejemplo, se identifica un enfoque “familista” en la legislación penal, ya que el código penal de Letonia contempla un capítulo sobre delitos “contra la familia y los/as menores” que incluye como sujetos pasivos del delito a personas con lazos familiares y especialmente menores. A su vez, el Código Penal establece una circunstancia agravante en caso de que la violencia o la amenaza de violencia sea cometida “*contra marido, mujer o ex o relación de parejano registrada, entre otras*”(Ministerio de Sanidad, 2013).

3.7.2.- Responsabilidades del Estado

El enfoque “familista” identificado, no compatible con una visión de género y derechos humanos, queda reflejado en la información proporcionada por la persona punto focal de Letonia, que afirma que “*la policía recibe muchas llamadas de “conflictos familiares” pero el 97% no finalizan en un procedimiento penal. Esto significa que la respuesta policial es débil todavía. Y la asistencia a*

víctimas de violencia doméstica se presta teniendo en consideración, de manera prioritaria, las necesidades de los/as niños/as”(Ministerio de Sanidad, 2013).

Las medidas para la rehabilitación de víctimas se han pospuesto hasta 2015 debido a la crisis económica. En relación a la compensación y asistencia legal a las víctimas, el Estado provee asistencia legal en casos de violencia grave pero las estadísticas no informan sobre cuántos de los casos atendidos constituyen violencia contra las mujeres.

A falta de continuar la búsqueda y de desarrollar el análisis, Letonia se identifica como un país no sólo falto de instrumentos normativos o de políticas adecuados a la protección de los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia. También destaca la ausencia de enfoque de género y la confusión entre violencia contra las mujeres y “conflictos de pareja”.

3.8.- POLONIA

El antecedente más importante de la iniciativa legislativa polaca frente a la violencia contra las mujeres es un protocolo policial aprobado en 1998. Se trata del procedimiento policial denominado “Blue Card”, implementado por el Ministerio de Interior, que establecía medidas específicas para recoger y tramitar las denuncias por violencia doméstica. Este procedimiento dio lugar, así mismo, a una mejora de la cooperación policial y judicial con los denominados “*centros de intervención para asistir a la familia*”. Este procedimiento o protocolo de actuación contribuyó a unificar las prácticas policiales ante una denuncia por “violencia familiar”.

3.8.1.- Tipo de ley actual

En 2005, el parlamento de Polonia aprobó la *Ley Contra la Violencia Doméstica*, de 29 de julio de 2005. Se trata de una ley

específica contra la violencia doméstica que, sin embargo, no contiene un enfoque de género ni tampoco un enfoque en derechos humanos. El sujeto pasivo de la violencia doméstica, según establece el artículo 2.1 de la Ley, es “un miembro de la familia”, y remite al código penal, que establece el elenco de personas que pueden ser víctimas de un delito de violencia doméstica (Ministerio de Sanidad, 2013). Según la tipificación penal del delito de violencia doméstica son sujetos pasivos: esposo/a, un ascendiente, descendiente, hermano o hermana, y también al marido, mujer o persona que actualmente convive. Esta definición excluye del ámbito de protección a la ex-pareja, tanto para matrimonios como para parejas no casadas, lo cual supone una grave laguna, si se considera que muchas de las agresiones contra las mujeres se producen tras la ruptura de la pareja.

Al igual que en otros países analizados, en Polonia destaca el “enfoque familista” que inspira la legislación en esta materia. La ley se puede considerar de carácter integral, ya que prevé medidas de sensibilización, prevención, atención y protección.

3.8.2.- Responsabilidades del Estado

La Ley, en su artículo 10, establece la obligación de implementar un Plan de Acción con el fin de desarrollar medidas relativas a la protección y la ayuda para “personas afectadas por la violencia”. Incluye también el mandato de crear acciones en la sensibilización de la sociedad y medidas correctoras y educativas para las personas que ejerzan violencia.

En desarrollo de este mandato, en el período comprendido entre 2006-2009, el Gobierno de Polonia estableció el *Programa Contra la Violencia Doméstica*. Este Programa estableció una serie de acciones que incluyeron: el diagnóstico de la violencia familiar, incrementar la sensibilización y la cualificación de los servicios públicos, proveer

asistencia profesional a las víctimas de la familia e intervenir con los agresores. A su vez, los artículos 13 y 14 de la Ley establece las medidas que a imponer a la persona denunciada por un delito de violencia familiar (Ministerio de Sanidad, 2013). Las medidas contempladas son más bien de carácter correctivo. Y también se incluye medidas de alejamiento o prohibición de contactar con la víctima.

3.9.- PORTUGAL

Entre los diez países analizados, Portugal es el que posee una legislación más antigua contra la violencia doméstica, que regula tanto la protección a las mujeres víctimas como las medidas de atención y apoyo a las víctimas, incluido el establecimiento de casas de acogida.

El 13 de agosto de 1991 se promulgó una Ley de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica cuyo objetivo era garantizar una protección adecuada a las víctimas, a través de diversas medidas. En 1999, se aprobó una ley que regulaba únicamente y de manera concisa la creación y red de casas de apoyo a mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas.

Además de las leyes específicas contra la violencia doméstica, el Código Penal de Portugal tipifica el “maltrato en el matrimonio” como delito autónomo, desde 1982. En 2007, a través de una reforma del Código Penal se incrementó la pena del delito de violencia doméstica de 1 a 5 años de prisión.

Portugal también ha elaborado políticas públicas frente a otras manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Como ejemplo, en 2007, el Gobierno portugués promulgó un Programa de Acción para eliminar la mutilación genital femenina y lo hizo dentro del marco del III Plan Nacional de Ciudadanía e Igualdad de Género (2007-2010).

3.9.1.- Tipo de ley actual

La Ley actualmente vigente en Portugal es la Ley 112/2009 del 16 de septiembre, *que establece el régimen jurídico aplicable a la prevención de violencia doméstica, a la protección y a la asistencia de sus víctimas.*

El concepto de víctima establecido en la ley resulta compatible con un enfoque de violencia doméstica o conyugal, y parece exento de enfoque de género. La ley remite a la definición prevista en el delito de violencia doméstica del artículo 152 del Código Penal, que define la condición de víctima como “*persona que sufre undaño, normalmente un atentado a su integridad física o mental, un daño moral o una pérdida material directamente causada por acción u omisión, a manos de...*”(Ministerio de Sanidad, 2013).

La Ley 112/2009 es una Ley integral que establece medidas de sensibilización, prevención, atención a las víctimas, sanción y protección. Y señala, expresamente, la importancia de asegurar una respuesta integral desde los servicios sociales, de tutelar los derechos de las personas trabajadoras víctimas de violencia, de garantizar los derechos económicos de las víctimas y garantizar los derechos de salud de las víctimas, entre otras.

En relación a las medidas de protección establecidas, la legislación de Portugal incluye el alejamiento del agresor, que puede ser monitoreado por medios técnicos, la prohibición del uso de armas y obligación de ir a programas de atención y prevención de violencia doméstica. También se contempla la medida de retirada al agresor de la custodia de los hijos e hijas comunes con la víctima.

En el mismo año que la Ley contra la violencia, se aprueba la Ley 104/2009 de 14 de septiembre, que *regula la concesión e indemnización a víctimas de crímenes violentos y de violencia doméstica.* (Pendiente de ampliar el contenido de estaley).

3.10.- RUMANIA

A falta de profundizar en la búsqueda de antecedentes sobre políticas públicas de igualdad en Rumanía, destaca la aprobación, hace más de una década de una ley de igualdad. En 2002 el parlamento rumano aprueba la Ley 202/2002 de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

3.10.1.- Tipo de ley vigente

El parlamento rumano aprobó en 2003 la Ley 217/2003, de prevención contra la violencia doméstica. Esta ley, al igual que en otros países analizados, carece de enfoque de género, y se adscribe más bien a un enfoque protector de la familia. El artículo 2.1 de la *Ley contra la violencia* establece que el sujeto a proteger por la ley puede ser cualquier miembro de la familia víctima de la violencia cometida por otro miembro de la familia que le inflija un daño físico o verbal. Entre los sujetos pasivos de la norma se incluye también a la pareja con una relación análoga al matrimonio.

A pesar de que el enfoque general de la norma es neutro respecto al género, existe una excepción reflejada en el artículo 2.2 de la norma, que establece también como elemento constitutivo del delito de violencia doméstica el acto de “*impedir que la mujer ejerza sus derechos y libertades*”.

La *Ley contra la violencia*, en su artículo 1.2, se remite al Código Penal y a la tipificación de diversas conductas que podrían estar relacionados con la violencia doméstica.

El artículo 175 del código penal, además de incluir los delitos generales de homicidio, daños físicos y psíquicos, incluye también los delitos de violación, prostitución forzada, embarazo y esterilización forzosos y otras formas de violencia sexual. Y en el artículo 176 prevé la agravante de homicidio contra esposa/o o familiar cercano. También

tipifica el Código Penal Los artículos 202 y se establece el concepto de delitos como la esclavitud, trabajo forzoso, trata de personas, etc. y sus penas respectivas.

La *Ley contra la violencia* se puede considerar una ley integral ya que establece amplias medidas de apoyo, recuperación, y atención que deben recibir las víctimas a través de la Agencia Nacional para la Protección de la Familia. Por otra parte, compromete al Estado a instaurar centros de acogida para víctimas de violencia y a financiar Programas para la protección de la familia (Ministerio de Sanidad, 2013).

En desarrollo de la Ley contra la violencia, el Gobierno de Rumanía ha aprobado la Estrategia Nacional para la prevención y lucha contra el fenómeno de la violencia (2008-2013). Esta política prevé medidas de prevención y formación para profesionales relacionados con la atención, la protección y el acceso a la justicia (judicatura, abogacía, trabajadores/as sociales y). La Estrategia prevé una finalidad expresa de que la formación de los/as psicólogos/as se oriente a garantizar la capacitación e terapias con agresores.

3.11.- NORUEGA

La violencia doméstica (término empleado de forma general en la mayoría de los documentos del gobierno) tiene como antecedentes diversos planes nacionales de acción contra la violencia doméstica, así como la Ley de Igualdad de Género de 1979.

El primer plan de acción contra la violencia doméstica fue elaborado para el período 2000-2003 y se titulaba Plan de Acción de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde entonces el gobierno Noruega ha implementado otros 3 planes más, pero a partir del segundo plan se pasó a una nueva definición en la que el objeto de protección era la lucha contra la violencia doméstica, abandonando así el enfoque de género del primer plan.

Actualmente sigue vigente el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica 2012, que es una continuación del plan anterior previsto para el periodo 2008-2011. A comienzos del 2014 entrará en vigor el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica 2014-2017: “Una vida libre de violencia” (Plan V). Aunque en estos planes se reconoce que la mayoría de la violencia doméstica es ejercida por hombres contra mujeres, y tal y como dice en la introducción del Plan V, sus políticas públicas en esta materia se basan o asientan en la asunción de que la violencia doméstica es la causa, expresión y consecuencia de la falta de igualdad de género, a pesar de este reconocimiento expreso, las medidas previstas a lo largo del plan de acción no tienen un enfoque de género, pues no incluye medidas que permitan corregir la situación de desigualdad de partida entre hombres y mujeres.

3.11.1.- Situación actual

La violencia doméstica está considerada un delito y está regulado por el Código Penal en varios artículos o secciones del mismo. Así mismo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula las órdenes de protección vigentes en Noruega.

El Código Penal fue modificado en el año 2005 para incluir una disposición separada relativa a la violencia doméstica. Esta nueva disposición, el artículo 219 del Código Penal, pretendía fortalecer la protección que se brindaba a las víctimas de violencia doméstica. La modificación entró en vigor el 1 de Enero de 2006. Nuevas modificaciones fueron aprobadas en 2010, para incrementar la pena por maltrato a miembros de la propia familia (pasando de una condena máxima de tres a seis años) y en 2011, para incluir el término de pareja y equipararlo con el de cónyuge (Ministerio de Sanidad, 2013).

Así pues, el artículo o sección 219 del Código Penal recoge el delito de violencia doméstica. Dicho artículo estipula que cualquier persona que amenace, coaccione, prive de libertad, ejerza violencia o

cualquier otro mal severo o maltrato repetido hacia su pareja o expareja, descendiente directo de su pareja o expareja, su ascendiente en línea directa, o cualquier otra persona perteneciente a su hogar o a su cargo puede ser condenado hasta tres años de prisión. Así mismo el artículo añade que si el maltrato es severo o la persona agredida muere o sostiene daños considerables contra su integridad corporal o estado de salud como resultado de la violencia sufrida, la condena de prisión puede ascender hasta un máximo de 6 años. Así mismo, para decidir si el maltrato es severo se tendrá en cuenta si se ha prolongado en el tiempo y si se dan otras circunstancias consideradas agravantes según el artículo 232 del código penal como, por ejemplo, cometer el daño de forma particularmente dolorosa, por medio de venenos o cualquier sustancia altamente perjudicial para la salud, o con un chuchillo u otros instrumentos particularmente peligrosos.

Previamente a la aprobación de las modificaciones mencionadas, los delitos de violencia estaban regulados en el Capítulo 21 (Delitos contra la libertad personal) y Capítulo 22 (Delitos contra la vida, integridad personal o salud de otra persona). Estos capítulos definen qué constituyen actos violentos constitutivos de delito y estipula condenas para cualquier acto violento cometido contra otra persona, independientemente del tipo de relación que exista entre víctima y agresor o de la duración del maltrato. Las novedades que introduce el artículo 219 son: *que dichos actos violentos se deben dar dentro del ámbito familiar, especificando de hecho el tipo de relación de parentesco en que se aplica la ley para ese delito, así como que debe cometerse un mal severo o maltrato repetido, es decir, que hay un patrón de violencia que se prolonga en el tiempo*(Ministerio de Sanidad, 2013). De hecho las penas impuestas para este delito son mayores que las que prevén los artículos pertenecientes a los capítulos 21 y 22, lo que da una indicación clara de la intencionalidad de aumentar la protección a las víctimas de violencia doméstica frente víctimas de otro tipo de actos violentos. No obstante, puede darse, como

de hecho ocurre, que haya denuncias de violencia doméstica que no se persiguen a través del artículo 219 (si no se puede demostrar ese patrón repetitivo, por ejemplo) y pasen inadvertidas como violencia doméstica, ya que la policía no incluye en sus datos estadísticos la relación entre víctima y agresor cuando los delitos son contra la libertad o integridad personal.

El Nuevo Código Penal aprobado en 2005 (y pendiente de entrar en vigor una vez que el sistema informático del cuerpo de policía para el seguimiento de los procedimientos penales sea instalado/actualizado), el artículo 219 será sustituido por los artículos 282 (relativo a la violencia doméstica) y el artículo 283 (relativo a violencia doméstica severa). Ambos artículos prevén un aumento considerable de las penas máximas, pasando de cuatro a seis años para delitos de violencia doméstica y de seis a quince años la para delitos de violencia doméstica severa.

El Plan Nacional de acción contra la Violencia Doméstica 2014-2017 incluye medidas específicas (No. 30) para evaluar el funcionamiento adecuado del artículo 219 y si se está empleando realmente para atajar el problema de la violencia doméstica.

3.11.2.- Tipo de ley actual

La legislación noruega no cuenta con una ley específica de violencia de género, contra la violencia hacia las mujeres o de violencia doméstica. La legislación es de carácter sectorial, estableciendo medidas de protección a la víctima, en concreto órdenes de protección para las víctimas de violencia doméstica.

En cuanto al enfoque, la ley noruega no tiene enfoque de género, ya que el sujeto de protección puede ser cualquier miembro de la familia independientemente de la edad y del sexo.

Recoge la violencia física, mental o sexual o cualquier intento de dicha violencia, así como la restricción forzosa de la libertad individual y de la privacidad llevada a cabo contra personas que tienen o han tenido familia o lazos de parentesco o conviven o viven en la misma casa.

3.11.3.- Responsabilidades del Estado e implementación de la ley

Ley sólo establece medidas para la protección de las víctimas. Es a través de los planes nacionales de acción que se recogen las responsabilidades del Estado. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tiene como mandato desde al año 2000 coordinar los esfuerzos del gobierno en materia de lucha contra la violencia doméstica. Así mismo establece la creación de un grupo de trabajo inter ministerial (Sanidad, Educación, Trabajo, Infancia, Igualdad e Inclusión Social y el propio Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que igualmente coordina el grupo). El grupo de trabajo debe asegurar la implementación y puesta en marcha de las medidas adoptadas en el plan de acción vigente en cada momento, elaborar y publicar informes sobre el progreso en la implementación del plan dos veces al año, coordinar las acciones de los diferentes actores/agencias en los diferentes niveles gubernamentales y proponer nuevas medidas para combatir y prevenir la violencia doméstica.

El Plan de Prevención y Protección de Violencia Doméstica (2012 y prorrogado hasta la entrada en vigor del nuevo en 2014) establece medidas de sensibilización y formación a profesionales, atención y protección a las víctimas, programa de tratamiento a agresores, y coordinación y cooperación. Así mismo recoge medidas de reparación para ciertos delitos de violencia como matrimonios forzados.

3.12.- ISLANDIA

Islandia no dispone de legislación específica en materia de violencia de género o de violencia doméstica. La ley establece medidas de tipo sectorial para la protección de las víctimas regulando las órdenes de protección y prevé medidas sancionadoras para los delitos de violencia doméstica.

La violencia doméstica está regulada en el Código Penal No. 19/1940 a lo largo de diversos artículos que regulan delitos de homicidio, lesiones, amenazas e insultos. Existen disposiciones en el código penal que indican que aquellos delitos en que exista una relación de intimidad o vínculo familiar serán condenados con más dureza que si no existiera dicho vínculo, pero esto es aplicable a ambos sexos.

Los artículos que se aplican más comúnmente en delitos de violencia doméstica se encuentran en el Capítulo XXIII (relativo a los delitos de homicidio y lesiones corporales). Así el artículo 217 establece que la persona culpable de violencia (asalto) física puede ser condenada a penas de multa o prisión de 6 meses a un año, aunque limita la obligación. El artículo 218 regula la violencia física severa, estableciendo que la persona que deliberadamente ejerza violencia física sobre otra persona causando la pérdida de su integridad física o de su salud puede ser condenada a pena de prisión de hasta 3 años (o ser multada si se dan circunstancias atenuantes suficientes). Pero añade que si dichas daños corporales son resultado de un ataque especialmente peligroso como consecuencia del tipo de violencia ejercida, las armas usadas, etcétera, la pena de prisión puede ser de hasta 16 años. Por último, el artículo 211 regula las penas en caso de homicidio, que pueden ser de 5 a 16 años de prisión (Ministerio de Sanidad, 2013).

En el año 2006, se reformó parte del Código Penal, incluyendo ciertas disposiciones en materia de violencia doméstica.

Así por ejemplo, al artículo 70, que regula los criterios para valorar la severidad de las condenas a imponer, se le añadió un párrafo que incluye que en caso de que el delito sea dirigido contra un hombre, mujer o niña/o

estrechamente relacionado con el/la agresor/a y su familia, se considerará un agravante a tener en cuenta a la hora de dirimir la condena a imponer y se deberá, por tanto, aplicar pena más severa. Con la introducción de esta disposición se pretende castigar más duramente los delitos en los que agresor y víctima tengan relaciones familiares y por tanto, subyace la idea de proteger mejor a las víctimas de la violencia doméstica.

También se introdujeron cambios en el artículo 233 (que regula el delito de amenazas) añadiendo una nueva disposición que sustituye al artículo 191, según la cual las persona que insulte o denigre a su cónyuge o ex cónyuge, hijo/a u otra persona estrechamente relacionada con el agresor puede ser condenada a una pena de hasta dos años de prisión.

El objeto de protección de la legislación es la violencia intrafamiliar o doméstica, incluyendo en esta definición la violencia ejercida hacia la pareja o expareja, así como violencia descendente. La legislación no es muy precisa sobre la violencia ascendente, pero entendemos que queda incluida al determinar que se castigará más severamente aquellos delitos en los que haya una relación familiar entre agresor y víctima. Por lo que en términos de enfoque, la ley islandesa carece de enfoque de género, aunque el plan de acción contra la violencia doméstica está específicamente dirigido a mujeres y niños y niñas.

3.12.1.- Responsabilidades del Estado e implementación de la ley

La ley sólo establece medidas para la protección de las víctimas, aunque con la creación del Comité sobre medidas para combatir la violencia contra la mujer el Estado reconoce la responsabilidad de impulsar medidas de lucha contra la violencia doméstica y sexual a través del desarrollo de un plan de acción.

El 26 de septiembre el Gobierno de Islandia aprobó el Plan de Acción para combatir la violencia en relaciones íntimas y la violencia sexual, para el periodo 2008-2011. El documento está dividido en dos

partes, de forma que la primera parte trata sobre la violencia doméstica y el abuso sexual a menores, y la segunda parte está dirigida a mujeres, incluyendo medidas específicas para estos dos grupos. Dicho plan ha dejado de estar vigente y estaba previsto que se lanzara el nuevo para el periodo 2012-2018. Actualmente sigue en preparación, pero se desconoce cuándo está listo para empezar a implementarse. La intención del gobierno parece ser continuar con esta línea de actuación, y asentarse en lo recorrido con el primer plan (Ministerio de Sanidad, 2013). Este plan de acción de lucha contra la violencia doméstica y sexual recoge medidas prevención, asistencia y rehabilitación de las víctimas así como tratamiento de los agresores.

CAPITULO III

NUEVO PROCESO PENAL PARA DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR - LEY N° 30364

1.- COMPETENCIA

El artículo 14 de la ley N° 30364 establece que: Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. En este nuevo esquema del proceso penal establecido por esta Ley la competencia está a cargo de los Juzgados de Familia obviando la participación de los Fiscales de Familia. Solo cuando la denuncia comprenda como víctimas a niñas, niños y adolescentes, o personas agresoras menores de 18 años y mayores de 14 años, ésta también se presenta ante la Fiscalía de Familia o la que haga sus veces. La Fiscalía de Familia interviene en todos los casos de violencia donde las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, desde la etapa policial inclusive, en el marco de la competencia asignada por el Código de los Niños y Adolescentes. El Juzgado de Familia o Mixto, de ser el caso, es competente para conocer la denuncia a través del atestado policial o por la denuncia directa, escrita o verbal, de la víctima, o por cualquier otra a su favor y también por la Defensoría del Pueblo.

El Juzgado de Familia o el que haga sus veces tiene competencia para dictar las medidas de protección o cautelares necesarias para proteger la vida e integridad de las víctimas y garantizar su bienestar y protección social. Asimismo, cuando le corresponda dictar medidas de restricción de derechos.

El Juzgado Penal, o el que haga sus veces, y el Juzgado de Paz Letrado que asume la competencia penal, atribuyen en sentencia la responsabilidad a las personas que hayan cometido delitos o faltas, fija la sanción y reparación que corresponda; y dicta medidas de protección o cautelares.

La derogada Ley N° 26260 en su artículo 7 reconocía la participación del Fiscal Provincial de Familia para dar trámite a las peticiones que se formulen verbalmente o por escrito en forma directa por la víctima de violencia, sus familiares; actuar de oficio ante el conocimiento directo de los hechos; dictar medidas de protección; solicitar medidas cautelares pertinentes al Juez Especializado de Familia; convocar a la víctima y al agresor a una audiencia de conciliación; interponer demanda ante el Juez de Familia. Correspondía al Ministerio Público, según el artículo 8 de la derogada, visitar periódicamente las dependencias policiales para conocer sobre la existencia de denuncias sobre violencia familiar, e intervenir de oficio cuando corresponda.

2.- EL PROCESO PENAL

2.1.- DENUNCIA

La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos.

La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. Las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar actos de violencia en su agravio o en agravio de otras personas sin la necesidad de la presencia de una persona adulta. En esta situación, la instancia receptora de la denuncia garantiza la seguridad de las niñas, niños y adolescentes hasta que se dicte la medida de protección correspondiente. Recabada la denuncia, de encontrarse una situación de presunto abandono, la instancia receptora informa a la Unidad de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que actúe conforme a sus atribuciones.

Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad.

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado.

Para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Si la víctima o denunciante cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, éstos se reciben e incluyen en el informe de la Policía Nacional, del Ministerio Público o en el Expediente del Poder Judicial.

Si de la denuncia formulada se desprende una situación de presunto abandono de una niña, niño o adolescente, ésta se comunica de inmediato a la Unidad de Investigación Tutelar (UIT) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o al Juzgado de Familia en aquellos lugares donde no haya unidades de investigación tutelar para que actúen conforme a sus atribuciones.

2.2.- FLAGRANCIA

En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos.

En estos casos, la Policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega del detenido y las demás circunstancias de la

intervención, debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia o su equivalente para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas. Realizadas las acciones previstas en el artículo 16 de la Ley, el juzgado de familia o su equivalente comunica los actuados a la fiscalía penal correspondiente.

2.3.- COMPETENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional del Perú, independientemente de la especialidad, está obligada a recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias verbales o escritas de actos de violencia que presente la víctima o cualquier otra persona que actúe en su favor sin necesidad de estar investida de representación legal. El registro se realiza de manera inmediata en el aplicativo respectivo del Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL) y, en ausencia de éste, en el Cuaderno, Libro o Formulario Tipo. El registro de la denuncia es previo a la solicitud del examen pericial.

El diligenciamiento de las notificaciones le corresponde a la Policía Nacional del Perú y en ningún caso puede ser encomendada a la víctima, bajo responsabilidad.

La Policía Nacional del Perú remite al Juzgado de Familia, dentro de las veinticuatro horas de recibida la denuncia el informe o atestado policial. El informe o atestado policial incluye los medios probatorios a los que tuviera acceso la Policía Nacional del Perú de manera inmediata, tales como certificados médicos o psicológicos presentados por las víctimas, grabaciones, fotografías, mensajes a través de teléfono o medios digitales, testimonio de algún testigo, entre otros.

Ante la comisión de hechos de violencia que puedan constituir delitos, la Policía Nacional del Perú continúa las investigaciones bajo la

dirección del Ministerio Público, sin perjuicio de trasladar la denuncia y sus actuados al Juzgado de Familia para el dictado de las medidas de protección correspondientes.

Sin perjuicio de las labores de investigación señaladas en el artículo anterior, En caso de flagrancia, se procede conforme a lo previsto por el artículo 446 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de comunicar los hechos al Juzgado de Familia para que adopte las medidas correspondientes. En el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal se aplica lo señalado en este artículo en cuanto sea pertinente, en concordancia con lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes.

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y geo-referencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una respuesta oportuna.

Sin perjuicio de ello, el Juzgado de Familia ordena la ejecución de las medidas de protección social a las instituciones, servicios y programas del Estado conforme a las competencias señaladas en la Ley. La institución remite el informe correspondiente en el plazo de cinco días hábiles, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas al Juzgado de Familia correspondiente, con las recomendaciones que considere pertinentes, conforme del artículo 21 de la Ley. La continuidad o variación de la medida de protección aplicada por el Juzgado de Familia, se efectúa en base a los informes recibidos. El Juzgado de Familia, solicita cuando lo considere necesario la remisión de informes adicionales a la institución sobre la ejecución de las medidas. Cuando la medida comprenda el inventario de bienes, ésta se diligencia por el propio Juzgado que la ordena.

2.4.- ACTUACIÓN DEL JUZGADO COMPETENTE

En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.

Si el Juzgado de Familia de turno recibe en forma directa la denuncia verbal o escrita por violencia, procede conforme al artículo 15 de la Ley y aplica la ficha de valoración del riesgo que corresponda, cita a audiencia y ordena la actuación de pruebas de oficio de considerarlo necesario.

Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del Código Procesal Penal.

En la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones reiterativas y de contenido humillante. Los operadores del sistema de justicia deben seguir pautas concretas de actuación que eviten procedimientos discriminatorios hacia las personas involucradas en situación de víctimas.

Los antecedentes y la documentación correspondiente a los procesos se mantienen en reserva, sin afectar el derecho de defensa de las partes. En caso que las víctimas se encuentren o ingresen a un hogar de refugio temporal se mantiene en absoluta reserva cualquier

referencia a su ubicación en todas las instancias de la ruta de atención, bajo responsabilidad.

En el caso de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos de violencia se deberá guardar debida reserva sobre su identidad.

2.5.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Recabada la denuncia por el Ministerio Público, este procede a aplicar la ficha de valoración de riesgo y dispone la realización de los exámenes y diligencias correspondientes, remitiendo los actuados en el plazo de 24 horas al Juzgado de Familia para la emisión de las medidas de protección a que hubiera lugar. Si de los hechos se desprende la presunta comisión de un delito también se pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal, de ser el caso.

La Fiscalía de Familia o Mixta remite lo actuado al Juzgado de Familia, a efectos de que proceda a evaluar el otorgamiento de medidas de protección o cautelares en favor de la víctima. Asimismo, pone en conocimiento del Juzgado de Familia la situación de las víctimas, en particular en casos de feminicidio y tentativa de feminicidio a fin de que puedan ser beneficiarias de medidas de protección o cautelares pertinentes. De igual modo, informa al Juzgado de las disposiciones que pudiera haber dictado con arreglo al artículo 21 del reglamento. Todas las actuaciones de la Fiscalía de Familia se remiten en el término de veinticuatro horas.

Cuando la Fiscalía Penal toma conocimiento por cualquier medio de un presunto delito que configure violencia contra la mujer o quien integre el grupo familiar y verifique que no existe un procedimiento de protección en curso, aplica la ficha de valoración del riesgo y remite copias certificadas de lo actuado al Juzgado de Familia dentro de las veinticuatro horas a efectos de que evalúe el otorgamiento

de las medidas de protección o cautelares, sin perjuicio de continuar el trámite de la investigación penal. Igual procedimiento sigue la Fiscalía de Familia o Mixto cuando se trata de adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

3.- MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN

El Juzgado de Familia puede realizar audiencia con la sola presencia de las víctimas o sin ellas. En caso que las circunstancias lo ameriten, dicta las medidas de protección o cautelares correspondientes, en el plazo de 72 horas que establece la ley. Cuando el Juzgado lo considere necesario entrevista a la persona denunciada. Para efectos del cómputo de los plazos se considera las dificultades geográficas en zonas rurales.

Si la persona denunciada asiste a la audiencia se le tiene por notificada en el mismo acto, de conformidad con el artículo 204 del Código Procesal Civil. La citación a la víctima se realiza a través de cédula, facsímil, teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación.

Recibido un caso de riesgo severo de acuerdo a la Ficha de Valoración del Riesgo, el Juzgado de Familia adopta de inmediato las medidas de protección o cautelares que correspondan a favor de las víctimas.

El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en el Código Penal.

La medida de protección o cautelar dictada por el Juzgado de Familia, surte efecto hasta que la sentencia emitida por el Juzgado Penal o Juzgado Paz Letrado en materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no

presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnados.

3.1.- MEDIDAS CAUTELARES

El Juzgado de Familia ordena de oficio o a pedido de parte las medidas cautelares, conforme los requisitos establecidos en el artículo 611 del Código Procesal Civil. En razón a la temporalidad de las medidas cautelares, la víctima, antes de la expedición de la sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede plantear ante el Juzgado competente las pretensiones civiles de fondo. A tal efecto, el Juzgado de Familia informa a las víctimas que cuentan con servicios jurídicos gratuitos para recibir asistencia en su derecho de acción sobre las pretensiones civiles antes señaladas.

3.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El Juzgado de Familia dicta la medida de protección más idónea para el bienestar y seguridad de la víctima, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, los resultados de la ficha de valoración del riesgo, la pre existencia de denuncias por hechos similares, la relación de la víctima con la persona denunciada, la diferencia de edades o relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada y, la situación económica y social de la víctima, entre otros aspectos que revelen vulnerabilidad. Las medidas de protección son céleres y eficaces de lo contrario generan responsabilidad funcional.

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre otras, las siguientes:

1. Retiro del agresor del domicilio.

2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine.
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección.
5. Inventario sobre sus bienes.
6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares.

Además de las medidas de protección señaladas en la Ley el Juzgado de Familia puede dictaminar:

1. Prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otro lugar que ésta frecuenta o de acercarse a una distancia de 300 metros.
2. Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes.
3. Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en situación de cuidado del grupo familiar.
4. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.

5. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de sus víctimas o sus familiares.

El dictado de las medidas no impide la adopción de medidas administrativas en los procedimientos sectoriales establecidos.

Los Juzgados de Familia tienen competencia para variar las medidas de protección o cautelares hasta que el Juzgado Penal o del Juzgado de Paz Letrado tengan conocimiento del caso. Las medidas de protección pueden ser modificadas de oficio o a pedido de parte cuando se produzcan hechos nuevos, si se alteran las circunstancias que motivaron la decisión o aquellas no sean suficientes para garantizar la seguridad o bienestar de la víctima o ante el incumplimiento de las medidas de protección inicialmente dictadas.

3.3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Las medidas de protección social tienen como objetivo contribuir a la recuperación integral de las víctimas y promover su acceso a los servicios de asistencia y protección social públicos o privados, con especial énfasis en el caso de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Las medidas dictadas por el Juzgado de Familia se extienden a todas las víctimas conforme al inciso 1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley. En caso de feminicidio y tentativa de feminicidio, trata de personas y otras formas de violencia consideran los lineamientos señalados en los protocolos especializados.

3.4.- REGISTRO DE VICTIMAS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El Poder Judicial, a través de su sistema informático, registra a nivel nacional las medidas de protección y cautelares otorgadas, incluyendo las ordenadas por los Juzgados de Paz, con la finalidad de coadyuvar a la mejor protección de las víctimas. La Policía Nacional, a través de su sistema informático, registra a nivel nacional las medidas de protección cuyo cumplimiento esté a su cargo.

Ambas instituciones brindan información al Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar a cargo del MIMP. La información a registrar contiene como mínimo los siguientes datos:

- a. Nombres y apellidos, documento de identidad, dirección, edad, sexo, correo electrónico y teléfonos de las víctimas sujetas a medidas de protección y cautelares.
- b. Datos de la persona procesada.
- c. Números de integrantes de la familia.
- d. Datos del juzgado que otorgó las medidas.
- e. Medida de protección o medida cautelar.
- f. Nivel de ejecución de las medidas.
- g. Tipos de violencia.
- h. Otra información que se considere necesaria.

4.- REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

Emitida la resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares, el Juzgado de Familia remite el expediente, según corresponda, a la Fiscalía Penal o al Juzgado de Paz Letrado para que procedan conforme a sus atribuciones. En caso de duda sobre la configuración si es delito o falta, remite lo actuado a la Fiscalía Penal. Para la remisión del expediente el

Juzgado observa la prevención que pudiera haberse generado de acuerdo a los artículos 21 y 27 del Reglamento.

La Fiscalía Penal y el Juzgado de Paz Letrado no pueden devolver los actuados al Juzgado de Familia bajo ninguna circunstancia. Tratándose de actos de violencia en agravio de niñas, niños y adolescentes que no constituyan faltas o delitos, la Fiscalía Provincial Penal o Mixta, remite los actuados al Juzgado de Familia, cautelando el interés superior del niño y sus derechos, a fin que evalúe el inicio del proceso de contravención a sus derechos de conformidad a lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes.

5.- ACTUACIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ

El Estado, dentro del marco de la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, establece en las zonas rurales del país, las medidas necesarias que implementen acciones de prevención, protección, atención, sanción y recuperación.

En las localidades donde no exista Juzgado de Familia o Juzgado de Paz Letrado con competencia delegada, los actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar son de competencia del Juzgado de Paz.

Cuando los actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar constituyen a su juicio delitos, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a sus atribuciones.

Cuando los hechos constituyen faltas contra la persona, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de protección a favor de la víctima, así como lleva a cabo el proceso previsto en su ley de la materia. En la determinación de la sanción tendrá en cuenta la Ley N° 30364, en todo lo que le sea aplicable.

Cuando el Juzgado de Paz toma conocimiento de actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que constituyen a su juicio

delitos, dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a sus atribuciones.

La denuncia ante el Juzgado de Paz se presenta por escrito o de manera verbal. Cuando la Policía Nacional del Perú conoce de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías en los lugares donde no exista Juzgado de Familia o Juzgado de Paz Letrado con competencia delegada, pone los hechos en conocimiento del Juzgado de Paz dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas de acontecidos los mismos y remite el informe policial que resume lo actuado así como la ficha de valoración del riesgo correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley.

En las localidades donde no exista Comisaría de la Policía Nacional del Perú, los Juzgados de Paz coordinan la ejecución de las medidas de protección así como las sanciones impuestas de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 29824, coordinando con las autoridades comunales y otras que correspondan en el marco de lo establecido en la Ley N° 30364 y la ley de su materia.

En los lugares donde coexistan Juzgado de Familia, o los que hagan sus veces, o Juzgados de Paz con autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas investidas de funciones jurisdiccionales, se establecen medios y formas de coordinación funcional y operativa, para la investigación y sanción de la violencia contra la mujeres e integrantes del grupo familiar, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

6.- SENTENCIA

La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar puede ser absolutoria o condenatoria.

En el primer caso el juez señala el término a las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia o equivalente. Las medidas cautelares que resguardan las pretensiones civiles que hayan sido decididas en esa instancia cesan en sus efectos salvo que hayan sido confirmadas en instancia especializada.

En caso de que se trate de una sentencia condenatoria, además de lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957, y cuando corresponda, contiene:

1. La continuidad o modificación de las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia o equivalente.
2. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima.
3. El tratamiento especializado al condenado.
4. La continuidad o modificación de las medidas cautelares que resguardan las pretensiones civiles de tenencia, régimen de visitas, suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad, asignación de alimentos, entre otras.
5. Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la víctima y del agresor deben adoptar, para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, salvo que hayan sido confirmadas en instancia especializada.
6. La inscripción de la sentencia en el Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del Ministerio Público.
7. Cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de estas.

En el caso de que las partes del proceso usen un idioma o lengua diferente al castellano, la sentencia es traducida. En los casos que no sea

posible la traducción, el juez garantiza la presencia de una persona que pueda ponerles en conocimiento su contenido.

El Juzgado Penal y el Juzgado de Paz Letrado, al emitir sentencia, aplican los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley.

El Juzgado Penal y el Juzgado de Paz letrado comunican bajo responsabilidad, al Juzgado que dictó las medidas de protección que la sentencia emitida por su despacho quedó consentida o ejecutoriada. El Juzgado de Familia elabora un informe final respecto del trámite de ejecución de las medidas de protección o cautelares dictadas, con sus incidencias, disponiendo a su vez, el archivo del proceso especial.

7.- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

Con la entrada en vigencia de la *ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – Ley N° 30364*, 23 de noviembre del 2015, se ha dado en nuestro país, un paso importante en la lucha por la protección de aquellas víctimas de la violencia, que en su mayoría son mujeres quienes sufren día a día estos actos que atentan contra su integridad, y en otros casos, el resultado es mucho más despreciable, como es el feminicidio.

Es un avance que trata de desarrollar las normas de protección de los víctima de la violencia, en el marco de los convenios internacionales adoptados por el Perú, como son la Convención Belen do Pará, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, entre otros.

En lo positivo, esta ley agiliza los trámites de las víctimas, quienes deben ser atendidas inmediatamente para recibir sus denuncias, y ser evaluadas por los profesionales del Instituto de Medicina Legal. Asimismo, dentro de las 24 horas serán remitidos los actuados policiales al Juez de Familia (o Mixto de ser el caso) para que convoque a una Audiencia en la cual se dicten las medidas de protección pertinentes. La adopción de las medidas se adecúa a las fases del

ciclo de la violencia y a las tipologías que presenta la violencia. Hasta aquí la protección a la víctima es primordial. Y la vigencia de las medidas de protección se extenderá *hasta que el Juez Penal emita sentencia, o hasta el pronunciamiento Fiscal que disponga no iniciar acción judicial* (GARCIA OLIVERA, 2016).

Asimismo en caso de flagrante delito relacionado a actos de violencia familiar, es que el personal policial procederá a detener al agresor, a allanar el domicilio o el lugar donde se produzcan los hechos. Asimismo deberán comunicar de la detención al Fiscal para que realice las investigaciones correspondientes, y al Juez de Familiar (o Mixto de ser el caso) para que dicte se pronuncie sobre las medidas de protección a favor de la víctima.

Una vez dictadas las medidas de protección por el Juez de Familia (o Mixto), es que remite el caso al Fiscal Penal (o Mixto de ser el caso), para que inicie el proceso penal e investigue los hechos originariamente denunciados, y finalmente decida si estos hechos constituyen o no, un delito, o en realidad se traten de una Falta.

Si el Fiscal decide que se trata de un delito, continuará el trámite disponiendo la Formalización de la Investigación Preparatoria por el plazo de ley, y realizará actos de investigación, hasta finalmente formular su Acusación, y llevar el caso hasta la fase estelar del proceso penal, el Juicio Oral.

En caso de decidir que no se configura como delito, optará por la No Formalización ni Continuación de la Investigación Preparatoria, y archivará los actuados. Sin embargo, también podrá advertir que si no es un delito pero existe daño físico con incapacidad no mayor a diez días, los hechos constituirían Faltas.

En lo negativo, tenemos que algunos miembros de la Policía Nacional del Perú omiten remitir dentro de las 24 horas de recepcionada la denuncia por violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar con su Informe, al Juez de Familia (o Mixto de ser el caso), para que oportunamente dicte las

medidas de protección a la víctima; otros miembros de la Policía omiten recibir conjuntamente con la denuncia, la declaración de la víctima, propiciando a que muestre desinterés para continuar con el trámite.

Que por su parte, algunos Fiscales pese a arribar a la conclusión de que los hechos denunciados no constituyen Delito y que deben ser archivados en instancia fiscal, sin embargo pretenden que la parte agraviada recabe copias de todo lo actuado hasta la instancia fiscal, y que a título personal accione en la vía judicial correspondiente un proceso por Faltas frente a los hechos denunciados originariamente. Con decisiones como la aludida, se vulneraría el mínimo formalismo que todo trámite por violencia debe conservar, dejando desprotegidas a las víctimas, pues a decir de la Ley, la vigencia de las medidas de protección se da *hasta que el Juez Penal emita sentencia, o hasta el pronunciamiento Fiscal que disponga no iniciar acción judicial* (GARCIA OLIVERA, 2016).

Y finalmente, según lo establece la Ley, el Juez de Familia (o Mixto de ser el caso) en el plazo máximo de 72 horas deberá resolver el caso, dictando las medidas de protección que requiera la víctima, y también puede pronunciarse respecto a las medidas cautelares relacionadas a las pretensiones de alimentos, régimen de visitas, tenencia y custodia, patria potestad, liquidación del régimen patrimonial, y demás conexos y relacionados que aseguren el bienestar de la víctima. Sin embargo, dada la excesiva carga procesal con que cuentan los Juzgados de Familia (o Mixto de ser el caso), es que en algunos juzgados es evidente el retardo para cumplir a cabalidad la exigencia de la Ley N° 30364 y dictar las medidas de protección oportunamente.

Sin embargo, todo cambio que tienda a mejorar la crítica situación de violencia vivido durante años por las mujeres en nuestro país, sirva para concretizar el derecho a vivir una vida digna y libre de violencia. Contribuyamos entonces, a que estos impases sean superados y finalmente se beneficien todas las víctimas y se sancione a sus agresores.

CAPITULO IV

HALLAZGOS, RESULTADOS Y ANALISIS

1.- PODER JUDICIAL

El Programa Presupuestal por Resultados “Celeridad de los Procesos Judiciales de Familia” (PpR Familia) informó que con la aplicación de la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), el Poder Judicial superó este año 2016 la meta de celeridad proyectada en casos de violencia de género y familiar.

Dicho programa presupuestal argumenta que sobrepasó las metas de celeridad proyectadas en 120% para el 2016, alcanzando cerca del 130%. Aparentemente estas cifras representan un avance considerable que se enmarca en la política de gestión de la Presidencia del Poder Judicial; sin embargo, no se ha tenido en cuenta que la celeridad procesal en la tramitación de las denuncias que ingresaron a los juzgados de familia; únicamente son para la disposiciones de otorgamiento de medidas de protección a la víctima; y, en la mayoría de casos, los juzgados de familia otorgaban estas medidas con vista a las pericia médicas o psicológicas.

En el segundo semestre del año 2016, ninguna denuncia formalizada sobre violencia familiar se ha derivado al Juzgado Penal, ya que en un 99% de procesos fueron derivados a las Fiscalías, donde concluían con un archivamiento, por inasistencia de la víctima, por falta de pericias médicas, por no existir una graduación de las lesiones psicológicas.

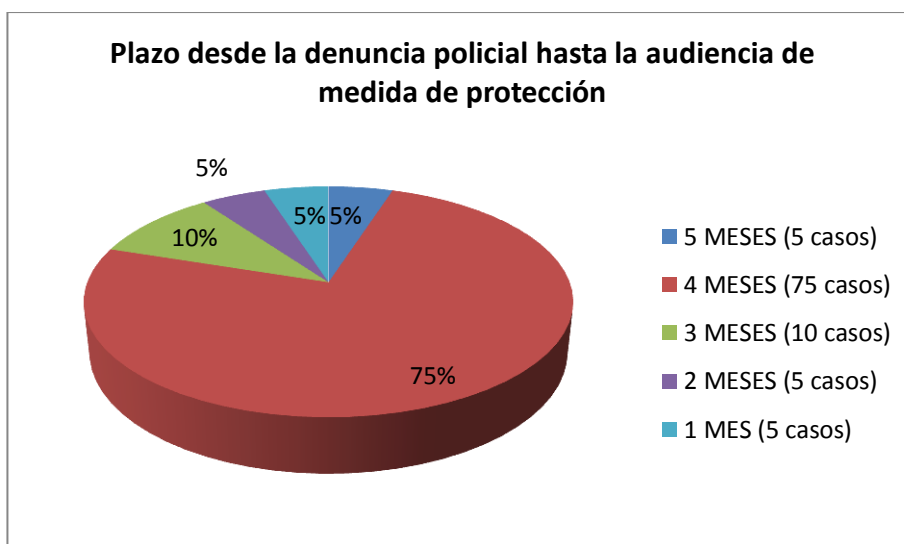
El Poder Judicial, a través de su portal web, indica que en los casos de violencia familiar, *“en el plazo de 72 horas se otorgan de medidas de protección a las víctimas, en casos de violencia de género y familiar, gracias a los BUENOS resultados son producto de la aplicación de la Ley N° 30364, vigente desde el 24 de noviembre de 2015”*, hecho que resulta ser totalmente falso, ya que en la realidad de las cosas, desde la fecha de las denuncias policiales, transcurren 4 a 5 meses para la realización de la audiencia de otorgamiento de medidas de

protección, hallazgo que se ha encontrado en la revisión de los expedientes del 6° Juzgado de Familia, en el segundo semestre del año.

MUESTRA ANALIZADA:

100 expediente de medidas de protección por denuncias de violencia familiar, ingresadas en el segundo trimestre del año 2016, ante el 6° Juzgado de Familia de Chiclayo.

PRIMER HALLAZGO: Plazo desde la denuncia policial hasta la audiencia de medidas de protección



Fuente: 6° Juzgado de Familia de Chiclayo (periodo junio a diciembre del 2016)

El análisis de este hallazgo, muestra que de los 100 casos sobre violencia familiar, que ingresaron en el segundo semestre del año 2016, al sexto juzgado especializado de Familia, sólo 5 procesos (5%), tuvieron programación de audiencia de medidas de protección en el plazo de un mes; otros 5 casos (5%), tuvieron que esperar 2 meses para la programación de la audiencia de medidas de protección; 10 (10%) casos fueron programados a 3 meses; y lo más sorprendente es que la mayoría de los expedientes analizados, en número de 75 (75%) casos, sus audiencias de

otorgamiento de medidas de protección fueron programados de 4 meses a más; esto debido a la sobrecarga procesal de estos juzgados especializados y a los plazos a tener en cuenta para las notificaciones de la partes.

ANALISIS:

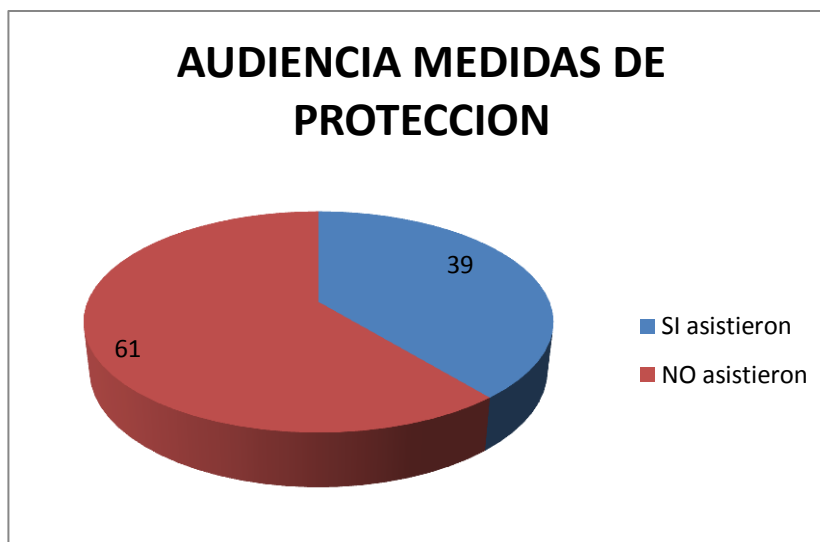
Es aquí donde se debería advertir el cambio más saltante que permite la atención inmediata de los casos de violencia. La Ley prevé dos etapas: de protección y de sanción. En la primera, la víctima puede acudir a la Policía Nacional del Perú (PNP) o directamente al juzgado de familia. La PNP debe investigar en tan solo 24 horas los hechos, y remitir en dicho plazo el atestado o informe a los juzgados de familia o mixtos. El juzgado de familia o mixto es competente para conocer la denuncia a través del atestado policial, o directamente por denuncia escrita o verbal (por acta) de la víctima o tercero. En uno u otro supuesto, en 72 horas, el juez de familia o mixto, debería evaluar el caso y dictar en audiencia oral las medidas de protección a favor de la víctima y, las medidas cautelares que resguarden las pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación del régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.

El Poder Judicial (según el artículo 45.12 de esta norma) debe adoptar las medidas necesarias a fin de lograr la eficacia de la Ley N° 30364, no solo en las 10 cortes superiores que actualmente integran el Programa Presupuestal de Familia, sino en toda la República, aunque es el Ministerio de Economía y Finanzas el que tiene la responsabilidad de asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de la ley (artículo 45.8). Urge pues atender los siguientes requerimientos: A. Fortalecimiento de los despachos judiciales: Actualmente, el ingreso de los procesos de violencia, por la aplicación de la Ley N° 30364, ha ocasionado sobrecarga en la programación de audiencias en los juzgados de familia (en cada juzgado se realizan en forma diaria entre 8 y 20 audiencias), así como en la etapa de calificación de las denuncias, ocasionando que se desatiendan otras materias de familia, por cuyo motivo se requiere: i) La creación de nuevos órganos especializados de familia en las cortes superiores de justicia que de acuerdo con la carga procesal se requieran, esto es, cuando se excedan los estándares de carga establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (800 procesos al año por juzgado). ii) Contratación de personal:

Asistentes de mesa de partes, asistente para las audiencias, y personal para el fortalecimiento del Área de Notificaciones y Comunicaciones Judiciales. iii) Asignación de bienes y servicios: Adquisición de Kit de Audio o afines a fin de facilitar la realización de la audiencia (Oralidad en los procesos de familia); movilidad para el traslado de los profesionales de los equipos multidisciplinarios del Juzgado de Familia a los domicilios de las víctimas, para practicar los informes correspondientes; servicio de telefonía, a fin de facilitar las comunicaciones telefónicas a las partes, en especial para la audiencia. B. El fortalecimiento de las competencias de jueces, personal, así como de los profesionales del Equipo Multidisciplinario: La capacitación constituye un componente prioritario para la aplicación del nuevo modelo procesal previsto en la Ley N° 30364, ello implica la elaboración y ejecución de un módulo de capacitación dirigido a todos los operadores judiciales de la especialidad de familia, entre otras estrategias. Debe tenerse en cuenta, que todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada protección, la restitución de sus derechos vulnerados, y de ser el caso, la sanción del agresor. C. Potenciación de los servicios del equipo multidisciplinario: La aplicación de la nueva ley involucra la dinámica participación de estos profesionales, tanto durante la realización de las audiencias, brindando orientación al juez de familia, como coadyuvando en la aplicación de las medidas de tratamiento a las víctimas y agresores (Servicio de Orientación y Consejería Familiar). A estos profesionales, como se ha referido, se les debe brindar también recursos para sus traslados a los hogares involucrados a la materia, con la finalidad de emitan sus informes de evaluación, y, en su caso, de tratamiento.

En tal sentido, las falencias que se vienen apreciando en nuestro Poder Judicial, para la aplicación de la Ley N° 30364, contribuyen a que no se realice una aplicación eficiente dentro de los plazos establecidos en dicha ley; por lo que nuevamente la celeridad procesal en el principal principio vulnerado en estos procesos, dejando a la víctima en un estado de indefensión debido a la sobrecarga laboral.

SEGUNDO HALLAZGO: *Inasistencia de las partes a la audiencia de medidas de protección en el 6° Juzgado De Familia De Chiclayo (2° semestre año 2016).*



Del análisis de 100 casos ingresados al sexto juzgado especializado de Familia de Chiclayo, se pudo observar que sólo 39 víctimas asistieron a la audiencia de otorgamiento de medidas de protección; y 61 víctimas denunciantes NO asistieron a la audiencia de otorgamiento de medidas de protección; asimismo, este desinterés se ha observado en que las víctimas tampoco acuden a realizarse las evaluaciones médicas y psicológicas ordenadas tanto en la Policía Nacional como en el Juzgado de Familia.

ANALISIS:

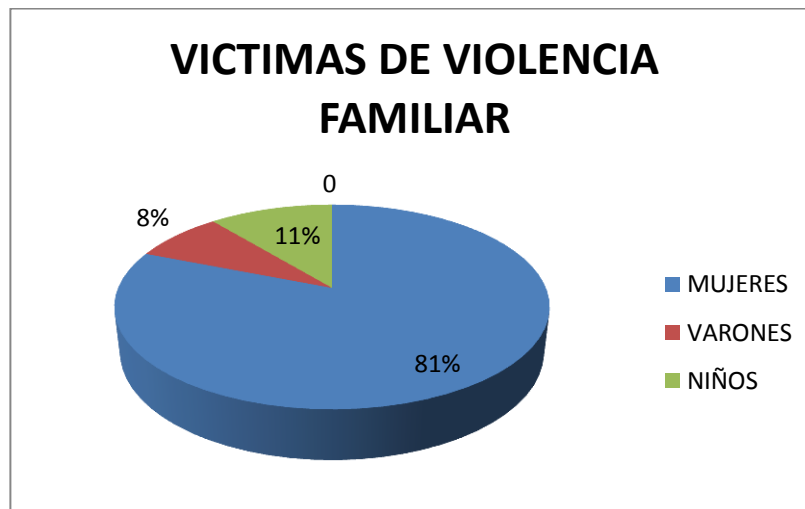
Los jueces deben apreciar los derechos comprometidos en estos procesos desde la perspectiva que realmente corresponde –derechos humanos y fundamentales-, debiendo aplicarse razonablemente las disposiciones supletorias del Código Procesal Civil sin desvirtuar la naturaleza de los procesos de violencia familiar, cuya naturaleza tuitiva y carácter de urgencia les brinda un matiz especial, donde debe realmente primar el principio del mínimo de formalismo, mas no el ritualismo al formalismo por sobre el interés de las víctimas de violencia familiar, ni la necesidad de la descarga procesal por sobre derechos humanos y fundamentales.

El mínimo formalismo es un principio procesal autónomo (principio de procedimiento) que debe ser entendido como el deber de seguir el formalismo necesario o eliminar (inaplicar) el formalismo innecesario del proceso con el objeto de lograr que esta cumpla sus fines, que es la lucha contra toda forma de violencia familiar, la protección de la víctima y su resarcimiento, sanción al agresor y la celeridad del proceso

Es improcedente el abandono en los procesos de violencia familiar por inasistencia de las partes”; ello en razón a la función tuitiva que rige en los procesos sobre violencia familiar cuya discusión es un asunto público y no privado; de allí que se señala que es un tema de salud pública; al respecto Yañez de la Borda y Dador Tozzini señala “La violencia psicológica y física trata sobre violación de derechos humanos porque lesionan la integridad personal, por lo que el proceso no debería quedar reducido a un problema privado”.

Frente al carácter tuitivo que tienen las actuaciones de los jueces en los procesos de violencia familiar, éstos están obligados a dictar las medidas de protección necesarias aun cuando la víctima y/o el agresor no concurran a la audiencia de otorgamiento de medidas de protección; sin embargo, el desinterés que muestra la víctima en contribuir con las actuaciones judiciales, es alarmante, ya que supera el cincuenta por ciento del total de casos que se tramitan en cada juzgado; esta realidad puede deberse a varias causas, una de ellas es la falta de celeridad procesal en cada una de las actuaciones policiales y judiciales, incluso en las atenciones para las evaluaciones médicas. Por tanto, comprobamos nuevamente que no existe la tan ansiada eficacia que el Poder Judicial en su máxima autoridad, menciona como resultado positivo en la implementación de la Ley N° 30364.

TERCER HALLAZGO: Mujeres, víctimas de violencia familiar.



Las cifras encontradas en la muestra, nuevamente nos ratifican que la mujer sigue siendo la principal víctima en un incidente de violencia doméstica, de los 100 casos revisados, en 81 casos eran las mujeres las agraviadas, desde cualquier grado o parentesco (esposa, conviviente, novia, hermana, madre, hija), en menor cuantía, del total e casos denunciados, sólo 11 casos obedecían a maltratos contra un menor de edad; y en un muy reducido número, solo 8 casos denunciados sus víctimas fueron varones, teniendo en cuenta que el parentesco era de ser padres adultos mayores o agresiones entre hermanos.

ANALISIS:

Son las mujeres las más propensas en verse envueltas en situaciones de violencia por parte de sus esposos o compañeros, más aún si trabajan (30,1%) y si laboran fuera del hogar (33,5%). “En el Perú al igual que en otros países se vienen implementando múltiples esfuerzos normativos y políticas públicas para prevenir y atender la violencia contra la mujer y por tanto garantizar condiciones para una vida libre de violencia, por considerar a esta como una manifestación de desigualdad de género”

En los últimos 12 meses, el 27,0% de las mujeres actualmente unidas de 18 y más años de edad fue víctima de violencia psicológica, seguido del 6,1% afectada por violencia física y el 4,9% víctima de violencia sexual. Mientras que, alguna vez en la vida el 61,4% de las mujeres sufrió violencia psicológica, el 31,1% fue víctima de violencia

física, el 15,1% violencia sexual y el 23,6% víctima de violencia económica (estadísticas INEI, 2016),

En el año 2015, entre las principales creencias que apoyan la violencia contra la mujer se consideró que el esposo o pareja, siempre debe ser el jefe del hogar y quien represente a su familia (56,3%), toda mujer debe cumplir primero su rol de madre, esposa o ama de casa y después realizar sus propios sueños (54,7%), en todo hogar se necesita a un varón para que ponga orden y disciplina (46,2%).

Entre las actitudes más arraigadas en la población figura que si una mujer no atiende a su esposo o pareja o no cumple con sus deberes del hogar, merece ser reprendida por su esposo o pareja (45,5%), a fin de evitar discusiones en el hogar, la mujer debería ceder (43,9%), la mujer no puede tomar decisiones sin el permiso de su esposo o pareja (34,9%), entre los otros.

Con respecto a los principales imaginarios prevaleció que el amor y la paciencia de la mujer, tarde o temprano hará que su esposo o pareja deje de ser violento (55,7%), una mujer que se viste provocativamente está buscando que la acosen sexualmente (43,8%). El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció sobre el incremento de feminicidio y violencia familiar y sí que las cifras son para llorar, ya que Perú sigue siendo el tercer país con mayores casos de violencia sexual en el mundo, luego de Bangladesh y Etiopía.

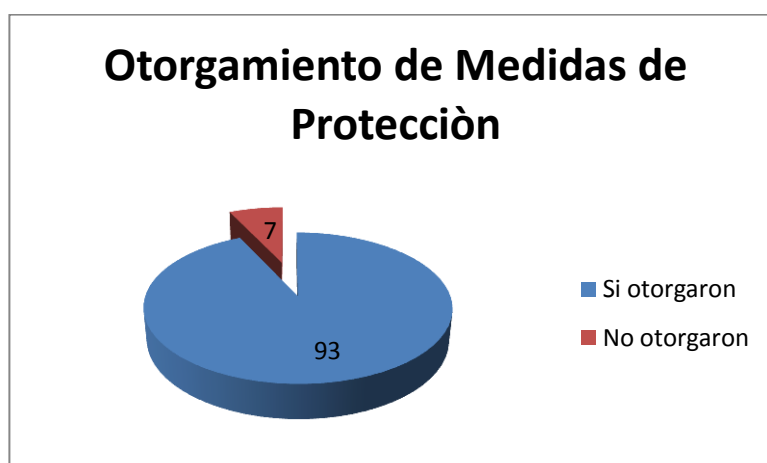
Las mujeres de 26 a 35 años (38.1%) y de 18 a 25 años (29.7%) son las principales víctimas. Asimismo, la mayoría tenía o tuvo un vínculo sentimental con su agresor. Por otro lado, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) registraron 26 mil 83 casos de violencia familiar y sexual. Ante estas cifras es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció y precisó lo siguiente:

- Los graves hechos difundidos por los medios de comunicación si bien configuran delitos penalizados, que es necesario perseguir con firmeza, son también manifestaciones de la alta prevalencia de la violencia familiar en nuestro país, cuyas causas son múltiples y simultáneas.
- Factores como las desiguales relaciones de poder entre mujeres y hombres al interior de las familias y las comunidades, basadas en estereotipos socio culturales machistas, se combinan con una alta tolerancia a la violencia

familiar en la sociedad, fruto de la permisividad de operadores e instituciones llamados a combatir la violencia. Debilitando así los sistemas de prevención, asistencia y justicia llamados a garantizar la protección de derechos de las víctimas.

- La violencia física, psicológica y sexual contra la mujer sigue siendo muy alta en el Perú, a pesar de disminuir de 76.9% a 68.2% entre 2009 y 2016. La misma situación se constata en el caso de niñas y niños de 9 a 11 años de edad víctimas de violencia física o psicológica en las familias, que pasaron de 82.1% a 69.8%, mientras la violencia sobre adolescentes pasó de 87.1% a 73.8% en el mismo período. Nuestro país sigue siendo el tercero en violaciones sexuales en el mundo, luego de Bangladesh y Etiopía. Asimismo, el Índice de Tolerancia Social de las personas en relación a la violencia familiar hacia las mujeres es muy alto pues llega al 54.8%.

CUARTO HALLAZGO: OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION



De los 100 casos analizados, se comprobó que los juzgados de Familia, resguardaron el carácter tuitivo de la Ley N° 30364, al dictar medidas de protección el 93 casos, aun cuando en su mayoría las víctimas y los agresores estaban ausentes en la audiencia también se verificó, que ante la falta de realización de pericias y falta de identificación exacta de los agresores o de las víctimas en los informes policiales, el juzgado se abstuvo de no dictar medidas de protección en 7 casos.

ANALISIS:

Determinar la naturaleza jurídica de las medidas de protección no es tarea que a priori resulte fácil, ante esta situación se hace necesario determinarlo, pues sólo así se podrá establecer su régimen jurídico supletorio, principalmente cuando se planteen problemas de interpretación. En un primer momento ante la abrumadora entrada en vigencia de esta norma, nos remitimos a los jueces de familia quienes informaron que acordaron darle el trato especial a las medidas cautelares, pues era lo que más se aproximaba, y la única forma de encontrarle un sustento jurídico a las resoluciones.

Entonces aquí surge una interrogante, se tiene que citar a ambas partes para la audiencia?, o basta solamente la presencia de la parte agraviada? Aquí es entonces donde debemos entender que tipo de medida es la medida de protección, es una MEDIDA AUTOSATISFACTIVA?, o es una MEDIDA CAUTELAR?

Las medidas son mecanismos especiales de protección, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho constitucional. Su particular naturaleza viene dada por la pretensión de proteger los derechos humanos fundamentales, considerando bienes jurídicos de relevancia para la sociedad, entre otros a la vida y a la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial. La violencia familiar es un atentado directo contra estos derechos, establecidos como prioritarios. Por lo tanto, se debe actuar con diligencia para evitar todos los tratos crueles y degradantes que implica para la víctima el estar sometida a la violencia. También podemos afirmar que estas medidas tienden a la satisfacción de necesidades urgentes ante la inminente necesidad de protección a la víctima. Sin embargo, se ha podido encontrar que ante la ausencia de las víctimas a las audiencias, se han dictado medidas de protección que no se ajustan a la verdadera necesidad de la víctima, se suelen dar medidas de protección genéricas de abstención.

Otro obstáculo que ha conllevado a programar las audiencias en 4 o 5 meses, es la acumulación de carga procesal, generando falta de atención inmediata y desatención a otras materias que pudiera conocer el juzgado. Finalmente, frente a informes policiales deficientes, se presentan problemas para notificar y citar a las

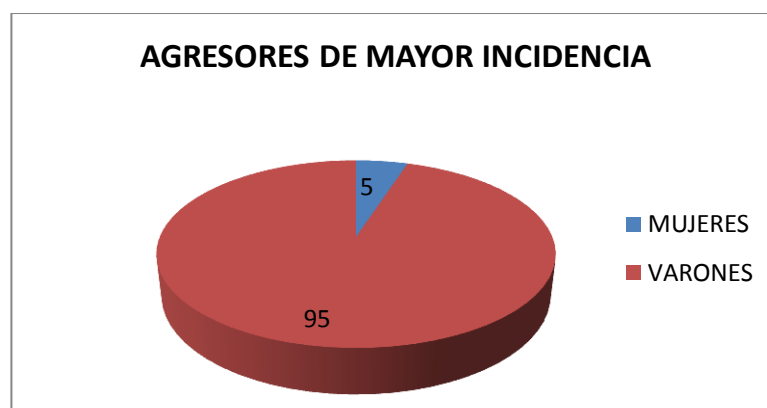
partes a audiencia, debido a la falta de identificación exacta del agresor, incluso de las víctimas denunciantes.

La Ley 30364, no está preparada para afrontar la realidad peruana, pues si bien el artículo 23 responsabiliza al 100% a la POLICIA NACIONAL con la EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION, y no estamos hablando de responsabilidad funcional administrativa propiamente, sino de responsabilidad penal donde ubicamos de 2 a 5 años de pena privativa según el artículo 377 y 378 del código penal.

Pues en general, las áreas de Violencia Familiar de la policía no estaban ni están preparada para afrontar la realidad social que aqueja a la población de cada sector, con el alto índice sobre todo en nuestro distrito judicial de los casos de violencia familiar.

No se ha dotado por parte del Estado ni siquiera provisoriamente la logística necesaria para soportar el SHOCK o IMPACTO que esta ley iba a causar

QUINTO HALLAZGO: Agresores de mayor frecuencia



Nuevamente, los datos estadísticos de nuestra muestra de estudio, nos revelan, que el agresor de mayor incidencia en las escenas de violencia familiar es el varón (95 casos), quienes en un mayor porcentaje corresponde al esposo o conviviente como jefe de familiar, ser el autor de agresiones domésticas; y sólo se han hallado 5 casos en los

que la mujer es la agresora, casos en los que sus víctimas fueron menores de edad o adultos mayores.

ANALISIS

Datos proporcionados por Ipsos Apoyo sobre “Sexualidad, reproducción y desigualdades de género” señala que los principales problemas que padecen las mujeres son la violencia física (55%) y psicológica (32%), seguido del embarazo no deseado (31%). De estos resultados se deduce que un 56% cree que las mujeres toleran la violencia por sus hijos, y otro 48% piensa que lo hacen por motivos económicos. La violencia contra la mujer no conoce de clases sociales, edades ni fronteras, esta se puede manifestar de forma física o psicológica. El maltrato físico ocurre a través de golpes o violencia sexual, mientras que la violencia psicológica se basa en amenazas, aislamiento o insultos graves.

Se suele pensar que la violencia física es siempre la peor, pero un maltrato emocional prolongado puede causar graves daños, incluyendo depresiones, deseos de venganza y de suicidio. Al respecto, la Defensoría del Pueblo agrega que debido a ello muchos casos de violencia psicológica o no son denunciados, o no son aceptados por la Policía Nacional como motivo para sentar denuncia.

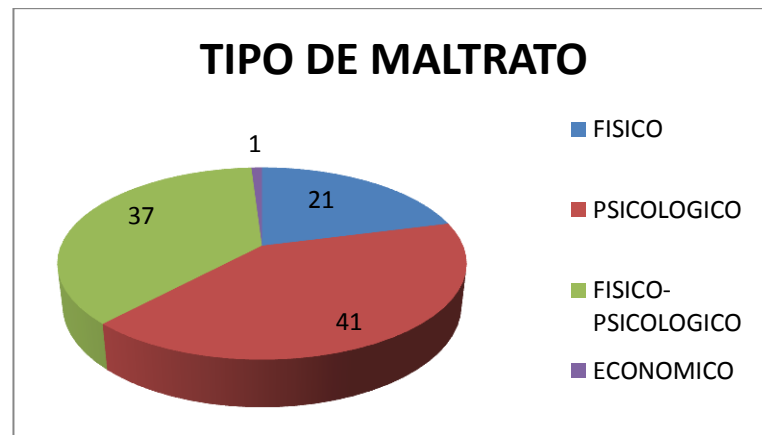
Pero, ¿existe un perfil del agresor de este tipo de delitos? Los estudios a nivel mundial son escasos. La literatura existente evidencia una heterogeneidad entre los agresores de homicidios de la pareja íntima, de la cual se podría esbozar cuatro subtipos generales de autores de feminicidios: los enfermos mentales, los hombres suficientemente controlados/desregulados, los abusadores crónicos y los sobrecontroladores. Existen análisis que señalan que los hombres que asesinan a sus parejas tienden a estar en una edad media de 30 años y si bien varios estudios los ubican con una escolaridad básica, hasta 13% corresponden a personas con estudios universitarios. Interesante es el hallazgo que un cuarto de los autores de femicidio fueron abusados cuando eran niños.

Los celos son un motivo frecuentemente citado por los femicidas. Sin embargo, la construcción relacionada con la envidia hacia la pareja también se refleja en las

entrevistas forenses como una causal del delito. Los celos implican la posibilidad de retener el objeto que el individuo posee...la mujer, mientras que la envidia refleja el reconocimiento de la imposibilidad de obtenerla, de ahí este impulso por la destrucción. Conocer el perfil del agresor de este tipo de delitos, favorece tanto la forma de abordar la rehabilitación como evaluar el beneficio de la libertad frente a la buena conducta carcelaria. Evidencias muestran que abusadores crónicos que tienen personalidades antisociales, sádicas y narcisistas responden menos favorablemente al tratamiento.

Existe un interés creciente en el ámbito mundial por la prevención de este tipo de delitos. Sin embargo, también existe la sensación que en nuestro medio el femicidio es una realidad invisibilizada del cual poco conocemos.

SEXTO HALLAZGO: Tipo de maltrato denunciado



Del análisis de los casos, se ha podido determinar que el mayor número de agresiones denunciadas, son las agresiones psicológicas (41 casos), las cuales lo constituyen los insultos, humillaciones, vejaciones, etc.; luego en menor número se denuncian agresiones físicas – psicológicas (37 casos), las cuales se configuran con bofetadas, golpes, puñetes, patadas, acompañadas de insultos y humillaciones; las agresiones físicas son denunciadas en menor escala (21 casos), y éstas se constituyen por lesiones corporales en las víctimas; finalmente se la muestra analizada sólo 1 caso se denunció agresión patrimonial o económico.

ANALISIS:

El 90 por ciento de las víctimas de violencia familiar que concurren a la Justicia sufren agresiones verbales, psicológicas y emocionales, y llegan a la instancia de denuncia después de sufrir reiterados episodios de violencia. El 90 por ciento de las víctimas de violencia familiar que concurren a la policía para hacer sus denuncias, sufren agresiones verbales, psicológicas y emocionales, y llegan a la instancia de denuncia después de sufrir reiterados episodios de violencia.

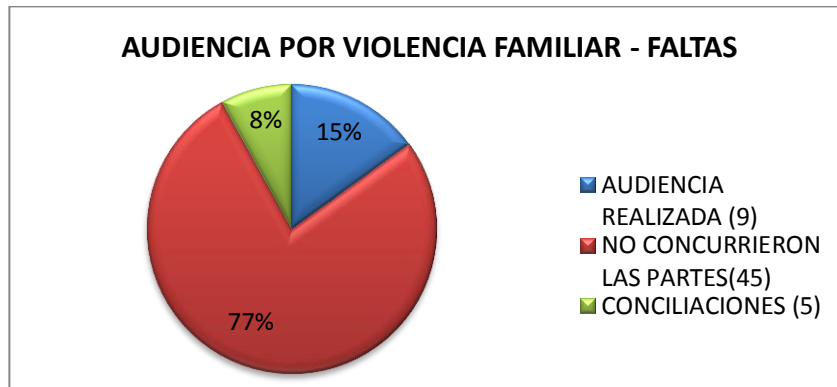
La violencia verbal y psicológica es sufrida por el 37 por ciento de las víctimas. Además, en el 21 por ciento de los casos hay agresiones físicas. En cuarto lugar, las denunciantes mencionan sufrir violencia económica y patrimonial (1 por ciento).

Otro dato que aporta el relevamiento es que la mayoría de las víctimas llega a denunciar cuando las agresiones son repetidas. Sólo el 12 por ciento de las presentaciones se corresponden con el primer episodio de violencia, mientras que el 86 por ciento da cuenta de agresiones reiteradas (INEI, 2015). La mayoría de los casos se ve la convivencia de ambos tipos de violencia: la física y la verbal. Pocas veces la denuncia se corresponde con las primeras agresiones. “Muchas personas que denuncian por primera vez dicen que vienen siendo violentadas desde hace 20 años”.

La psicóloga Paola Blanes considera que hay mucha dificultad para reconocer la violencia verbal y psicológica, y que generalmente se visibiliza cuando aparece acompañada de otras agresiones.

Sin embargo, sostiene que en el último tiempo hubo avances. “Creo que la ley nacional de violencia ayudó a que se la reconozca y se la empiece a nombrar desde las instituciones, que se la releve en las denuncias. Es común que las agresiones verbales colocan a las víctimas en situación de gran vulnerabilidad y las conducen al aislamiento. “Esto de cortar o tratar de interceder para cortar las relaciones de la otra persona está siempre dando vueltas”, lo cual constituye el círculo vicioso de la violencia familiar.

SETIMO HALLAZGO: Audiencias realizadas en 59 casos derivados por faltas al Juzgado De Paz Letrado De La Victoria, año 2016-2017



Fuente: Juzgado de Paz letrado de La Victoria, distrito judicial de Lambayeque.

RESULTADO:

De la visita realizada al Juzgado de Paz Letrado de la Victoria, para determinar la actuación que se realizaron en los procesos de violencia familiar, derivados por la fiscalía penal, por configurarse en faltas, se determinó que el Juzgado de Paz Letrado de La Victoria recibió 59 casos de Violencia Familiar, por configurarse FALTAS; de los cuales en 45 (77%) casos, las partes tanto víctima y agresor no asistieron a la audiencia; en 9 casos si se realizó la audiencia con concurrencia de las partes, disponiendo que el expediente queda expedito para dictar sentencia; y sorprendentemente en 5 casos, se han celebrado conciliaciones entre la víctima y su agresor, arribando a acuerdos reparatorios económicos.

ANALISIS:

Los casos de violencia familiar, se tipifican mediante la Ley de Violencia Familiar 30364, que entró en vigencia el 24 noviembre del 2015. “Al derogar la anterior norma, penaliza actos de violencia contra la mujer y demás integrantes de la familia”.

De acuerdo a la ley se rige y otorga diferentes facultades, referido a 4 tipos de violencia, como: física, psicológica, sexual y económica patrimonial. Atendiendo al código penal, cuando las agresiones ocasionan hasta 10 días de descanso, se consideran como faltas, por tanto quien asume la jurisdicción de la pena punitiva es el juez de Paz Letrado. Si se trata de lesiones leves, se determinará mediante 10 a 29 días de descanso. En el caso de violencia contra la mujer o integrante de la familia, de acuerdo al tipo penal, el juez señala que la pena se agrava. En este caso, se determina una pena de 2 a 4 años.

Si el certificado médico, supera los 30 días a más, la tipificación de la pena se considera como lesiones graves. “De acuerdo a las pruebas presentadas, y en la calificación jurídica, el juez determinará si es delito o falta”. En el caso de la concurrencia de los imputados, hablando de un caso penal de violencia, ya sean en la familia o fuera de ella, el juez instituirá la individualización del delito. En el proceso indica que se identificará al agresor, ya sea varón o mujer. En hecho de generar violencia en estado de ebriedad, según la interpretación jurídica del juez, no va a ameritar una reducción de la pena, entendiendo si el agresor es violento o ya se tiene antecedentes penales de su actuar. “Sólo en estado de inconciencia podría disminuir la sanción de la pena”.

Para que una lesión se considere delito y no falta, el Código Penal establece criterios basados, principalmente, en los días de asistencia médica o descanso requeridos. Solo en el caso de lesiones graves, la determinación del delito no depende exclusivamente de ello. De acuerdo al artículo 121, para que se consideren las lesiones como graves debe tomarse en cuenta tres situaciones. La primera si estas “ponen en peligro inminente la vida de la víctima”, también si “mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente”. Las lesiones “que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera 30 o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa”. En este último criterio radica la diferencia con las lesiones leves, pues según el artículo 122, así se consideran cuando requieran más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso, o “nivel moderado de daño psíquico”.

Sin embargo, si el médico legista determina que la atención o días de descanso son de 1 a 10 días solo configura en falta, por tanto no existe pena privativa de la libertad sino únicamente prestación de servicio comunitario.

CRITERIOS JURIDICOS CUANTITATIVOS (CRONOLÓGICOS) PARA LA TIPIFICACIÓN DE LAS LESIONES CORPORALES

Tipo Penal	Lesiones		Descanso Médico Legal
Faltas	Lesiones Culposas		Hasta 15 días
	Lesiones Dolosas		Hasta 10 días
Delitos	Culposo	Lesión Leve	Más de 15 y menos de 30
		Lesión Grave	30 o más días
	Doloso	Lesión Leve	Más de 10 y menos de 30 (11 a 29) días
		Lesión Grave	30 o más días

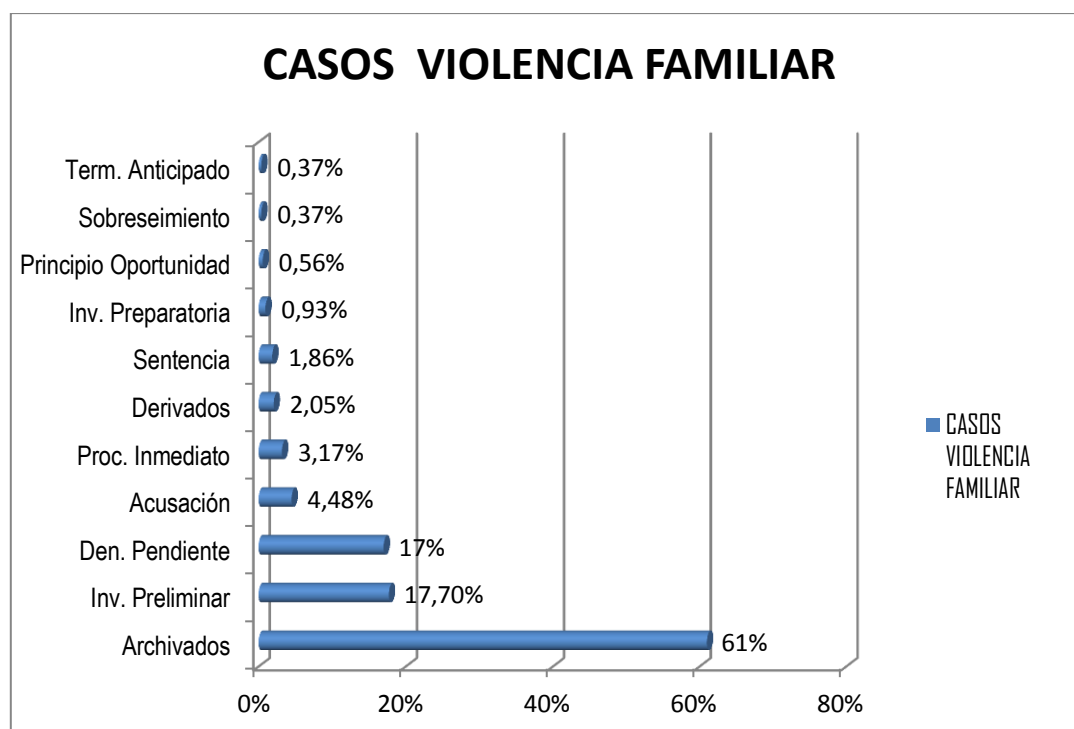
Captura Guía médico legal de valoración integral de lesiones corporales de la Fiscalía de la Nación.

¿Cómo evitar el error? Precisamente, en la determinación de los días de descanso médico para calificar si se trata de lesión leve o grave es donde surge nuestro cuestionamiento. Cabe precisar que el médico legal actúa a pedido del fiscal, quien en base al peritaje determina el tipo penal que corresponde. El abogado penalista Roberto Miranda, en una entrevista al diario EL COMERCIO, coincide con ello pues sostiene que no se puede definir un tipo penal basándose únicamente en los días de descanso médico o incapacidad, sino que es necesario que el fiscal tome en cuenta la intencionalidad que se determina a través de una investigación.

2.- MINISTERIO PÚBLICO

MUESTRA ANALIZADA: 1º Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, 535 casos ingresados desde el 01 de enero al 01 de setiembre del 2017.

PRIMER HALLAZGO: *Actuación ineficaz de las fiscalías penales en casos de violencia familiar*



Fuente: 1ª Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo

Del análisis de los casos ingresados a la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, se ha constado que desde el 01 de enero hasta el 01 de setiembre del año 2017, han ingresado 535 casos, número considerable de denuncias por violencia familiar derivadas de los juzgados de Familia o Mixtos, con la respectiva medida de protección, de los cuales, el 61% de casos que representan a 329 procesos, fueron

archivados en esta instancia; luego tan solo 95 casos, que representa un 17.7% se encuentra aún en investigación preliminar; con denuncia aún pendiente de trámite se encuentran 91 procesos, lo que representa al 17% del total; increíblemente sólo en 24 casos se ha formalizado la acusación fiscal, lo que representa a un 4.48%; asimismo, hasta la fecha únicamente en 17 casos se ha solicitado proceso inmediato; y 5 (0.93% casos se encuentran en investigación preparatoria lo cual representa a un 3,17%. En menor escala, tenemos un grupo de casos que han sido concluidos; de los cuales 11 (2.05%) procesos fueron derivados a los Juzgados de Paz letrados por configurarse en FALTAS; sólo 10 (1.86%) procesos han sido sentenciados por Juzgados penales; increíblemente 3 (0.56%) procesos han sido archivados provisionalmente por haberse arribado a un principio de oportunidad; 2 (0.37%) casos se acogieron a la terminación anticipada.; y 2 (0.37%) casos concluyeron con sobreseimiento.

ANALISIS:

La Fiscalía de Familia o Mixta, cuando reciben denuncias directas por parte de las víctimas, remiten lo actuado al Juzgado de Familia, a efectos de que proceda a evaluar el otorgamiento de medidas de protección o cautelares en favor de la víctima. Programa la audiencia de otorgamiento de medidas de protección, el Juzgado de Familia deriva la carpeta a la Fiscalía provincial penal respectiva para la calificación de la denuncia como delito o de ser el caso como falta.

En los casos de delitos o infracciones a la ley penal que contempla la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio hasta su culminación, en sede fiscal o en sede policial, según corresponda. Cuando el investigado es mayor de edad, quien dirige el Procedimiento de Entrevista Única es el Fiscal Penal. El Fiscal de Familia participa velando por el respeto de los derechos y garantías de las víctimas niñas, niños y adolescentes; y, si el investigado es menor de edad, aquel dirige el procedimiento. En caso existan investigados mayores y menores de edad, quien dirige la entrevista es el Fiscal Penal previa coordinación con el Fiscal de Familia, a fin que se comunique al psicólogo cuáles son los elementos fácticos que son necesarios conocer.

El Fiscal Penal, de Familia o Mixto, o la Policía, cuando el Fiscal lo disponga, emite el oficio correspondiente para que la víctima asista a las evaluaciones médico forenses (reconocimiento médico legal, evaluación psicológica y otras que correspondan a la investigación).

El psicólogo(a) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe estar capacitado en técnicas de entrevista forense y contar con la experticia necesaria para realizar el Procedimiento de Entrevista Única en los casos de víctimas de violencia. El psicólogo(a) es responsable de informar a la persona entrevistada respecto al Procedimiento de Entrevista Única, sin discriminación alguna, tomando en cuenta los enfoques de Género, Integralidad, Interculturalidad, Derechos Humanos, Interseccionalidad, Generacional, Desarrollo Humano e Interdisciplinario. Realiza las coordinaciones previas con los operadores intervinientes a fin de tener la información necesaria que le permita realizar la entrevista, recaudando los elementos fácticos que ayuden al esclarecimiento del caso. Asimismo, durante el Procedimiento de Entrevista Única, el psicólogo(a) adecuará las preguntas del operador a la edad cronológica, estado emocional, déficit intelectual, deficiencias físicas – sensoriales – o indicios de posibles trastornos neurológicos, entre otras limitaciones de la víctima.

Hasta antes del 9 de enero del 2017, y al no existir una valoración graduada del daño psicológico denunciado, el Ministerio Público no contaba con las herramientas suficientes para calificar una agresión psicológica como lesión que constituya delito. Desde el 9 de enero del 2017, con el Decreto Legislativo N° 1323, se incorpora como agravante, las circunstancias de que la lesión física o psicológica haya sido producida en circunstancias de violencia familiar; y se incorpora la gradualidad de las agresiones psicológicas, como Daño Psíquico Leve (Faltas), Daño Psíquico Moderado (delito) y Daño Psíquico grave o muy grave (delito), aunado a ello, el Instituto de Medicina Legal, en coordinación con el Ministerio Público ha implementado un conjunto de directivas para la determinación de lesiones psíquicas en víctimas de violencia familiar y que permiten determinar el grado de la lesión psicológica.

Sin embargo, existe oportunidad para que el profesional en psicología, atado a la sobrecarga laboral existente en los departamentos de medicina legal, otorga cumplimiento a la aplicación de estas guías para determinar el grado de la lesión

psicológica. Evidentemente y frente a la realidad de los números obtenidos en nuestra estadística, NO; ya que el 61% de casos archivados a nivel fiscal; y que estaban con medidas de protección, eran denuncias por agresiones psicológicas; y al no existir un diagnóstico graduando el daño psíquico, el Fiscal responsable no ha tenido a la vista, la prueba objetiva que determine el daño psicológico a la persona; más aún, si es la propia víctima la que no ha asistido a las evaluaciones psicológicas requeridas desde la interposición de la denuncia.

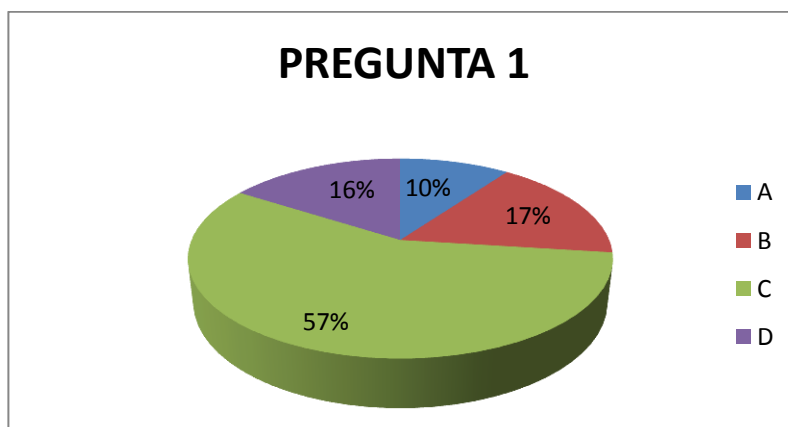
La Ley N° 30364 fue promulgada con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Pero se evidencia el riesgo de que la ley no se aplica adecuadamente, porque se ha generado una incertidumbre en los operadores de justicia en su implementación, como no hay capacitación de la norma, tenemos un Poder Judicial y Ministerio Público colapsado, una policía no sensibilizada, por ello, las denuncias de las víctimas vienen rebotando en un archivamiento a mayor escala.

3.- ENTREVISTA A OPERADORES DEL DERECHO (JUECES, FISCALES, ASISTENTES JUDICIALES)

Para este trabajo de campo, se ha tomado como muestra una encuesta realizada a 120 personas al azar, quienes se desempeñan como operadores del derecho, como jueces, fiscales, asistentes judiciales, asistentes en función fiscal, abogados, etc.; con la finalidad de conocer la perspectiva que tienen sobre la implementación de la Ley N° 30364; obteniendo los siguientes resultados:

3.1. PREGUNTA N° 01: Considera que la actuación policiales efectiva ante una denuncia por violencia familiar.

- A. Si tienen actuación inmediata deteniendo al agresor. (18) (10%)
- B. Sólo reciben la denuncia y remiten su informe al Juzgado (30) (17%)
- C. Son indiferentes a las denuncias por violencia familiar (102) (57%)
- D. No contestaron 29 (16%)



ANALISIS:

Mediante RD. N° 925-A-2016-DIRGEN/EMG-PNP del 16 de setiembre del año 2016, se aprobó la guía de procedimiento de intervención policial en casos de violencia familiar, el cual establece que conocido los hechos de violencia por el personal policial de servicio de

calle, deberán reportarlos de forma inmediata al personal de la Comisaría de la jurisdicción policial correspondiente a través del Parte de Ocurrencia. El personal policial que, como consecuencia de un pedido de constancia de retiro forzoso o voluntario del hogar, advierta que en caso deviene de un hecho de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, procederá de inmediato a registrarla como denuncia.

Como consecuencia de un pedido de constatación por abandono del hogar, advierta que el caso deviene de un hecho de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, procederá de inmediato a registrarla como denuncia. El personal policial que reciba una denuncia debe identificarse ante la usuaria o usuario con su grado y nombres completos, por lo que debe tener en el escritorio de manera visible su rótulo de identificación.

El personal policial, independientemente de la especialidad, está obligado a recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias verbales o escritas de actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar que presente la víctima o cualquier otra persona en su representación. En el caso de las víctimas no es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjería. En caso, el hecho denunciado corresponda a otra jurisdicción policial, obligatoriamente la denuncia será recibida, registrada y derivada de inmediato con los actuados preliminares a la jurisdicción policial correspondiente, previa comunicación al Juez de Familia del lugar o los que cumplan sus funciones y al Fiscal Penal de constituir delito. Está prohibido referir al denunciante a otra dependencia bajo responsabilidad. Las niñas, niños o adolescentes podrán denunciar actos de violencia en su agravio o de otras personas sin la presencia de una persona adulta. En esta circunstancia el personal policial garantiza su seguridad hasta que se dicte la medida de protección.

Lo deberá ser ejecutado, cumpliendo con todas las diligencias de ley considerando que todo el procedimiento policial debe estar enmarcado dentro del plazo de 24 horas de recepcionada la denuncia. Para recibir y registrar la denuncia es suficiente lo manifestado por quien requiere la intervención policial, no siendo necesaria la presentación de resultados de exámenes físicos,

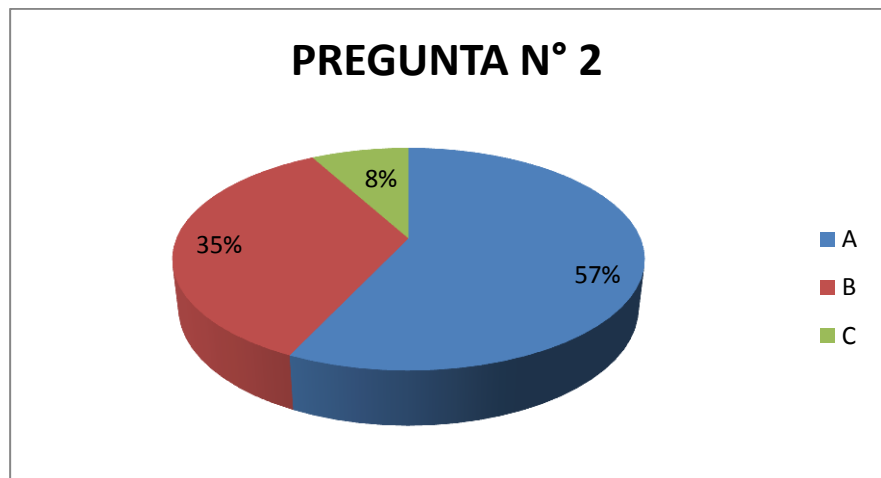
psicológicos, pericias de cualquier naturaleza, o que la víctima muestre huellas visibles de violencia. Si la víctima cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, estos se recibirán e incluirán en el Atestado o Informe, que será enviado al Juzgado de Familia o su equivalente. Para tal fin se tendrá en cuenta la precisión que formaliza el artículo 13 del Reglamento de la ley.

El personal policial tiene la obligación de registrar la denuncia de manera inmediata en el aplicativo respectivo del Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL) y, en ausencia de éste, en el libro de denuncias; el registro de la denuncia debe ser previo a la solicitud del examen pericial. Si de la denuncia de violencia se desprende una situación de abandono de una niña, niño o adolescente se comunica de inmediato al Juzgado de Familia o al que haga sus veces, al Fiscal de Familia o su equivalente y a la Unidad de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que actúen de acuerdo a sus atribuciones. Si la denuncia de violencia involucra como agraviados o agresores a niñas, niños o adolescentes, se comunica a la Fiscalía de Familia. Si la denuncia de violencia que se registra implica un presunto delito, el personal policial comunica de inmediato el hecho a la Fiscalía Provincial Penal conforme al artículo 14.2 del Reglamento.

Sin embargo, y habiendo sido demostrado que no existe una confiabilidad en las actuaciones policiales, los operadores del derecho consideran que la Policía Nacional del Perú es indiferente a las denuncias por violencia familiar; y es que, uno de los vacíos que existe en esta institución es la ausencia de efectivos policiales especializados, capacitados y sensibilizados en asuntos de familia; pero aún, si tenemos en cuenta que el recepcionista de la denuncia es un efectivo policial de turno, que muchas veces no tiene tiempo para realizar las constataciones.

3.2. PREGUNTA N° 2: Sobre la participación limitativa de los Juzgados de Familia para otorgar medidas de protección:

- A. Es adecuado que sólo otorguen medidas de protección (102)
- B. Las M. de protección deben ser otorgadas por el Juzgado Penal (63)
- C. Los Juzgados de Familia no deben intervenir (15)
- D. Los Juzgados de familia deben ser los únicos en conocer todo el proceso de violencia familiar



ANALISIS:

La violencia hacia las mujeres y miembros de la familia, en especial quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, es un grave problema que configura la violación de los derechos humanos. En el Poder Judicial, el número de expedientes sobre violencia familiar representa aproximadamente el 60% de la carga procesal de los Juzgados de Familia y Mixto.

La Ley N° 30364, vigente desde el 24 de noviembre de 2015, establece un proceso especial para el trámite de denuncias por actos de violencia, que permite la emisión de medidas de protección y cautelares a fin de garantizar el bienestar de las víctimas de violencia, en el plazo de 72 horas. Con el fin de atender con celeridad y oportunidad los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y las solicitudes de medidas

de protección a las víctimas, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) creó un total de 24 Juzgados Especializados en Familia en el ámbito nacional, los cuales entraron en funcionamiento desde el 1 de agosto del año 2016. Dichos órganos de justicia funcionarán de manera permanente en 20 distritos judiciales, en donde impartirán justicia al amparo de la “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar” (Ley N° 30364).

Asimismo, se asignaron nuevos órganos de justicia en lugares donde se registra mayor incidencia de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. De esta forma, se estableció que los distritos judiciales de Arequipa, Lambayeque, Lima Este y Piura tengan, cada uno, dos Juzgados de Familia Permanente. En tanto, los siguientes distritos judiciales tendrán un juzgado de dicha especialidad cada uno: La Libertad, Loreto, Cusco, Junín, Huánuco, Madre de Dios, Huaura, Lima Sur, San Martín, Lima Norte, Ayacucho, Sullana, Apurímac, Ica, Callao y Tacna. La implementación de los 24 nuevos juzgados de Familia se financia con parte del presupuesto de 30 millones de soles, transferido recientemente por el Ejecutivo al Poder Judicial.

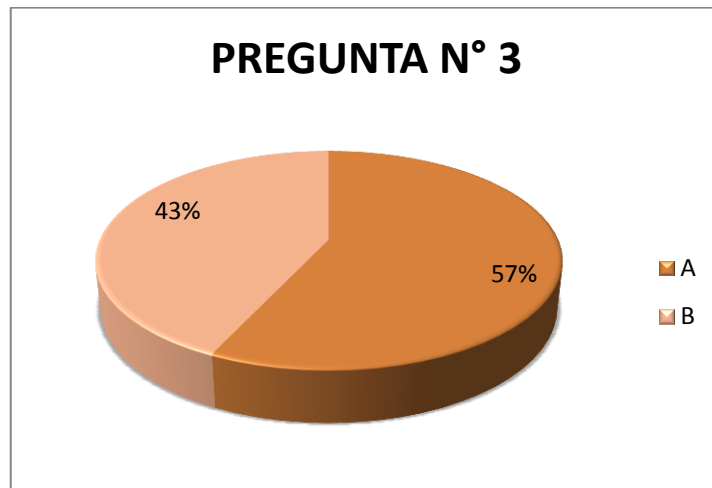
En virtud de la Ley N° 30364, los procesos de familia deberían ser más celeres, por ejemplo tras recibir la denuncia, se tiene un máximo de 24 horas para documentarla y derivarla a los Juzgados de Familia, los que deberían en 72 horas emitir una resolución y otorgan medidas integrales de prevención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado.

Dicha utopía de celeridad procesal, queda únicamente en el contenido de la Ley, ya que, como lo hemos demostrado, desde que la víctima interpone la denuncia policial, transcurre un tiempo promedio de CUARO meses para ser citada a la audiencia de medidas de protección. Por dicho motivo, un sector de los operadores del derecho consideran con la real falta de celeridad procesal, las medidas de protección deberían ser otorgadas directamente por los juzgados penales.

3.3.- PREGUNTA N° 3: Para usted, se justifica la incorporación de nuevo delito, las agresiones físicas y psicológicas por violencia familiar:

A. Si, era necesario penalizarlo (102)

B. No, debió seguir tramitándose en proceso especial - Ley N° 26260. (78)



ANALISIS:

Como puede apreciarse, la protección que el Estado brinda, en sentido abstracto, a este problema intenta abarcar, y abarca en gran medida, la expectativa de integridad de acciones necesarias para combatirlo, la ley da un alcance de plan de políticas públicas que manifiestan al menos un ideal político: la protección de la víctimas y la erradicación de la violencia familiar en nuestro país.

Ahora bien, la ley 26260 hizo un mapeo principalmente sobre los mecanismos de protección de la víctima, buscaba garantizar su integridad; sin embargo, no desarrolló la sanción del agresor en casos en los cuales sus actos constituyan delitos o faltas; lo cual no quiere decir que este aspecto haya sido obviado en nuestra legislación, sino que se encuentra desarrollado ahora en nuestro Código Penal.

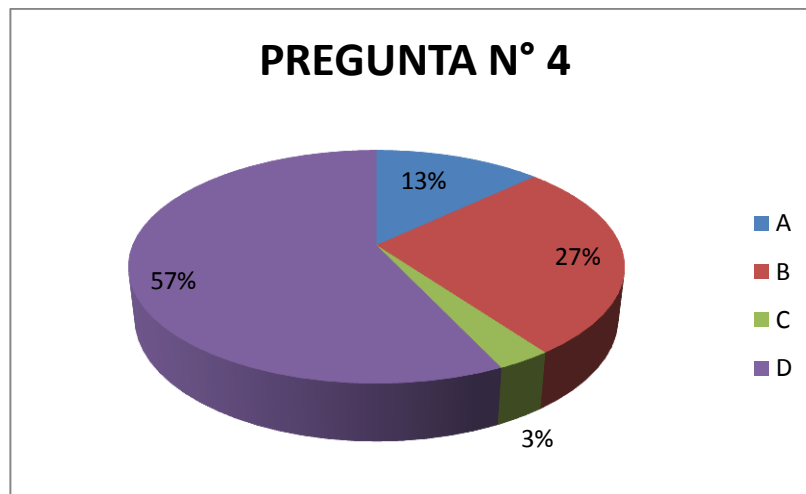
Los artículos 121 y 122 del Código Penal y sus modificatorias. referidos a Lesiones (tanto graves, como leves), establecen como **agravantes** los casos

en los cuales existe una relación “familiar” entre los sujetos del tipo, e igual tratamiento se dan en los casos en los cuales existe esta relación y se comete violencia sexual. Nuestra normatividad penal reconoce la importancia de las circunstancias especiales de agresiones realizadas en un contexto “familiar”, en el cual la víctima sufre una amenaza constante y se encuentra en una especial situación de indefensión debido a la relación que tiene con el agresor, al contexto de género que incrementa el grado de diferenciación respecto a cualquier otro tipo de violencia.

Esta justificación ha sido mayormente aceptada por los operadores del Derecho, ya que concuerdan con la intención del legislador, sin embargo, debemos replantear la estructura procedimental tanto en la vía penal cuando sus lesiones configuren delito y en una vía especial, cuando las lesiones no constituyan delito.

3.4. PREGUNTA N° 4: Usted, que ha conocido procesos de Violencia Familiar, con el nuevo proceso penal, considera que es más eficaz?

- A. Si, es más eficaz. (24)
- B. No, adolece de retrasos en los plazos (48)
- C. Si, la sentencia es efectiva (6)
- D. No, porque no se llega a una sentencia (102)



ANALISIS:

La Ley N° 30364 contiene buenos aportes en lo que se refiere a la protección del Estado contra cualquier tipo de violencia que se ejerza contra la mujer y los integrantes del ámbito familiar (en su contenido define hasta cuatro tipos de violencia: física, psicológica, sexual y económica). En el ámbito del derecho sustantivo, su aporte es innegable.

Sin embargo, el problema en la Ley N° 30364 son las inconsistencias de su contenido procesal, que ya son evidentes a más de 18 meses de su aplicación; las cuales deberán ser tomados en cuenta por los legisladores.

Otro problema en la Ley N° 30364 es el de la conculcación del derecho de motivación, ya que prácticamente obliga al juez a emitir una

medida de protección o una medida cautelar sin el mínimo acervo probatorio que le permita emitir un fallo acorde a derecho. Esto perjudica a ambas partes, pues si bien, por un lado, ocasiona un perjuicio al denunciado, quien obtiene una medida en su contra sin ningún medio de prueba que lo sustente (salvo en los casos de flagrancia o manifiestos), por otro también se lo ocasiona un daño al agraviado o agraviada, ya que una vez que los actuados sean remitidos a la Fiscalía, el fiscal y juez penal no tendrán ningún documento probatorio para realizar una evaluación positiva del caso, por lo que decretará (como se está suscitando en la mayoría de los casos) el archivamiento del proceso por falta de medios probatorios que lo sustenten.

CAPITULO V

PROPUESTAS DE IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN LA LEY N° 30364

1.- FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA INEFICACIA DE LA LEGISLACION ESPECIAL FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN NUESTRO PAIS.

Como señalamos al iniciar este trabajo, la reciente incorporación de un marco legislativo protector frente a la violencia familiar resultaría insuficiente si éste no tuviera una aplicación real. Es decir, el grado de efectividad de cualquier legislación sólo podrá determinarse analizando lo que ha ocurrido en el campo de los hechos. En este sentido, una mirada acerca de las dificultades que se han presentado nos revela lo siguiente:

1.1.LA EDUCACION EN VALORES EN LA FAMILIA

Actualmente por las noticias queda confirmado que nos está ganando la violencia, y por tal motivo tenemos el avance de la inseguridad ciudadana, de la baja calidad de educación, y el avance de la corrupción y la violencia, todo esto se está convirtiendo en el problema número uno en el país.

Por el avance de la violencia en la familia y en la sociedad, es importante encontrar la raíz de esta violencia familiar. La Violencia Familiar, es la acción violenta ejercida en el hogar por uno de los cónyuges que somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación, vejación, humillación y otras acciones que atentan contra la integridad física, moral y psicológica, del cónyuge maltratado, también el maltrato en contra los hijos, quienes quedan traumatizados. La violencia familiar es la madre de todas las violencias que existen, es la raíz de la baja calidad de educación, de la inseguridad ciudadana, de la mala gobernabilidad, del avance de la corrupción, por la falta de valores.

Considero que la raíz de la Violencia Familiar es: “ *La mala formación que los padres dan a sus hijos, por la falta de valores en el hogar, durante la crianza*”.

Frente a estos graves problemas ya sabemos cuál es la raíz. Por la experiencia de muchos grupos que trabajan con las familias en crisis, se ha tomado conocimiento que la destrucción de la familia y la sociedad está en la violencia familiar en los hogares, porque los padres como esposos no han sido bien orientados mediante una Política de Familia basada en los Valores de Vida, para que formen bien la personalidad de sus hijos.

Analicemos la raíz de la violencia que ya ha sido citada. Si en un hogar viven en continua violencia familiar, quiere decir que los hijos desde la gestación hasta el comienzo de su juventud, han formado mal su personalidad, porque han aprendido la violencia que vieron en sus padres. Pero si fuera todo lo contrario, que sus padres viven el mayor tiempo en armonía, los hijos están aprendiendo un buen comportamiento y son felices, esto lo interpretamos con el siguiente slogan, que dice: “*donde hay padres felices, hay hijos felices*”. Encontrada la raíz, es importante dar la medicina, donde está el “secreto del gran cambio para ser feliz.” Esta es: “Basado en los valores de vida que son: la verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía, la vida, orientar a los padres para que formen bien la personalidad de sus hijos, y así disminuir los traumas psicológicos, y de esta manera vivan una plena vida feliz. Nuestro objetivo final será que todos en sus hogares vivan en ARMONIA FAMILIAR, esto es el entendimiento entre los miembros de un hogar, se expresa en un estado de ánimo armónico, dialogante y de entrega; sustentado en Valores y Principios de Vida, encaminados a conseguir vivir en la Verdad y lograr un desarrollo moral, intelectual, económico y espiritual.

Para ello el Ministerio de Educación, han planificado en su plan de gobierno, una buena *calidad de educación*, pero siempre lo han hecho comenzando el plan desde las aulas, a la fecha no han dado resultados positivos todas estas propuestas, porque no han considerado el estudio desde su raíz. Se

debe considerar que la *calidad de educación* inicia desde el hogar, porque la formación de la personalidad de los hijos en el hogar, si es que se realiza en un ambiente de continua *violencia* familiar, los hijos traumatizados y mal formados cuando asisten al salón de clase, no pueden hacer razonamientos lógicos, no pueden interpretar bien lecturas, ni pueden leer correctamente.

Para el Ministerio de Educación del Perú y para otros países, es muy importante definir, clarificar y hacer una buena Calidad de Educación, basada en los valores de vida. La Calidad de Educación, es despertar en el joven sus potencialidades intelectuales y morales que guarda dentro de sí, y que sea diestro en manifestarlo, de acuerdo al grado en la Educación. Es muy importante encontrar la raíz de la mala calidad de educación y hacer los estudios necesarios para estudiar soluciones para la *Violencia Familiar*. *La raíz es: Los padres en sus hogares por la falta de valores de la verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía, la vida, han formado mal la personalidad de sus hijos durante la crianza.* Se debe considerar importante orientar a los padres con esta medicina: *“Basado en los valores de vida que son: la verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía, la vida, con estos valores orientar a los padres para que formen bien la personalidad de sus hijos, y así disminuir los traumas psicológicos, y de esta manera vivan una plena vida feliz.* El objetivo final será que todos en sus hogares vivan en armonía familiar.

1.2.CULTURA MACHISTA DE NUESTRA SOCIEDAD

La violencia hacia la mujer, que generalmente se da en el ámbito de las relaciones conyugales o de pareja, se sustenta en un conjunto de concepciones y modelos de ser hombre y de ser mujer que se denominan comúnmente «machismo».

El varón se configura como padre, autoridad en el hogar, trabajador, proveedor, con dominio en lo público. Las mujeres se construyen socialmente centradas en la maternidad, protegidas por los varones, dedicadas al hogar y a la crianza y con dominio en lo privado (Salinas y Carvajal, 2006). Parte de ello se debe a la organización patriarcal, en donde la mujer y los hijos aparecen subyugados.

Investigadores latinoamericanos como Fuller, Olavarría, Salinas, Arancibia y otros, coinciden en señalar que los varones tienen conocimiento en cuanto a los cambios habidos en los roles de género y en la necesidad de relaciones más equitativas al interior de la familia (lo que se ha constatado en el presente estudio), sin embargo hay persistencia de una cultura «machista» que sostiene y reproduce ideas, valores y actitudes de desigualdad y discriminación, especialmente hacia las mujeres, que propician las prácticas de violencia y maltrato.

El machismo es uno de los factores explicativos de la violencia doméstica y una muestra de la complejidad de las relaciones intergéneros. Aunque hay otros factores responsables de esta situación las investigaciones dan pistas para abordar la problemática desde el ámbito del dominio y el poder como componente para analizar la violencia en todos los aspectos, desde el público hasta el privado.

Tecla (2000), en su investigación *Antropología de la violencia*, refiere que la violencia no es innata sino aprendida, y que es producto de ciertos tipos de relaciones circunstancias que se pueden modificar. El hombre es educado adiestrado y acostumbrado en y para la violencia, que influye en la conciencia de dominio y servilismo que tiene que ver con el poder. (Salinas, 2006: 70).

El machismo es una forma de ser hombre que en nuestro medio aún persiste, toda vez que no se han consolidado otros modelos de ser hombres. En la experiencia educadora con varones que hiciera Reprosalud se evidenció en los hombres el temor al cambio. Al dejar de ser machistas se enfrentan al riesgo de perder su papel aprendido que les da estabilidad.

Los modelos de ser hombres están asociados a la agresividad, al conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada (De Keijzer, 2002). Las preguntas que guiaron el estudio fueron:

- ¿Cómo se expresa el machismo en las relaciones de pareja dentro de la unidad familiar y cómo se asocia a las expresiones de violencia hacia la mujer?

- ¿Cuál es la asociación entre el fenómeno del machismo y las pautas culturales prevalecientes en las relaciones hombre-mujer dentro de la unidad familiar?
- ¿Cuál es la relación entre el machismo y el comportamiento que expresa autoritarismo al interior de la unidad familiar?
- ¿Cuáles son las concepciones y prácticas que son permisivas para el autoritarismo y poder que conllevan a la violencia dentro de la unidad familiar?

Los datos del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) indican que desde el año 2009 hasta agosto del 2015, se han atendido en los Centros Emergencia Mujer (CEM) 209,803 personas afectadas por violencia familiar y sexual. El 88% de los casos corresponden a mujeres y el 2% a varones. El 28% de los casos corresponden a niños, niñas y adolescentes, el 68% a personas adultas (entre 18 a 59 años) y el 4% a personas adultas mayores. El 51% ha sido víctima de violencia psicológica; el 37% de violencia física y el 12% de violencia sexual (Viviano, 2008).

Según el estudio «Respuestas de la comunidad frente a la violencia doméstica contra la mujer» (Oblitas, Cáceres, Pacheco, 2007) el machismo es una de las causas principales de la violencia contra la mujer, así lo señalaron dirigentes de organizaciones de base, mujeres que participan en organizaciones y mujeres que no participan en organizaciones. Sin embargo, el problema del machismo no ha sido abordado lo suficiente por los analistas sociales en relación a la violencia doméstica.

Los estudios en torno a la construcción de la masculinidad, el machismo y las relaciones violentas al interior de las familias peruanas aún son escasos. También son escasas las investigaciones que describen y vinculan las concepciones autoritarias y de poder entre los miembros de la familia. Se trata de ganar nuevos conocimientos que busquen asociar a los resultados de investigaciones sobre la persistencia de patrones culturales que predominan en el comportamiento de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad.

Es nuestro propósito que la investigación científica incursione en estos campos de investigación y análisis, no solamente para un mayor conocimiento de la problemática sobre la violencia en todas sus formas (la orientada contra la mujer en el

caso de este proyecto), sino para aportar con criterios que sean útiles en la formulación de políticas sociales en este campo, las relaciones entre géneros, como se señaló en la introducción.

El origen de la violencia contra las mujeres en el seno familiar se remonta a la histórica concepción de poder y al uso tradicional de la violencia por parte del padre o marido hacia los hijos y la esposa con el fin de mantener el equilibrio de la estructura patriarcal. Como dice Foladori (2007), no es un problema de afecto sino un mecanismo típico de toda institución social patriarcal. Es el poder, ese sistema de control que se da a través de las relaciones entre personas o entre grupos de personas, como menciona Foucault (1991); el ejercicio del poder no es sólo una relación entre miembros es también un modo de acción que ejercen unos sobre otros.

«La familia antes de ser un grupo es una institución pues ha sido conformada por una normatividad desde el momento mismo de la fundación de la pareja, de manera estable y bajo un rígido sistema de responsabilidades que incluso adquieren a nivel del Estado legislaciones que la autorizan. El Estado es el que norma todas las instituciones del sistema, entre ellas a la familia. Por eso, las hace a su imagen y semejanza con el propósito de mostrar su hegemonía...» (Foladori, 2007). Nuestro sistema social se ha nutrido de esto para ir construyendo un modelo de familia determinado, la familia patriarcal, que está basada en términos de poder versus sumisión, y asigne el poder a lo masculino y la sumisión a lo femenino.

Las relaciones de poder: machismo, autoritarismo, etc., que se dan en el seno familiar son productoras de violencia y maltrato. El microsistema familiar reproduce y construye a la vez el microsistema social. Entonces, ser hijo, ser padre o ser madre, es tener asignadas una serie de normas en función del lugar establecido dentro de la familia. Se trata de implantar un modo de vida como el único posible bajo el patriarcado (Compte y Oreiro, 2000).

Una estructura patriarcal genera todas las condiciones objetivas y subjetivas (en lo masculino y en lo femenino) para que los hombres agredan a sus parejas: el poder del dinero, el don de mando, la voz de imposición, el no saber comunicarse más que a

golpes, el silencio de las mujeres, el temor de las mujeres a denunciar, el pensarse pasivas, etc.

Comprobamos que el tema de la violencia doméstica, para muchos hombres y mujeres sigue siendo privado, a pesar de que ha dejado de ser oculto e invisible. En general se reconoce que hubo maltrato en la infancia, pero parece seguir siendo un patrón de comportamiento en el hogar en la actualidad. De hecho, los patrones culturales de género van más allá de lo doméstico y si bien en este terreno se instalan de una manera específica y preferencial (en lo afectivo, en la sexualidad, en los roles domésticos, en la crianza, el cuidado de la salud, en el cuerpo, en los hábitos cotidianos), en lo público (lo político, lo educativo, en la institucionalidad en general, en el aparato legal, en los modelos económicos, en los imaginarios religiosos), se instalan para garantizar su perdurabilidad en el tiempo y en el espacio.

Hombres y mujeres reconocen que hay cambios respecto a la generación de sus padres, pero si se cruza esta opinión con el resto de las entrevistas, pareciera que fuera más en la forma que en el fondo (muchas veces no se tiene claro en qué cosas hay cambios). Esto indica que los patrones culturales de género no se mueven con facilidad, a pesar de las experiencias de violencia en la crianza, traumáticas algunas, más bien pareciera que estas experiencias continuaran asentando en la vida cotidiana los patrones establecidos como si los afirmaran y llevaran a las personas, mediante el miedo por ejemplo, a que finalmente acepten la experiencia como obvia dentro del sistema.

1.3.FALTA DE HUMANIZACIÓN EN LOS OPERADORES ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

Frente a las manifestaciones de violencia, la respuesta que ofrece nuestro sistema legal resulta bastante limitada e ineficaz. A lo largo de nuestra historia legislativa, la reacción estatal a este problema se ha focalizado en el agravamiento de pena para el agresor. No obstante, de la década de los 90s para adelante se vienen

realizando esfuerzos importantes de parte del Estado y de la sociedad civil por enfrentar el problema de la violencia familiar.

Es necesario señalar que frente al alto número de denuncias por violencia familiar contra mujeres y niños, siendo ésta situación una grave afectación de los derechos fundamentales vulnerando la salud de las víctimas, y por un clamor general de la población, se requiere de manera urgente penalizar esta clase de conducta, dando así a la sociedad una señal clara de condena y rechazo para esta forma de violencia.

Estando de acuerdo que al tratarse de un derecho fundamental afectado, desde la sociedad y el Estado se debe dar una respuesta adecuada que contribuya a desterrar este flagelo, y debemos investigar si es a través de la penalización de la violencia familiar que se logrará con este propósito.

En un estudio realizado por el Instituto de Defensa Legal, se demuestra cómo es que por ejemplo, a nivel de Juzgados de Paz Letrados, la visión de indiferencia y minimalización de la mujer como sujeto igual al hombre por parte de los operadores jurídicos en general (policías, jueces, abogados, etc), hace que estos casos sean tratados dentro de los supuestos de faltas, lo cual tiene dos consecuencias claramente preocupantes: (1) la conciliación o transacción se da como si se tratase de cualquier supuesto de faltas, lo cual va contra el sentido de la norma de violencia familiar y de protección de la víctima frente a su entorno de violencia, (2) los casos de violencia familiar son invisibilizados por el sistema, perpetuando así las condiciones de los mismos.

Se propondría que ni los jueces de paz ni los jueces de paz letrados podrían ocuparse de este tipo de denuncias porque no tendrían ya la competencia para ello (debe recordarse que sólo pueden atender faltas y no delitos), dejando este asunto sólo a los jueces especializados en lo penal y jueces mixtos. Sin embargo, si hacemos una revisión del número de estos magistrados existentes en el país, observaremos que sólo llegan a 551 (fuente: Academia de la Magistratura) y que además se encuentran ubicados mayoritariamente en ciudades medianas y grandes, con una serie de problemas de sobrecarga procesal, mientras que en el resto del territorio la administración de justicia corresponde a los jueces de paz y en menor medida a los

jueces de paz letrados, sin considerar que en ciertas zonas rurales ni siquiera existe presencia estatal.

La posible consecuencia, no prevista por los legisladores, sería la de generar una situación de indefensión, donde las víctimas de violencia familiar que se encuentran en ámbitos rurales o en ciertas zonas urbano populares no tendrían la posibilidad de recurrir a una instancia jurisdiccional que les proporcione una respuesta efectiva a su demanda de justicia, ya sea porque geográficamente es inaccesible, porque económicamente es oneroso desplazarse, porque no entienden el idioma o porque culturalmente no los comprenden. De este modo, en lugar de haber contribuido a la solución del problema, se habría creado una nueva barrera de acceso a la justicia para la población que tradicionalmente ha estado excluida, y una situación de impunidad para los perpetradores des esta nueva figura delictiva.

2.- PROPUESTAS DE ACTUACIONES QUE DEBERIAN IMPLEMENTARSE PARA UN EFICAZ ENFRENTAMIENTO A LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO POLITICA SOCIAL DEL ESTADO.

2.1. INCORPORACION DE CURSOS DE EDUCACION EN VALORES PARA HIJOS Y PADRES, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS.

El problema en sociedades como la nuestra tiene alto grado de tolerancia y, en muchos casos, de aceptación por parte de la víctima y el entorno social, una de las principales estrategias para la prevención es fortalecer el rol de la familia como el primer espacio de socialización del respeto por el otro, por uno mismo y por la diferencia.

La prevención de la violencia doméstica parte del hogar, donde debe inculcarse una convivencia caracterizada por la formación en valores, que deben ser vividos no solo en el núcleo de la familia, sino llevarlos a los espacios cotidianos, a la escuela, al trabajo o los espacios de recreación.

Los valores son las características morales de las personas, que promueven su crecimiento y son desarrolladas mediante su experiencia en el mundo, por lo que es una decisión netamente personal.

Sin embargo, desde el punto de vista social, es claro que sociedades como la nuestra requieren sobre todo de personas que piensen no solo en el bien propio sino en el común, que sean solidarios, que puedan sentir el dolor y la necesidad de los demás. “Estas personas tendrán menos posibilidad de mostrar conductas violentas en la comunidad y en su hogar”.

Las buenas costumbres deben promoverse durante los procesos iniciales de formación, de ahí el rol fundamental de la familia. Asimismo, los adultos tienen la obligación de ser ejemplo de estas, en la vía pública, en los trabajos, tiendas, con nuestros comportamientos cotidianos. A través del ejemplo se educa a mejores personas, mejores ciudadanos.

Hay que motivar a los niños y jóvenes para que se involucren en actividades altruistas, educándolos para que puedan sopesar las alternativas de su actuar con todo cuidado y reflexionen sobre las consecuencias de sus actos.

Luego de haber revisado los diferentes aspectos que algunos países europeos tomaron como herramienta fundamental para combatir la violencia, criminalidad, alcoholismo y drogadicción en su población; he determinad que ISLANDIA, es el país que desde el 2005, inició planes estratégicos para acabar con la criminalidad y por ende con todos los aspectos de violencia y desorden en su sociedad; incorporando a sus diversas políticas pública, un PLAN ESTRATEGICO EDUCATIVO, en el que conjugaba la participación de: PADRES, NIÑOS, ESCUELA y ESTADO.

Algunas estrategias aplicadas:

- Incremento del 8% del Presupuesto público, destinado a la educación para brindar un servicio gratuito y de calidad a su población.

- Instaurar un sistema educativo **COMPLETAMENTE GRATUITO** con acceso para todas las familias nacionales, sin criterio evaluador de condición social, con un elevado nivel académico en su docencia, infraestructura y actualización permanente (obligatoria, gratuita y de alta calidad).
- Currículo educativo basado en **VALORES**, instaurado en los tres niveles educativos: primario, secundario y universitario; inculcando a los niños desde el seno familiar y educativo en valores de libertad, tolerancia, confianza y franqueza; y, desde la escuela se trabajan valores como la puntualidad, el tiempo propio y el de los demás, fundamentando la enseñanza en cómo planificar el tiempo (en el trabajo y la vida cotidiana); y, sobre todo la igualdad entre hombres y mujeres.
- Implementar la educación compartida a través de una política familiar decente, donde obligatoriamente los padres deben contribuir con la educación en valores, desde el nacimiento del niño, debiendo otorgar el tiempo adecuado para convivir con sus hijos. Valores que se trabajan conjuntamente (familia y centro educativo): Ser autónomos (tomar decisiones que les permita realizarse como personas), la motivación y el empeño tanto en el estudio como en el trabajo; la paz y la humildad en detrimento de la persuasión y la soberbia. Y sobre todo se trabaja en la no violencia, para lograr reducir el índice de criminalidad. La educación en valores para la familia debe ser aplicada por el Ministerio de Poblaciones Vulnerables en coordinación con el Ministerio de Educación.
- Incorporar planes de recreación juvenil, subsidiadas por el Estado y dirigidas por los gobiernos locales (municipalidades) y de acceso a todos los jóvenes, sin distinción de clases sociales. El estado, a través del ministerio de educación, dirigiría programas juveniles como deportes en diversas disciplinas, danzas, arte, música, entre otros, con la finalidad de incentivar a los jóvenes adolescentes a desarrollar actividades que requieran desgaste físico y manifestación de agresividad natural.

- El modelo de educación compartida, que tiene a tres protagonistas (padres, escuela y estado), debe instaurar los tres momentos en el día a día de cada niño y adolescente:
 - 33% del día, el niño y adolescente debe permanecer en la escuela para recibir formación en materias académicas complementadas con asignaturas de formación personal.
 - 33% del día el niño y adolescente, debe pasar tiempo con sus padres reforzando lazos de amistad, conversación, confianza, enseñanza de valores, compartiendo actividades domésticas, de recreación, etc.
 - 33% del día, el niño y adolescente deben realizar actividades que generen desgaste físico – energético donde puedan manifestar su agresividad natural, en programas de deportes, danzas, música, teatro, etc, participando sin restricciones en los programas dirigidos por los gobiernos locales.

2.2. PROGRAMAS DE EDUCACION, ORIENTACION Y REHABILITACION PSICOLOGICA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR:

Estamos en un país, donde el día a día son relatos de homicidios, robos, corrupción, tráfico, escenas de violencia doméstica, mujeres maltratadas, etc; que hacer si ya tenemos una ley que penaliza toda acción que lesione la integridad física o psicológica que contenga antecedentes de violencia familiar, qué hacer con las víctimas de una violencia familiar, para evitar que continúen permitiendo acciones de violencia; o peor aún, que sean protagonistas de un hecho delictivo y terminen siendo víctimas o victimarios.

Actualmente el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, cuenta con dos planes de acción limitados:

El Servicio de Atención Urgente: Consiste en un servicio gratuito y especializado cuya finalidad es brindar en forma inmediata, eficaz y oportuna, atención a las víctimas de los casos de violencia familiar y sexual que llaman a la Línea 100 y/o son reportados por los medios de comunicación, y requieren

atención urgente; a fin de procurar la protección de la integridad física, emocional y sexual de la persona afectada.

Sin embargo, este programa únicamente ofrece asesoría y orientación, pero no rehabilita, educa ni brinda una ayuda efectiva a las víctimas en violencia familiar.

Los Centros Emergencia Mujer: Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Asimismo, se realizan actividades de prevención a través de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización de organizaciones.

De igual forma, este programa, únicamente orienta a la víctima, en que acciones tomar frente a un hecho de violencia familiar.

El Centro de Atención Institucional: El CAI es un servicio de intervención con varones adultos sentenciados por violencia familiar que son remitidos por el juez de paz y/o juzgado de familia. De acuerdo a los casos particulares el periodo de intervención puede ser hasta de un año como mínimo, pudiendo extenderse según criterio de los profesionales responsables de la atención.

Estos tres programas implementados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, están vigentes y vienen interviniendo en situaciones de violencia familiar; sin embargo, queda en una asesoría y orientación, como sus definiciones lo indican; no se realiza una labor dinámica y efectiva que ayude a la víctima a retomar dos aspectos importantes: EDUCACION Y REHABILITACIÓN.

Frente al análisis de los programas del Ministerio de la Mujer, en comparación con las acciones y planes internacionales que han venido ejecutándose en la lucha contra la violencia familiar; la investigadora propone lo siguiente:

- Reconstituir los HOGARES REFUGIO para las víctimas de Violencia Familiar. Actualmente existen 39 casas de acogida, instauradas hasta diciembre del 2016; de los cuales 11 funcionan en Lima. Estos centros de acogidas, albergan a la mujer y a sus hijos víctimas de violencia familiar, brindándoles talleres de actividades manuales. Con la entrada en vigencia de la Ley N° 30364, desde noviembre del año 2015, no ha existido un incremento considerable en estas casas refugio.
- La propuesta, en de la delegación de facultades; materializar la competencia de los gobiernos locales (Municipalidades), para que cada uno instituya un HOGAR REFUGIO, que brinde atención y acogida a las víctimas; en coordinación directa y permanente con el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, con la asignación del presupuesto especial para este plan de lucha. Siendo así, tendríamos:
 - Municipalidades Provinciales : 19 refugios
 - Municipalidades distritales: 1646 refugios
 - Municipalidades de Centros Poblados: 2437 refugios
- Las acciones del refugio, no deben limitarse a la acogida de la víctima, y a brindarle un techo, alimentación y asesoría; desde el ingreso de la víctima hasta su salida, debe recibir terapia psicológica, educación familiar en valores; educación laboral y una inserción laboral exclusiva para víctimas de violencia familiar en condición de desempleadas; hasta su reubicación en un hogar adecuado.
- El estado deberá promover incentivos para las empresas públicas y privadas que incorporen entre su masa laboral, a víctimas de violencia familiar, debidamente acreditadas por el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables en coordinación con las casas de refugio y los gobiernos locales.

2.3.IMPLEMENTACION DE POLICIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS FAMILIARES

Se debe tener en cuenta que estamos en una sociedad saturada de actos criminales diarios; y se debe sumar la insensibilidad de los operadores policiales al momento de recepcionar las denuncias por violencia familiar. La Ley N° 30364, dispone que es la Policía Nacional la encargada de hacer cumplir las medidas de protección dictadas por los Juzgados de Familia; pero, se viene cumpliendo con esta disposición?.

En la realidad y del análisis de los hechos, los órganos policiales, diligencian las notificaciones sin realizar un control en la ejecución de las medidas de protección.

Esta situación de insensibilidad frente a las denuncias, falta de intervenciones inmediatas e incumplimiento de medidas de protección, hace necesario que se implemente la DIRECCION POLICIAL DE ASUNTOS DE FAMILIA, la cual debería incorporar un área de atención en cada Comisaría de la Policía Nacional que funciona a nivel nacional, siendo que hasta el año 2012, existían 1397 dependencias policiales, según datos estadísticos del último censo nacional de Comisarias del 2012; proponiendo que la implementación, debe tener en cuenta lo siguiente:

- El personal policial asignado a esta dirección y a las áreas de atención familiar en cada comisaría del país, debe recibir la educación y capacitación necesaria en cuanto a las normas y procedimientos de la Ley N° 30374 y su reglamento; asimismo, deberán ser concientizados y sensibilizados en cuanto a la importancia de la violencia familiar, para tomar medidas de intervención inmediata frente a una denuncia.
- Centralizar toda la información de violencia familiar, contando con un registro estadístico del distrito, para efectuar un seguimiento a los casos denunciados así como de la aplicación de las medidas de protección dictadas por los órganos jurisdiccionales.
- Mantener estrecha relación con los órganos de gobierno local al que pertenecen, ya que los refugios o casas de acogimiento estarán bajo la administración de las Municipalidades.
- El personal policial, de esta dependencia, debe estar en condición de contribuir con la prevención, garantizar, restablecer y reparar los derechos no sólo de los niños, niñas, adolescentes, sino de los demás miembros de la familia, en las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitados dentro del contexto de la violencia intrafamiliar.

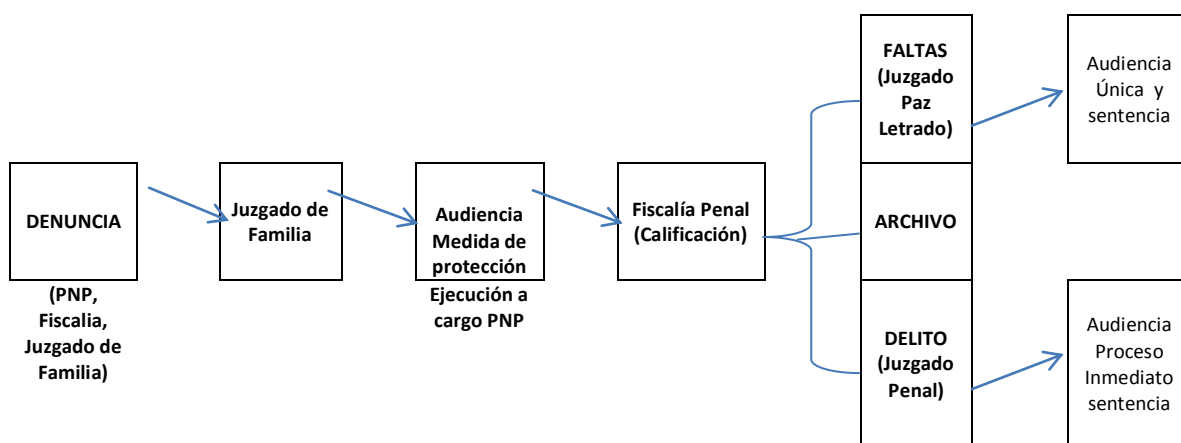
2.4.PARTICIPACION EFICAZ DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, CON UNA PROPUESTA DE REFORMA EN EL PROCESO JUDICIAL ESPECIAL PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR .

Actualmente, las Fiscalías de Familia y las que hacen sus veces; han sido reducidas a tener participación únicamente cuando se evidencia que las víctimas de violencia familiar son menores de edad (niños y adolescentes). Después del estudio de la muestra sobre el desarrollo de las etapas judiciales desde la denuncia policial hasta la sentencia, o siendo realistas, hasta llegar al archivamiento, las Fiscalías de Familia, no tienen presencia ni actuación; aún cuando sus operadores han sido capacitados exclusivamente para actuar en investigaciones asuntos y conflictos familiares.

De otro lado, la participación de las fiscalías penales o mixtas, es invisible, ya que han venido archivando las carpetas de violencia familiar durante el año 2016, por no considerar que la valoración de la lesión, sea física o psicológica, constituya un delito; de tal modo que el engorroso trámite judicial de una denuncia familiar, se resuelve en un promedio de 6 a 7 meses, terminando lamentablemente con una disposición de archivamiento; en el mejor de los casos, aquellos que fueron derivados a los Juzgados de Paz Letrados como procesos por FALTAS, hasta la fecha siguen a la espera de la programación de audiencia única.

Una síntesis de la actuación procesal de una denuncia de violencia familiar es la siguiente, según la ley N° 30364:

ESQUEMA ACTUAL PROCESAL EN VIOLENCIA FAMILIAR



Durante la recolección de datos, en los diferentes órganos jurisdiccionales, hemos podido constatar que el procedimiento actual que nos trae la Ley N° 30364 y su reglamento, está plagado de falta de celeridad procesal, debido a que la denuncia por violencia familiar hace un recorrido por diferentes órganos judiciales, para finalmente terminar en un archivamiento. En lo que va del año, desde su aprobación (Noviembre del 2015), hasta la fecha, aproximadamente el 90% de casos denunciados fueron archivados por las Fiscalías Penales y Fiscalías Mixtas; ya que, en su mayoría las agresiones denunciadas eran psicológicas; y el principal y reiterado considerando que las Fiscalías citaban era el siguiente:

4. Que el hecho investigado consiste en el maltrato psicológico sufrido a Nicole Ariana Córdova Barturen (13), el mismo que habría sido realizado por su madre Maritza Barturen Carrasco. De la revisión del **Protocolo de Pericia Psicológica N° 012295-2016, de fecha 01 de setiembre del 2016**, correspondiente a la menor agraviada Nicole Ariana Cordova Barturen, se advierte que la afectación que presenta no constituye un daño psíquico conforme a los términos del Artículo 8°, literal b de la Ley 30364 (Modificado a través del Decreto Legislativo N° 1323, publicado el 06 de enero del 2017). Debe entenderse que no cualquier afectación emocional configura el delito bajo análisis, ya que para ello se requiere la producción de un daño psíquico (afectación psicosomática), el mismo que deberá ser consignado en el respectivo protocolo de pericia psicológica.
6. Conforme a lo expuesto, al haberse determinado que el hecho puesto en conocimiento no constituye delito, este Ministerio Público dispone que los actuados sean devueltos al juzgado de familia remitente para que proceda conforme a sus atribuciones respecto de las medidas de protección dictadas.

VI. PARTE DECISORIA

Por las consideraciones expuestas, con las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado – Artículo 159° numeral 5 y la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Legislativo 062 – Artículos 11° y 94°, esta Fiscalía **DISPONE NO FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA** contra **MARITZA BARTUREN CARRASCO** por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familia, en agravio de **NICOLE ARIANA CORDOVA BARTUREN (13)**, debiendo archivar definitivamente los actuados una vez consentida o confirmada la presente.

Con estos fundamentos, nos hemos encontrado en las Fiscalías Penales y Mixtas que hemos visitado; y, teniendo en cuenta que el mayor número de denuncias realizadas son por agresiones psicológicas; por ende, casi el total de las denuncias realizadas por violencia familiar en su figura de agresiones psicológicas terminaron en un archivamiento, durante el año 2016.

Para este año, en el mes de enero, se emitió el Decreto Legislativo N° 1323, el cual emite una serie de modificaciones, regulando las lesiones que se producían producto de una violencia familiar, entre ellas, voy indicar el aspecto más significativo para nuestra investigación:

“Artículo 122. Lesiones leves

1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.

En la realidad de los hechos, y conforme a los casos analizados en los diferentes órganos jurisdiccionales, casi el 90% de hechos denunciados por agresiones físicas, no superan los diez días de asistencia médica o descanso; lo que significa, que esas agresiones no se califican como DELITOS, sino como FALTAS y serán de conocimiento de los Juzgados de Paz Letrados o de los Juzgados de Paz de Nominación en zonas rurales, con la probabilidad de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio en la audiencia convocada después de 4 meses más de espera.

Otro aspecto, resaltante en las modificatorias incorporadas en el Decreto Legislativo N° 1323, es el siguiente:

“Artículo 124-B. Del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual

El nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo, con la siguiente equivalencia:

- a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico.*
- b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico.*
- c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico.*

Desde enero de este año, se incorporó las directivas para el Instituto Médico Legal, señalando las pautas y procedimientos para las evaluaciones psicológicas en casos de violencia familiar, determinando que se debe concluir que nivel de daño psíquico presenta la víctima, leve, moderado, grave o muy grave. Sin embargo, nuevamente nos

encontramos con una realidad constante; que la gran mayoría de denuncias por agresiones psicológicas, contienen un diagnóstico de NIVEL LEVE de daño psíquico, lo cual configuraría FALTA, como el mismo decreto lo ha aclarado; por tanto, en un primer momento, las denuncias formuladas en el año 2016, han sido archivadas; y las agresiones denunciadas después de enero del año en curso, son derivadas a los Juzgados de Paz Letrados o Juzgados de Paz, para su tratamiento como FALTAS, las cuales aún están a la espera de realizarse la audiencia.

Luego del análisis y seguimiento realizado a los procesos de violencia familiar denunciados en el año 2016 y 2017, la investigadora, propone simplificar las etapas del proceso, conforme al siguiente esquema:

PROPUESTA DE UN NUEVO ESQUEMA PROCESAL EN VIOLENCIA FAMILIAR



2.4.1. DENUNCIAS ANTE POLICIA NACIONAL y FISCALIAS DE FAMILIA/MIXTAS.-

La mayor concurrencia de las denuncias se formulan ante las Comisarías Nacionales del País, tal como lo demuestra el análisis de los expedientes del sexto juzgado especializado de Familia de Chiclayo; dicha facultad se ha adoptado de la anterior ley especial, Ley 26260. Para este fin, es necesario que el Ministerio del Interior adopte las medidas necesarias, para implementar en cada Comisaría, un área de atención exclusiva sobre asuntos de violencia familiar; debiendo contar con personal asignado para esa área y que esté altamente capacitado y sensibilizado para tomar acciones inmediatas frente a una denuncia de violencia familiar.

De igual forma; y teniendo en cuenta que a nivel nacional, existe un mayor número de fiscalías mixtas funcionando en diversos distritos; se debe atribuir esta competencia de recibir las denuncias verbales o por escrito a las FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN FAMILIA Y LAS FISCALÍAS MIXTAS; ya que estos órganos están especializados y plenamente capacitados para realizar acciones de investigación inmediata. Las denuncias de oficio, también deben ser competencia exclusiva de las Fiscalías de Familia y Mixtas.

2.4.2. OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION POR FISCALIAS DE FAMILIA.

Con la experiencia recogida en nuestro trabajo de campo, hemos comprobado que el promedio de tiempo que demora en programarse una audiencia para el otorgamiento de medidas de protección es de CUATRO meses, contando desde la fecha de la denuncia policial; con lo que demostramos que NO se cumple el plazo establecido en la Ley N° 30364, la cual ordena que recibida la denuncia

policial, se deriva en el plazo de 24 horas al Juzgado de Familia, *QUIEN PROGRAMARÁ LA AUDIENCIA DE OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION EN EL PLAZO DE 72 HORAS.*

Este precepto que nos trae un plazo de 72 horas para que la víctima reciba medidas de protección, es jurídicamente imposible, por los siguientes motivos:

La Comisaría que recibe la denuncia de violencia familiar, redacta su informe policial y entrega los oficios para las evaluaciones médicas en el plazo de 48 horas, luego recién lo deriva al Juzgado de Familia de turno. El juzgado, lo recepciona en mesa de partes y en el plazo de 24 horas recién deriva la carpeta al despacho del Juez de Familia, quien, por la recargada labor procesal programa la audiencia a 4 y hasta 5 meses posteriores, en razón que no se puede programar antes ya que es necesario otorgar un plazo prudencial para que lleguen las pericias médicas que se ordenaron al momento de efectuar la denuncia.

Con nuestro esquema propuesto, la investigadora pretende recoger algunos aportes de la Ley derogada sobre violencia familiar anterior (Ley N° 26260), el cual en su artículo 10, disponía: *Recibida la petición o apreciados de oficio los hechos, el Fiscal puede dictar las medidas de protección inmediatas que la situación exija.* Esta propuesta, se fundamenta en las razones antes expuestas, la FALTA DE CELERIDAD PROCESAL y el tiempo de espera de la víctima a que le programen una audiencia para que le otorguen medidas de protección.

Con esta propuesta, buscamos fortalecer la FUNCIÓN TUTITIVA de los órganos jurisdiccionales especializados en asuntos de familia; conforme ha quedado establecido en el TERCER PLENO CASATORIO DE LAS SALAS CIVILES DE LA CORTE SUPREMA:

INTERVENCION TUTITIVA DEL MINISTERIO PUBLICO .-
Interviene en estos procesos en defensa del interés social y de la familia como célula básica de la sociedad, además de ejercer la defensa de los menores, sea como parte del proceso (invalidez de matrimonio, divorcio, etc.) o como dictaminador (cuando estén involucrados menores), conforme a los supuestos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público aprobado por Decreto Legislativo 052.

Siendo así, la investigadora propone que sean las Fiscalías de Familia o Mixtas, según corresponda las que dicten las medidas de protección, una vez recibida la denuncia policial de violencia familiar, o una vez recibida de parte la denuncia verbal o escrita sobre violencia familiar y se proceda a dictar la disposición fiscal de otorgamiento de medidas de protección; SIN TENER QUE PROGRAMAR UNA AUDIENCIA O DILIGENCIA ESPECIAL, que conlleve a dilatar los plazos innecesariamente y peor aún, que deje en desprotección a la víctima.

Asimismo, debe ser la Fiscalía de Familia, quien vigile el fiel cumplimiento de las medidas de protección a través de la Policía Nacional; ya que hasta la fecha; las medidas de protección terminan en una mera notificación al agresor, sin controlar su cumplimiento y ejecución.

2.4.3. CALIFICACION DE LA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR:

La investigadora propone que la calificación de la denuncia por violencia familiar, debe ser competencia exclusiva de las Fiscalías especializadas en asuntos de familia o Mixtas, de ser el caso; ya que éstos órganos jurisdiccionales, están preparados jurídicamente para atender asuntos en familia; más aun, si es el propio MINISTERIO PUBLICO, quien a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ha expedido la **GUÍA DE VALORACIÓN DEL DAÑO PSÍQUICO EN PERSONAS ADULTAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTENCIONAL**, aprobado mediante Resolución N° 3963- 2016-MP-FN, de fecha octubre del año 2016; siendo esta institución la indicada para que, a través de sus órganos fiscales,

califiquen el tipo de agresiones que se denuncian en una VIOLENCIA FAMILIAR.

En este contexto, se propone que la Fiscalía de Familia o Mixta, según la tabla de valoración de lesiones físicas y psíquicas, determine si la lesión denunciada constituye delito o no.

- Si constituye delito, deberán presentar su denuncia ante el Juez Penal de Turno, solicitando sea tramitado como PROCESO INMEDIATO, por la naturaleza especial del hecho denunciado.
- Si no constituye delito; la investigadora propone que NO se tramite como faltas; sino que se interponga la demanda especial ante el JUZGADO DE FAMILIA ESPECIALIZADO o Juzgado Mixto de ser el caso; a fin de que la Fiscalía de Familia siga siendo parte del proceso y custodie los derechos de las víctimas. Aunado a ello, se le deben otorgar facultades sancionadoras y reparatorias exclusivas para estos procesos a los Jueces de Familia; quienes tendrán que convocar a una audiencia, con asistencia de las partes y en la misma se debe dictar la sentencia, ratificando las medidas de protección dadas inicialmente a nivel fiscal.
- Ejecución de las sentencias y medidas de protección, en procesos de violencia familiar. Con los hallazgos encontrados en el trabajo de campo, proponemos que las sentencias expedidas en casos de violencia familiar, sea por el Juzgado Penal o por los Juzgados de Familia, sean derivadas a las oficinas descentralizadas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar, entes administrativos que cuentan con personal exclusivo y capacitado en asuntos de violencia familiar; quienes deberán tener como principal función hacer el seguimiento de las sanciones dadas y sobre todo de las medidas de protección dictadas; según sea el caso.

2.4.4. COMPETENCIA EN ULTIMA RATIO DE LOS JUECES PENALES EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR.

Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del Estado, que uno de los principios más importantes es el de *ultima ratio*, entendido como una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del Derecho penal. Esencialmente, apunta a que el Derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas "formales e informales". Si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso. Es decir, estamos frente a un principio que se construye sobre bases eminentemente utilitaristas: mayor bienestar con un menor costo social. El Derecho penal deberá intervenir sólo cuando sea estrictamente necesario en términos de utilidad social general; el derecho penal debería ser una verdadera *ultima ratio*, encontrarse en último lugar y adquirir actualidad sólo cuando ello fuere indispensable para la conservación de la paz social.

Sin pretender ser exhaustivo, se aprecia sin duda en la praxis político criminal del Estado un aumento en el intervencionismo penal, ya sea a través de agravación de las penas, ampliación del tenor de los tipos o la inclusión de nuevos delitos al catálogo penal.

En definitiva, se aprecia una tendencia de "huida al Derecho penal", a diferencia de lo ocurrido en la década del sesenta. La pregunta es ¿por qué ha ocurrido aquello? Si bien existen diversas razones que permitirían fundamentar tal *huida* "no todas ellas vinculadas directamente", sí puede afirmarse que responden a un fenómeno común: el énfasis en el valor "seguridad".

No obstante existir cierto consenso en cuanto a dicha aseveración, también surge la pregunta, ¿deben rechazarse estas manifestaciones de expansión?. Ahora bien, es indudable que debe

tenerse en consideración y valorarse cuan eficiente puede ser el Derecho penal en nuevas áreas, es decir, precisar si responden a necesidades sociales.

Nuestro estado, viene utilizando su poder punitivo en *prima ratio*, penalizando todos los conflictos sociales ocurridos en las últimas décadas, implementando nuevos tipos penales, incorporando agravantes y ahora, con la Ley N° 30364, dándole competencia en conflictos que eran avocados a jueces ordinarios con conocimiento y capacitación exclusiva.

El Derecho Penal, no debe ser utilizado como una política pública para conseguir la tan ansiada seguridad social, aun cuando el estado no ha utilizado otras formas de control menos lesivas "formales e informales" para enfrentar a la violencia familiar, no ha tenido intervención PREVENTIVA en ningún sector: educación, medios de comunicación, familia, instituciones públicas, Etc.; nuestro estado, se ha convertido en un país eminentemente SANCIONADOR, sin detenerse a analizar o estudiar porqué motivo viene incrementando la criminalidad en nuestro país.

Es evidente que la violencia familiar, es la principal causa del incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana; al albergar en el seno familiar a los niños que serán futuros ciudadanos formados en un hogar de conflictos, falta de valores, discriminaciones, agresiones, daño psíquico; es allí donde se están formando los futuros criminales de nuestro país, en los hogares donde existe violencia familiar.

Existe una gran preocupación en la investigadora, quien ha determinado que la mayor importancia son las acciones preventivas educativas que nuestro estado debería implementar como una política pública, en miras de conseguir una seguridad ciudadana.

En el estudio del Derecho Comparado y el tratamiento que diversos estados han implementado para combatir la violencia

doméstica y por ende la criminalidad en sus países; se ha dado con la sorpresa que no ha sido con el uso del poder punitivo del estado; por el contrario, ha encontrado en países como ISLANDIA, FINLANDIA, NORUEGA y ESPAÑA, que sus estados utilizaron medidas educativas, resocializadoras y de acción inmediata sobre la familia, los padres, los centros educativos y sobre sus ministerios como instituciones del estado. El común denominador de estos estados, y que están siendo un modelo a seguir por los estados europeos, es la EDUCACION EN VALORES, y la importancia a la trilogía de trabajo: PADRES + ESCUELA + ESTADO. Siendo así, nuestro Estado no ha agotado otros medios y programas que hayan sido de acciones aplicada y mediata dirigidas exclusivamente a los autores de la violencia familiar, la FAMILIA; no tenemos ningún resultado de acciones anteriores que se hayan hecho para tratar de enfrentar y luchar contra la violencia familiar.

Si analizamos la Ley Especial N° 26260 – Ley contra la violencia Familiar; era una norma eminentemente sancionadora y actuaba “DESPUES DE” ocurrido un hecho de violencia familiar; pero no contenía disposiciones preventivas que algún órgano de gobierno central, regional o local debiera cumplir para evitar la incidencia de violencia familiar.

En este contexto de ideas, la investigadora propone que los Juzgados Penales se avoquen a conocer hechos de violencia familiar, cuando el conflicto lo amerite; y el daño al bien jurídico como es la familia y la integridad física y psicológica de la víctima, configure delito; a que no vamos a erradicar la violencia familiar sancionando penalmente a los agresores; cuando son en las familias disfuncionales, ensambladas o funcionales “sin educación en valores” que se están criando los niños, futuros ciudadanos agresivos y violentos de nuestra sociedad.

CONCLUSIONES

CONCLUSION GENERAL:

- Con la investigación realizada, podemos determinar claramente que la criminalización de la violencia familiar, a través de la Ley N° 30364 NO contribuye a cumplir el objetivo de la ley; ya que, increíblemente los casos de violencia familiar han incrementado desde su implementación a la fecha, o peor aún, no se han incluido perspectivas de género que nos permitan decir que los niveles de desigualdad (y por tanto de indefensión) han disminuido, o que la conciencia sobre las relaciones familiares en general tiene un mayor grado de equidad que antes la promulgación de la norma; con el análisis de datos recogidos del Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cada año el índice de casos se viene incrementando; y lo que es peor aún, ante la falta de capacitación y reglamentación de directivas internas, el 80% de denuncias por violencia familiar en el año 2016, fueron ARCHIVADAS a nivel fiscal, debido a la falta de valoración gradual del daño psicológico, para la configuración de un delito. De otro lado, en el estudio realizado, a nivel de Fiscalías Penales y Juzgados de Paz Letrados, existe la visión de indiferencia por parte de los operadores jurídicos en general (policías, jueces, fiscales, etc), haciendo que estos casos hayan sido archivados por no configurarse los hechos como delito; y los que son tratados dentro de los supuestos de faltas, tiene dos consecuencias claramente preocupantes: (1) la transacción o acuerdo reparatorio que se da como si se tratase de cualquier supuesto de faltas, lo cual va contra el sentido de la norma de violencia familiar y de protección de la víctima frente a su entorno de violencia, (2) los casos de violencia familiar son invisibilizados por el sistema, perpetuando así las condiciones de los mismos. Más aun, si hemos demostrado que un proceso de violencia familia demora un promedio de SIETE meses para llegar a un pronunciamiento final, que en la mayoría de los casos, fue un ARCHIVAMIENTO.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:

- La violencia familiar es tan antigua como la humanidad misma, y el grave maltrato ejercido hacia integrantes de este grupo primario, considerado desde el imaginario social y las prácticas concomitantes, como “el más débil”, increíblemente ha sido hasta mediados del siglo XX, no solo, una conducta aceptada, sino, incluso, alentada, perteneciente a la vida privada de las familias, y sobre la cual la comunidad, y por ende el estado, no debían tener injerencia. A fines de 1993 se promulgó la Ley 26260 que establece la política de Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar. Esta ley constituyó un recurso complementario al Código de los Niños y Adolescentes porque reconoce como actos de violencia familiar los de maltrato físico y psicológico entre cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en común, aunque no convivan, y de padres o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad. Y en noviembre del año 2015, como máxima expresión del poder punitivo del Estado, se promulgó la Ley N° 30364, derogando a la Ley N° 26260, la misma que incorpora como tipo penal las lesiones físicas y psíquicas causadas como producto de la violencia doméstica, y que son de competencia de los juzgados penales y de los juzgados de paz letrados.
- La violencia familiar en América Latina, existe pese a la extensa ratificación en la región de los dos instrumentos de derecho internacional principales que abordan este tipo de violencia: la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará, 1994). Cabe recordar que en la legislación latinoamericana generalmente el concepto de “femicidio” (o feminicidio) es entendido como el asesinato de una mujer en el ámbito de la relación de pareja, aún cuando es ampliamente reconocido que un asesinato por razón de género puede suceder en ámbitos distintos al de la familia. En la última década se observa una tendencia en América Latina a promulgar leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres. Este es el caso de 10 países: Argentina (2009), Bolivia (2013), Colombia (2008), Costa Rica (2009), El Salvador (2012),

Guatemala (2008), México (2013), Nicaragua (2012), Perú (2015) y Venezuela (2007). Actualmente están en trámite proyectos de ley de este tipo en Paraguay, Ecuador y Uruguay. Las leyes integrales acerca de violencia contra las mujeres se caracterizan por una visión holística que define la violencia de género bajo todas sus formas, yendo más allá del ámbito familiar y de la relación de pareja, con el propósito de evitar los vacíos y las contradicciones existentes en las legislaciones nacionales.

- La considera que la violencia de género constituye una violación del art. 4 de la Carta de Derechos Fundamentales y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abordado la violencia de género en diversos ámbitos y la considera contraria a los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, países que no pertenecen a la Unión Europea, como ISLANDIA, FINLANDIA y NORUEGA, han logrado reducir a un 3% su índice de violencia y criminalidad; utilizando estrategias de acción que han recaído en la educación y en la igualdad de género en todos los aspectos sociales.
- Mediante la técnica de la encuesta aplicada a los operadores del derecho, se ha llegado a concluir que existe gran aceptación por la Ley N° 30364, por contener buenos aportes en lo que se refiere a la protección del Estado contra cualquier tipo de violencia que se ejerza contra los integrantes del ámbito familiar (en su contenido define hasta cuatro tipos de violencia: física, psicológica, sexual y económica). Sin embargo, el problema en la Ley N° 30364 son las inconsistencias de su contenido procesal, que ya son evidentes a más de 18 meses de su aplicación; se advierte gran falta de celeridad procesal, falta de gradualidad de las lesiones lo que conlleva a sendos archivamientos dejando en estado de indefensión a las víctimas y sin sancionar a los agresores; hechos muchos operadores recomiendan a ser tomados en cuenta por los legisladores para unas posibles modificaciones de la estructura procesal.
- La Ley N° 30364, ha sido calificada de forma positiva por parte del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres; sin embargo, se puede

afirmar que a través de la Ley 30364 y su reglamento, se incorporan mecanismos ineficaces para proteger a las mujeres víctimas de actos de violencia. Para ello se ha procedido a la revisión de casos ingresados a los Juzgados de Familia en Chiclayo, durante el primer año de vigencia de la Ley 30364. Como parte de este análisis constatamos que el procedimiento incorporado en la Ley 30364 para la remisión de los casos denunciados a las Fiscalías Penales tienen resultados alarmantes, así como el procedimiento incorporado para la emisión de medidas de protección. De lo analizado, se concluye que el plazo para emitir medidas de protección en 72 horas no se cumple, y por otro lado no se han establecido acciones concretas que permitan efectivizar el cumplimiento de estas medidas de protección inicialmente dictadas por el Juez de Familia. Asimismo, los casos que se derivan a las Fiscalías Penales, en algunas situaciones se remiten sin los protocolos de pericia física o psicológica y si estos existen no se detalla la información sobre cuántos días de incapacidad se determina por ejemplo para el caso del daño psicológico. De ese modo, se ha demostrado a partir de los casos revisados que la vigente ley aún no garantiza plenamente los derechos de las mujeres víctimas de violencia puesto que incorpora mecanismos ineficaces para su protección; más aún, si desde la interposición de la denuncia, la víctima debe esperar un promedio de siete meses para tener el resultado, siendo en su mayoría de casos una disposición fiscal de archivamiento.

- Frente a los altos índices de violencia contra la mujer en el Perú, necesitamos que las leyes que produce nuestro poder legislativo sean efectivas y que los operadores de justicia estén bien capacitados, coordinando de manera adecuada y puedan responder rápidamente frente a las necesidades de atención de las víctimas. Una triste realidad es que los psicólogos no pueden emitir constancias del nivel de afectación psicológica porque no tienen la acreditación y la capacitación debida, por ello, el mayor porcentaje de las denuncias por violencia psicológica fueron archivadas. Es necesario incorporar una reforma total en las estrategias que nuestro país viene implementando para enfrentar al problema de la violencia doméstica. La investigadora, se atreve a proponer las

siguientes modificatorias: creación de la Dirección Policial en asuntos de familia; la cual debe tener funcionamiento en todas las comisarías del país; incorporar un nuevo currículo educativo en los tres niveles (primario, secundario y universitario), donde contenga una formación integral en valores; modificar el proceso judicial para un caso de violencia familiar, debido devolver competencia a las Fiscalías de Familia, a los Juzgados de Familia, y utilizar el derecho penal como *última ratio*. Asimismo, incorporar un trabajo articulado entre instituciones encargadas como Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial Municipalidades y Ministerio de las Mujer; para descentralizar las atenciones a nivel de los tres órganos de gobierno.

RECOMENDACIONES

1. Incorporar en los tres niveles educativos (primaria, secundaria y universitario) una enseñanza de valores éticos, el irrestricto respeto a la dignidad de la persona, del niño, adolescente y de la familia, de conformidad con la constitución política del estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Perú. Ya que, está demostrado que la educación tiene un rol muy importante como estrategia para combatir este flagelo social; ya que, países como Islandia, Finlandia, Noruega y Singapur, han logrado reducir increíblemente a un 3% su índice de violencia, a nivel intrafamiliar como a nivel social; dando protagonismo a los padres, escuela y estado, para trabajar coordinadamente en un nuevo modelo educativo.
2. Establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar, caracterizados por el mínimo de formalismo y la tendencia a brindar medidas cautelares y resarcimiento por los daños y perjuicios causados así como facilitar la atención gratuita en los reconocimientos médicos requeridos por la policía, ministerio público o poder judicial. Promoviendo la rehabilitación de las víctimas de violencia familiar, de los menores involucrados, adolescentes y adultos mayores; rehabilitación que debe comprender terapia psicológica, educación laboral y reinserción laboral.
3. Promover la participación activa de organizaciones, entidades públicas de nivel central, regional y local e instituciones privadas dedicadas a la protección de niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres y en general a los asuntos familiares, para el desarrollo de actividades preventivas y control sobre la ejecución de medidas cautelares, así como para apoyo y tratamiento de la violencia y rehabilitación de los agresores; con programas y servicios de prevención, atención y rehabilitación, como defensorías de la mujer, hogares temporales de refugio, servicios de consejería, grupos de ayuda mutua, defensorías municipales del niño y del adolescente y servicios de rehabilitación para agresores, entre otros.

4. Capacitar a fiscales, jueces, médicos legistas, agentes de salud, agentes de educación, así como al personal de la policía nacional, las defensorías del niño y el adolescente y servicios municipales para que asuman una función eficaz en la lucha contra la violencia familiar. siendo estas acciones coordinadas por el ministerio de promoción de la mujer y del desarrollo humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Alfaro Reyna, L. M. (2011). *Delitos contra la familia y violencia doméstica*. Lima - Perú: Jurista Editores.
- Ames Cobian, R. L. (1986). *Familia y violencia en el Perú de hoy*. Lima: Comité Peruano de Bienestar.
- Araya, V., & Carmona, A. (17 de Mayo de 2016). PAIS. *Obtenido de Femicidios y violencia intrafamiliar: la débil estructura que protege a las mujeres en Chile*: <http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/17/femicidios-y-violencia-intrafamiliar-la-debil-estructura-que-protege-a-las-mujeres-en-chile/>
- Ardito Vega, W., La Rosa Calle, J., & Marin E., H. (2012). Monografias.com. *Obtenido de Trabajo 89. Violencia Familiar en el Perú* : <http://www.monografias.com/trabajos89/violencia-familiar-en-el-peru/violencia-familiar-en-el-peru.shtml>
- Anderson Roos, J. (1994). *Pobreza y Políticas Sociales en el Perú*. Taller de Políticas y Desarrollo Social (pág. 433). Lima: Perú.
- Anuario Estadístico 2016 - *Policía Nacional del Peru*. (Febrero de 2017). Primera, 318. Lima, Perú.
- Bustamante , O. L. (2014). Tesis para optar el grado de Magíster en Historia. *La violencia conyugal en lima durante las postrimerías coloniales (1795-1820)*. Lima, Lima, Perú: Universidad Pontificia Católica del Perú.
- Caceres Velásquez, A. (2010). *Psicología de la Criminalidad*. Lima- Perú: Fondo Editorial UAP.
- Caro Coria, C. (13 de Diciembre de 2015). LA LEY: *El angulo legal de la noticia*. Recuperado el 29 de Agosto de 2016, de <http://laley.pe/not/2934/-no-esta-claro-que-debemos-entender-por-lesiones-psicologicas-contr-la-mujer-/>
- Cagiggas Arriazu, A. (2000). *El patriarcado, como origen de la violencia*. Revista Monte Buciero, 307.
- Cobbo, R. (1995). *Fundamentos del patriarcado moderno*. Valencia - España: Ediciones Cátedra .

- Corsi, J. (2009). *La violencia hacia la mujer*. Madrid, España. Recuperado el 20 de Febrero de 2017, de <http://tiva.es/articulos/www.corsi.com.ar.pdf>
- Chunga Lamonja , F., & Chunga Chavez , C. (2012). *Los derechos del niño, niña y adolescente y su proteccion en los derechos humanos*. Lima - Perú: Librería Jurídica GRIJLEY.
- CLADEM. (2015). *Balance de la jurisprudencia género sensitiva de Tribunales nacionales en 13 países de América*. Lima - Perú: CLADEM. ORG - Unión Europea.
- Comision Interamericana De Derechos Humanos . (20 de Enero de 2007). *Relatoría sobre los derechos de la mujer*. Recuperado el 03 de setiembre de 2016, de <http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm>
- Corte Suprema De Justicia De La Republica. (2007). *El debido proceso y las líneas cardinales para un modelo procesal en el estado constitucional de derecho*. Revista Oficial del Poder Judicial 1/2 2007 — ISSN 1997-6682, 325.
- Cossio Cabrera, A. Y. (2011). *Violencia familiar desde la experiencia fiscal*. Lima: CMYK Impresiones S.A.C.
- De Lujan Piatti, M. (2013). Tesis Doctoral. *Violencia contra las mujeres y alguien mas...* Valencia, España: Universidad de Valencia.
- Declaracion Universal De Los Derechos Humanos. (s.f.). *Fundación, acción pro derechos humanos*. Recuperado el 18 de Julio de 2016, de [DerechosHumanos.net: http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm](http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm)
- DERECHOSHUMANOS.NET. (s.f.). Obtenido de *Fundacion Accion Pro Derechos Humanos* .
- Diario Semana. (02 de Setiembre de 2016). Obtenido de *La epidemia de la violencia intrafamiliar: van cerca de 50.000 casos en el 2016*: <http://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-intrafamiliar-en-colombia-2016/492198>
- Diaz - Aguado Jalon, M. J. (2002). *Lo Jurídico Del Bulling*. Recuperado el 05 de Setiembre de 2016, de *Teoriís sobre el origen de la violencia*: <http://derechobullying.jimdo.com/t%C3%A9cnicas-de-investigaci%C3%B3n/marco-te%C3%B3rico/teorias-sobre-el-origen-de-la-violencia/>

- Ecuador Inmediato . (15 de Febrero de 2014). Obtenido de http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818756806&umt=victimas_violencia_intrafamiliar_en_ecuador_utilizaran_boton_auxilio
- Ferreira, G. (1992). *Hombres Violentos, Mujeres Maltratadas: Aportes a la Investigación y Tratamiento de un Problema Social*. Buenos Aires - Argentina : Sudamericana.
- Fontela, M. (2008). Mujeres en red. En S. D. Gamba, *Diccionario de estudios de Género y Feminismos* (pág. 147). Buenos Aires - Argentina : Biblos .
- Gambarte Paz, P. S. (Julio de 2012). Tesis. *Violencia infantil intrafamiliar*. Tucumán, Argentina: Universidad de Tucumán.
- Galtung, J. (19 de Agosto de 2013). WHAT: *Conocimiento para inspirar*. Recuperado el 2016 de Diciembre de 08, de <http://whatonline.org/direct-cultural-and-structural-violence/>
- Garcia Olivera, J. (Julio de 2016). *Ley en Derecho*. Recuperado el 17 de Marzo de 2017, de <http://leyenderecho.com/2016/07/12/aspectos-positivos-y-negativos-de-la-ley-no-30364-ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar/>
- Gómez Limón , M. (2008). *Quien no te quiere, no te llora: guía para superar la violencia doméstica*. Madrid: La esfera de los libros.
- Informe Temático 129/2014-2015, C. D. (2015). *Estadísticas sobre violencia sexual y familiar, violencia contra la mujer y feminicidio en el Perú*. Lima - Perú: Congreso de la República.
- Instituto Nacional De Estadística E Informatica. (2015). *Modelos Multivariados para la violencia conyugal, sus consecuencias y la solicitud de ayuda*. Lima - Perú: USAI y MEASURE DHS.
- Instituto de Psicoterapia Integral Riqchariy. (2016). Recuperado el 02 de Enero de 2017, de <http://ipir.com.pe/causas-y-consecuencias-de-la-violencia-familiar/>
- INAMU. (15 de Marzo de 2017). Obtenido de Instituto Nacional de las Mujeres : <http://www.inamu.go.cr/violencia>
- Lerner, G. (1990). *La creacion del patriarcado* . Barcelona - España : Crítica S.A. .
- Ministerio de Sanidad, S. S. (2013). *Estudio para el intercambio de buenas prácticas e instrumentos legales en la lucha contra la violencia de género, entre Noruega, Holanda y España*. Madrid: eea Grand.

- Movimiento Manuela Ramos , & Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán . (2004). *Manual sobre Violencia Familiar y Sexual*. Lima: ONG Manuela Ramos.
- Martin Barranco, M. (2012 de Diciembre de 13). Especialista en igualdad de género. Recuperado el 21 de Agosto de 2016, de *¿Por qué la violencia contra los hombres no es violencia de género?:* <http://especialistaenigualdad.blogspot.pe/2012/12/por-que-la-violencia-contra-los-hombres.html>
- Mendioca Ferreira, S. (1997). *Creación de futuros*. Lima.
- Movimiento Manuela Ramos. (1995). *Alternativas Contra la Violencia Hacia la Mujer*. Lima - Perú: Manuela Ramos.
- Orna Sánchez , O. (2013). Tesis Magister. *Factores determinantes de la violencia familiar y sus implicancias*. Lima, Perú: UNiversidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Oblitas Bejar, B. (2006). *Trabajo Social y Violencia Familiar: una propuesta de gestión profesional*. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- OMS, O. (Setiembre de 2016). *Organización Mundial de La Salud* . Recuperado el 16 de Noviembre de 2016, de Centro de Prensa : <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/>
- Pariasca Martinez, J. (2016). *Violencia familiar y responsabilidad civil. tema ausente en la nueva ley N° 30364*. Chiclayo - Perú: Grupo Editorial LEY & IURIS.
- Pezo Murillo, S. M. (1996). Tesis Magister. *Violencia familiar y maltrato físico de la mujer*. Puno, Perú: Universidad Nacional del Altiplano.
- Pretell Diaz, A. (2016). *Tutela jurisdiccional de las víctimas de violencia familiar y el control difuso de convencionalidad*. Trujillo, La Libertad, Trujillo: Escuela de Post Grado de la Universidad Privada Antenor Orrego.
- Páez Cuba, L. (febrero de 2011). Contribuciones a las Ciencias Sociales. Recuperado el 9 de noviembre de 2016, de <http://www.eumed.net/rev/cccss/11/ldpc.htm>
- Ravalli, M. (2009 de Noviembre de 2009). UNICEF Argentina . *Obtenido de Violencia Doméstica: ya son 19 los superiores tribunales de justicia provinciales que adhirieron a la iniciativa de la Corte:* https://www.unicef.org/argentina/spanish/media_16316.htm
- RT, A. (27 de Enero de 2017). Obtenido de <https://actualidad.rt.com/actualidad/229580-rusia-ley-despenalizar-violencia-domestica>

- Rebeca S. Jara, Y. (2011). *Manual De Derecho De Familia*. Lima - Perú: Jurista Editores .
- Rivadeneira Miño, F. (2011). Tesis. *Violencia Intrafamiliar y sus efectos en el Rendimiento Académico de los estudiantes de Bachillerato*. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Médicas.
- Ruiz Torres , c., & Paredes Pique, S. (2006). *Violencia familiar / violencia sexual / aborto / derechos reproductivos / derechos sexuales*. Lima - Perú: CMP Flora Tristán.
- Suarez Aparicio , V. M. (2013). *Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer* . Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Trotter Ramos, S. (14 de Mayo de 2011). *Un espacio para reflexionar sobre la violencia de genero*. Recuperado el 08 de Ssetiembre de 2016, de <http://tsviolenciadegenero.blogspot.es/1305389693/teorias-explicativas-de-la-violencia-de-genero/>
- Vásquez , R. (2011). Academia.edu. Recuperado el 24 de Noviembre de 2016, de *Violencia Intrafamiliar*: http://www.academia.edu/9915797/Violencia_intrafamiliar
- Villa Arpe, G., & Araya Dominguez Sofi. (2014). Tesis. *Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y tratamiento recibido en el centro de la mujer*. Santiago de Chile, Chile: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- 20 Minutos, Edición España . (28 de Octubre de 2005). Obtenido de <http://www.20minutos.es/noticia/60954/0/mujer/violencia/familiar/>
- Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- Decreto Legislativo N° 1323, que incorpora a la violencia familiar como agravante en el delito de lesiones.
- Código del niño y adolescentes – Jurista Editores. 2016
- Código Penal - Jurista Editores. 2017

ANEXOS

MAESTRIA CON MENCION EN CIENCIAS PENALES

ENCUESTA APLICADA (ANÓNIMA)

Dirigida a Abogados, jueces y fiscales.

TEMA : "Nueva Ley de Violencia Familiar - Ley N° 30364)

INSTRUCCIONES: Lee atentamente las preguntas y marca la respuesta con una **X**. Se agradece su tiempo.

1.- Considera que la actuación policial, es efectiva ante una denuncia por violencia Familiar:

- | | |
|---|--|
| a. Si tienen actuación inmediata deteniendo al agresor. | |
| b. Sólo reciben la denuncia y remiten su informe al Juzgado | |
| c. Son indiferentes a las denuncias por violencia familiar | |
| d. Ninguna de las Anteriores | |

Sugerencias :

2.- Sobre la participación limitativa de las Juzgados de Familia para otorgar medidas de protección:

- | | |
|---|--|
| a. Es adecuado que sólo otorguen medidas de protección | |
| b.- Las M. de protección deben ser otorgadas por el Juzgado Penal | |
| c.- Los Juzgados de Familia no deben intervenir | |
| d.- Los Juzgados de familia deben ser los únicos en conocer todo el proceso de violencia familiar | |

Sugerencias:

3.- Para usted, se justifica la incorporación de nuevo delito, las agresiones físicas y psicológicas por violencia familiar:

- | | |
|--|--|
| a.- Si, era necesario penalizarlo | |
| b.- No, debió seguir tramitándose en proceso especial (Ley N° 26260) | |

Sugerencias:

4.- Usted, que ha conocido procesos de Violencia Familiar, con el nuevo proceso penal, considera que es más eficaz?

- | | |
|--|--|
| a.- Si, es más eficaz. | |
| b.- No, adolece de retrasos en los plazos | |
| c.- Si, la sentencia es efectiva. | |
| d.- No, porque no se llega a una sentencia | |

Sugerencias:

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRIA EN DERECHO CON MENCION EN CIENCIAS PENALES

RECOLECCION DE DATOS:

FISCALIAS PENALES O MIXTAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Actuación en los procesos penales por violencia doméstica"

FISCALIA: _____

DISTRITO: _____

1.- NUMERO DE CASOS RECIBIDOS CON MEDIDAS DE PROTECCION RECIBIDOS:

- EN EL AÑO 2016: _____

- EN EL AÑO 2017: _____

2.- NUMERO DE CASOS ARCHIVADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR:

- EN EL AÑO 2016:

- AGRESIONES PSICOLOGICAS: _____

- AGRESIONES FISICAS: _____

- AGRESIONES FISICAS – PSICOLOGICAS: _____

- AGRESION ECONOMICA: _____

- EN EL AÑO 2017:

- AGRESIONES PSICOLOGICAS: _____

- AGRESIONES FISICAS: _____

- AGRESIONES FISICAS – PSICOLOGICAS: _____

- AGRESION ECONOMICA: _____

3.- NUMERO DE CASOS CON DENUNCIA FORMALIZADA:

- EN EL AÑO 2016: _____

- EN EL AÑO 2017: _____

4.- NUMERO DE CASOS QUE CONSTITUYERON FALTAS Y FUERON DERIVADAS A JUZGADO DE PAZ LETRADO:

- EN EL AÑO 2016: _____

- AGRESIONES PSICOLOGICAS: _____

- AGRESIONES FISICAS: _____

- AGRESIONES FISICAS – PSICOLOGICAS: _____

- AGRESION ECONOMICA: _____
- EN EL AÑO 2017: _____
- AGRESIONES PSICOLOGICAS: _____
- AGRESIONES FISICAS: _____
- AGRESIONES FISICAS – PSICOLOGICAS: _____
- AGRESION ECONOMICA: _____

5.- SOBRE LAS DISPOSICIONES DE ARCHIVAMIENTO, EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, PRECISE LOS MOTIVOS DE ARCHIVO:

- a.- _____
- b.- _____
- c.- _____

6.- NUMERO DE CASOS QUE HAN INCOADO PROCESO INMEDIATO:

- EN EL AÑO 2016: _____
- EN EL AÑO 2017: _____